

Morir en la pobreza

Revista Contralínea. Periodismo de investigación

Desnutrición y muerte por enfermedades curables predominan en la Montaña de Guerrero. Las chozas improvisadas como escuelas son abandonadas por los maestros que no se resignan a la maldición de vivir en la zona más pobre del país. Las mujeres parturientas mueren en las agrestes brechas antes de llegar al hospital más cercano.

Es Cochoapa El Grande, el “subsahara mexicano” que Vicente Fox prometió sacar del atraso y al que ni una promesa cumplió. Contralínea regresa a los municipios más pobres del país, visitados durante la primera mitad del sexenio pasado, donde la miseria, lejos de abatirse, se profundizó.

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / Enviados

Cochoapa el Grande, Guerrero. El macilento cuerpo de Apolinar se revuelve debajo de una frazada percutida. Sus grandes ojos no aciertan a mirar fijamente y, delirante, balbucea que padece “tuberculosis”. Los tablones sobre los que yace crujen constantemente y, por momentos, los espasmos del escalofrío dejan ver su torso esquelético.

Enfermó desde agosto pasado. Ya recibió todas las atenciones posibles en esta comunidad de San Pedro El Viejo: rezos y baño de temascal. Como el de Apolinar es un caso difícil, los principales o mayores ya han echado las cartas “para saber por dónde deben rezar”. Reconocen que en “cualquier ratito puede morir el muchacho”, algo que los entristece, pero no los asombra.

Morir por diarrea, parasitosis, gripe, parto, infecciones en las vías respiratorias o “tuberculosis”, sarampión y mordeduras de víbora de cascabel, es para ellos un designio inescrutable al que todos los habitantes de esta comunidad nu’saavi o mixteca están expuestos. Una semana antes, y después de meses en cama, murió Micaela Rodríguez, de 35 años. El diagnóstico de los principales, o viejos, de la comunidad fue: “tuberculosis”.

Bajo el sol del mediodía y una temperatura que supera los 30 grados centígrados, una docena de niños desnudos, infestados por parásitos, acarrear los adobes que los mayores hacen vehementemente. María, de cinco años, recarga el ladrillo en su enorme y grotesco vientre. Su cuerpo rojizo y silencioso se mimetiza con la pila de adobes y con los adustos y desolados cerros de esta Montaña de Guerrero.

Las palabras de Margarita Martínez Cruz fluyen como de por sí se escucha la lengua nu’saavi: como un susurro que intenta contener la desesperación y el enojo. Entre sus brazos retiene a su hijo Manuel Castillo Martínez. El infante, de dos años de edad, se retuerce sin abrir los ojos. Las fuerzas no le alcanzan siquiera para llorar. Apenas jadea y lanza débiles quejidos por una boca amarillenta y pastosa por la tortilla remojada que su madre le introduce a la fuerza.

A través de Paulino Ruiz, el único habitante de esta localidad que entiende y habla con dificultad el español, Margarita explica que Manuel nació en los campos de Culiacán,

Sinaloa, adonde se trasladaba toda la familia cada año y hasta por cuatro meses para trabajar como jornaleros. Ahora sólo se van su esposo y sus hijos mayores. Dice que el menor casi siempre ha estado enfermo y que “estuvo muerto” tres semanas en un hospital de Culiacán.

El mal actual lo aqueja desde mayo pasado. Como todos los que padecen “tuberculosis” en San Pedro el Viejo, no tiene apetito y su cuerpo flácido ha adquirido una tonalidad blanquecina. El único alimento al que su desmayado organismo puede aspirar, como cualquier persona de esta comunidad, es la tortilla.

Tanto Apolinar como Margarita descartan trasladarse al hospital de la ciudad más cercana. Con incredulidad y hastío responden parcamente que no tienen dinero suficiente para tener tal lujo. Saben que la brecha que los separa del “derecho a la salud” es infranqueable. Y es que, como herida abierta en uno de los pliegues de la montaña guerrerense, San Pedro El Viejo está lejos de todo.

No sólo se trata de la ausencia de carreteras, dinero para pagar el transporte y al menos siete horas de viaje: tampoco hablan español. Antes de morir en el camino o en medio del desprecio de los hospitales, que no cuentan con traductores, prefieren expirar en sus casas “y ahorrarle gastos” a sus familias.

En San Pedro El Viejo hay una solitaria y decrepita “casa de salud” que es visitada por una brigada médica, a decir de los lugareños, cada dos meses. No cuenta con medicinas ni con una sola herramienta médica. Sólo ostenta, a un costado de la apolillada puerta de tablones, un descolorido y polvoriento cartel propagandístico de la Secretaría de Salud en el que apenas se puede leer la leyenda: “Donde tú estás, está tu salud”.

En caso de accidente o enfermedad grave, los “pedreros” tienen que improvisar camillas y contratar una camioneta para trasladar al paciente por una brecha agreste. El tiempo de traslado depende de la temporada del año: entre más humedad haya, más demorará el trayecto. En época de estiaje, salir del corazón de la montaña puede llevar cuatro horas a un conductor habilidoso. En temporada de lluvias, el mismo recorrido supera las nueve horas. Durante agosto y septiembre no hay manera de transitar por los sinuosos caminos montañosos que se convierten en fangos de barro.

Los habitantes de San Pedro El Viejo deben contratar por 3 mil 500 pesos una camioneta que los saque de sus comunidades. A eso se suma el pago de alimentos en Tlapa u Ometepe de los acompañantes del enfermo. Ni pensar en alquilar algún cuarto para pasar la noche. Con naturalidad aceptan dormir, encobijados, en las calles, parques y portales de los palacios municipales. Seguramente deberán comprar la medicina que requiere su paciente.

“Por eso estos enfermos ya no salen. Porque además saben que se van a marear en el camino, no van aguantar y se van a morir. Harán gastar a sus familiares para nada y harán que gasten más por el traslado del cuerpo”, explica Paulino Ruiz.

Cruz Verde

El comisario de esta comunidad, Teodoro Amado, señala una choza carcomida y desvencijada. Muestra la “escuela” de los niños de la parte más alta y fría de la Montaña. Del paisaje de coníferas apenas resalta la cabaña abandonada.

Sobre la puerta principal, los pobladores han recargado decenas de adobes que -dicen orgullosos- serán para la construcción de una “casa de médico”. A través del intérprete Florentino Aguilar, agregan que en este pueblo ningún gobierno ha realizado una sola obra social. Sus espacios comunitarios los han construido con sus propias manos.

Por ello, la iglesia, la comisaría y la “escuela” están modestamente construidas con adobe, tablones y láminas de cartón. Como sus vecinos de San Pedro, los de Cruz Verde sólo comen tortilla, salsa, yerbas “y a veces frijolitos”.

Contralínea visitó esta comunidad en diciembre de 2003 (ver número 23). El último maestro que dio clases en la “escuela” se había marchado hacía tres meses. Entonces los pobladores mostraron el interior de su “plantel” ante los rostros jubilosos de los niños de entre seis y 10 años que corrieron por sus cuadernos y se formaron para “hacer honores a la bandera”.

Hasta ahora los hombres la vuelven a abrir. Como los adobes prácticamente han clausurado la puerta, desclavan dos costeras y descubren polvorientos papeles que se deshacen al tacto, paredes cubiertas por telarañas y libros carcomidos. Pero ahora apenas hay unos cuantos niños y nadie solicita, como entonces lo hicieron, instrumentos musicales para una banda infantil. La mayoría partió, junto con sus padres, a trabajar a los campos del municipio de Culiacán, Sinaloa.

“No pueden irse a trabajar aquí cerca, como a Ometepec o a Tlapa, porque no dejan trabajar a los niños. Allá en Sinaloa sí lo permiten”, explica Teodoro Amado.

Dos Ríos

El pueblo se reúne a la llegada de cualquier visitante. Dialogan con los fuereños como si los hubieran estado esperando por años. El arribo de forasteros provoca que a través de un altavoz -ya cuentan con energía eléctrica- se realice una convocatoria que termine por reunir a todos los hombres adultos y algunas mujeres. Pareciera que esperar es la principal actividad de quienes en esta comunidad de la parte más calurosa y tropical de la Montaña no han partido a la pizca de frutos exóticos en Sinaloa o Baja California.

En los pueblos montañosos nadie habla por sí mismo ni para beneficio particular. Todos están de acuerdo en lo que necesitan y cualquiera puede decir a los visitantes sus principales carencias, pero no hablan hasta “hacer reunión”. El comisario Modesto Esteva Cano inicia la exposición que termina en interminables diálogos, donde por momentos todos hablan atropelladamente.

En esta comunidad, cercada por dos ríos que en época de lluvias no les permite salir, no hay agua potable. Carecen de casa de salud y reciben la visita de un médico cada 15 días. Dicen que cuando el médico no está y algún integrante de la comunidad cae enfermo, comienzan los rezos. Denuncian que los maestros sólo dan clases tres días consecutivos y luego se ausentan por 15 o 20. No cuentan con biblioteca y, como a los demás pueblos montañosos, la pregunta les causa asombro y sonrisas.

A este pueblo sí llegan, aunque irregularmente, los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Cincuenta mujeres reciben 290 pesos cada dos meses del programa Oportunidades; sin embargo, lo reclaman más de 100. En el Procampo sólo están inscritos ocho padres de familia de un total de 150.

A diferencia de la última visita de Contralínea, ahora hay al menos una tienda en la comunidad. Se consumen refrescos y, sobre todo, cervezas. La llegada de la comida chatarra no los hizo menos pobres, pero los embases de plástico se acumulan como basura a la orilla del camino.

Los más pobres

Luego de un sexenio de promesas, estas comunidades siguen encabezando la lista de las más pobres del país. Los nu'saavi de la Montaña se sienten defraudados porque poco o nada se cumplió. Ya eran las más pobres del país cuando pertenecían al municipio de Metlatónoc. Ahora que son parte de Cochoapa El Grande también encabezan la lista de las paupérrimas del país, según el Índice de Desarrollo Humano del Consejo Nacional de Población.

El territorio de Cochoapa El Grande es de 690 kilómetros cuadrados a una altitud promedio de mil 605 metros sobre el nivel del mar. Lo habitan 15 mil 600 personas distribuidas en 120 comunidades; el 76 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta; el 94 por ciento de las viviendas no cuenta con drenaje; el 61 no tiene energía eléctrica y el 87 por ciento de las familias obtiene ingresos inferiores a los dos salarios mínimos.

El decreto 588 mediante el cual se creó el municipio de Cochoapa El Grande fue publicado por el gobernador René Juárez Cisneros en el periódico oficial del gobierno del estado el 10 de diciembre de 2002. La designación del primer ayuntamiento se realizó el 12 de abril de 2005. Como presidente resultó Santiago Rafael Bravo, antiguo opositor a la creación del municipio.

A decir de los lugareños, no es común encontrar al presidente municipal en la localidad. Transportistas, policías, regidores, síndico y secretario de gobierno reconocen que Santiago Rafael casi nunca despacha en la oficina de la presidencia. Todos coinciden en que el presidente pasa semanas en Chilpancingo antes de visitar por algunos días la cabecera municipal que dice gobernar.

El síndico Guillermo Flores Lorenzo admite que las escuelas de esta cabecera no son suficientes para atender siquiera a los más de mil niños de esta localidad principal. Oficialmente quedaron fuera 120 “porque ya no hubo cupo”, pero estima que el número es aún mayor porque “muchos ni siquiera se registraron y otros estaban con sus padres en Sinaloa cuando fueron las inscripciones”.

Por supuesto, señala que en la mayoría de las comunidades que dependen de esta cabecera no hay escuelas y no hay cifras sobre los niños que realmente se quedan sin estudios. Reconoce que son la mayoría.

Flores Lorenzo también dice que el servicio médico no tiene la capacidad de atender la demanda ni de la cabecera ni de las demás comunidades dependientes. Solicita recursos económicos para la creación de una clínica de especialidades en ginecología y pediatría. Sin embargo, lo que el ayuntamiento construye -a iniciativa del presidente municipal- es un fastuoso palacio que tendrá un costo de entre 12 y 15 millones de pesos.

Una misión de la congregación de monjas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, encabezada por Silvia Rodríguez Aguilar, ofrece servicios de salud y de educación abierta. Las monjas tratan de brindar las atenciones que los tres niveles de gobierno municipal no pueden ofrecer.

Los niños de San Pedro El Viejo observan silenciosamente y con curiosidad a los fuereños que acarrear tabiques y preparan mezcla de cemento, grava y arena. La cuadrilla a cargo del arquitecto José Vélez construye la primera obra en la localidad impulsada por los gobiernos municipal y estatal: una iglesia que ya se erige imponente sobre las insignificantes chozas de tejamanil y láminas de cartón.

Al cierre de esta edición una brigada médica móvil de la jurisdicción de la ciudad de Tlapa se dirigía a la comunidad asolada por la “tuberculosis”. El médico a cargo del grupo, Gerardo de los Santos, reconoce que es urgente la creación de un hospital en esta zona de la Montaña.

En Cochoapa sólo hay derecho a la muerte

Los paupérrimos pueblos de la Montaña de Guerrero agonizan sin derecho a salud, educación ni alimentación; mucho menos a justicia, vivienda digna o vestido. Para ellos no hay instituciones ni programas que los incorporen a los servicios que supuestamente garantiza la Constitución a todos los mexicanos.

El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que para la población de la zona más pobre del país, mayoritariamente indígena, no hay “espacios” que le permitan acceder a los derechos humanos. “Hay una ausencia de autoridad y una descomposición de las instituciones por la corrupción y la impunidad”.

Agrega que los nu’saavi, me’pha, nahuas y mestizos de la Montaña no saben que existen las secretarías de Asuntos Indígenas y de la Mujer (ambas del gobierno del estado de Guerrero).

“Y si lo saben, piensan: ‘Qué bueno que existan pero para mí eso no tiene ninguna incidencia ni significa nada porque yo sigo enfermo y no tengo acceso ni a una pastilla, un suero antialacrán, ni a que me tomen la presión o me pongan un termómetro para saber cuánto tengo de temperatura’. Para ellos el derecho a la salud es un petate en la tierra, que es el derecho a la muerte.”

El fundador de la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort y que trabaja con las comunidades de la Montaña y la Costa Chica, dice que la miseria se ha convertido en una característica inevitable de quien vive en las comunidades de Cochoapa El Grande, Metlatónoc o Alcozauca.

“El problema histórico de la Montaña es esta pobreza tan profunda que está en el corazón de los pueblos como si fuera una segunda naturaleza. Cuando decimos montañero, pensamos en la persona andrajosa, que lleva más de una semana sin poder bañarse, que no sabe qué es comer una pierna de pollo. Esto en lugar de revertirse se va profundizando. La gente se va ahogando en la pobreza, en el olvido, en la discriminación, en la violencia.

“Eso en realidad es un drama que en pleno siglo XXI no es tolerable en nuestro país pero que desgraciadamente no se está revirtiendo. La descomposición, empobrecimiento y deshumanización es lo que florece en esta escarpada Montaña.”

Clasificación de la pobreza extrema

El Conapo confirma las condiciones de miseria en que viven millones de mexicanos distribuidos en mil 251 municipios, más del 50 por ciento del total. A pesar de las promesas, durante el gobierno de Fox no sólo no hubo mejoras en las paupérrimas comunidades indígenas guerrerenses, sino que la pobreza se agudizó.

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos

Los pueblos de Cochoapa El Grande concluyeron el sexenio de Vicente Fox tal y como lo iniciaron. A pesar de las fotos que el ex presidente se tomó en algunas comunidades paupérrimas del país -a las que llegó y salió en helicóptero como una muestra del “decidido combate a la pobreza”-, los indígenas nu’saavi o mixtecos de la Montaña mantuvieron los mismos índices de marginación, según datos oficiales.

El informe Índices de Marginación 2005, elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación, señala que Metlatónoc, el más pobre del año 2000, mejoró sus indicadores y pasó a ser el sexto más pobre del país. Pero omite decir que las comunidades que ahora conforman Cochoapa El Grande, el más miserable de México, hace cinco años pertenecían a Metlatónoc. El “abatimiento” de la miseria en este municipio se hizo cercenando a los más desarraigados.

Así, el Informe concluye que de 2000 a 2005 hubo una “reducción generalizada en las condiciones de marginación de la población de México” y “un avance de casi 15 por ciento en la disminución de la marginación a nivel nacional”.

Sin embargo, el estudio del Conapo reconoce que en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde viven 10.9 millones de personas que representan el 10.6 por ciento de la población nacional, el índice de marginación es “muy alto”.

“Tan sólo en Guerrero, el estado con mayor marginación en el año 2005, 20 por ciento de su población de 15 o más años de edad es analfabeta y 36 por ciento no terminó la primaria; más de uno de cada cuatro habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario, seis de cada 100 habitantes reside en viviendas sin energía eléctrica, tres de cada 10 sin agua entubada, uno de cada tres con piso de tierra, y más de la mitad ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento [...]”

El estudio reconoce tres entidades con nivel de marginación “muy alto” (Guerrero, Chiapas y Oaxaca); ocho con “alto” (Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán y Yucatán); siete “medio” (Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Tlaxcala, Querétaro y Sinaloa); 10 “bajo” (Quintana Roo, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California Sur, Colima, Sonora, Jalisco y Aguascalientes), y cuatro “muy bajo” (Coahuila, Baja California, Nuevo León y Distrito Federal).

Sin embargo los “avances” en el combate a la marginación se reducen si se revisan los resultados a nivel municipal. Prácticamente ningún municipio de los estados con marginación “muy alto” dejó de ser pobre y se mantienen en la miseria. De los 81 municipios de Guerrero, 37 conservan grado de marginación “muy alto” y 36 “alto”;

sólo tres “medio” y cinco “bajo”. Ni uno sólo puede considerarse con un nivel de marginación “muy bajo”.

La situación de Chiapas y Oaxaca es similar. La primera entidad cuenta con 118 municipios. De ellos, 47 tienen un nivel de marginación “muy alto” y 64, “alto”. Apenas cinco son calificados con “medio”, uno con “bajo” y otro con “muy bajo”. De los 570 municipios de Oaxaca, 173 son designados con “muy alto”, 290 con “alto” y 73 con “medio”. Sólo 24 y 10 con “bajo” y “muy bajo”, respectivamente.

Más del 50 por ciento de los municipios del país se encuentran en la pobreza y pobreza extrema. De los 2 mil 454 municipios del país, 365 tienen un grado de marginación “muy alto” y 886 “alto”; 501 “medio”, 423 “bajo” y 279 “muy bajo”.

El Informe también señala que de 2000 a 2005, 56 municipios de varios estados de la República cambiaron de grado de marginación de “muy alto” a “alto”. Pero no contempla a comunidades paupérrimas que dependen de cabeceras ricas, pues al promediar el índice municipal, resulta que no hay marginación. Tal es el caso de los pueblos rarámuris o tarahumaras que dependen del municipio de Chihuahua.

El Conapo reconoce que los pueblos indios constituyen la población que más miseria padece en México. “Los indígenas constituyen un grupo poblacional históricamente excluido del desarrollo nacional y del disfrute de sus beneficios. Las raíces estructurales de la marginación indígena están determinadas por una diversidad de factores de índole económica, social, política y cultural que atrapan en la pobreza y el rezago demográfico a millones de indígenas diseminados en gran parte del territorio nacional”.

De los 317 municipios cuya población es casi totalmente indígena, 196 tienen un grado de marginación “muy alto”, 119 “alto” y dos “medio”. Ni uno solo está calificado con “bajo” o “muy bajo”.

El municipio más pobre del país, de acuerdo con los datos del Conapo, es Cochoapa El Grande, Guerrero, habitado por 15 mil 572 personas. Su índice de marginación alcanza 4.49835. El informe de 2000 de la oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación señalaba al municipio guerrerense de Metlatónoc como el más marginado. Ahora ocupa el número seis con un índice de 3.08927. Sin embargo, antes comprendía a las comunidades de Cochoapa El Grande. Es decir, los más pobres al inicio del gobierno de Vicente Fox siguen siendo los más pobres al inicio del de Calderón.

De acuerdo con el Informe, el segundo municipio más pobre del país es Sitalá, Chiapas, con un índice de marginación de 3.35511. En la demarcación viven 10 mil 246 personas. Mientras, el tercero es Del Nayar, Nayarit, con 30 mil 551 habitantes y 3.25070 de índice de marginación. El oaxaqueño Coicoyán de las Flores es el cuarto más pobre. Está habitado por 7 mil 598 indígenas. El indicador de marginación asciende a 3.13604.

El quinto lugar es Acatepec, Guerrero, con un índice de 3.10942 y 28 mil 525 habitantes. San Juan Petlapa, Oaxaca, ocupa el séptimo con 2 mil 717 personas y 3.03863 de índice de marginación.

El octavo lugar lo ocupa Batopilas, Chihuahua, cuyo índice es de 3.02906 y está habitado por 13 mil 298 personas, principalmente indígenas rarámuris. El noveno es el guerrerense José Joaquín de Herrera con 14 mil 424 habitantes y un índice de 2.93238, y el décimo es Mixtla de Altamirano, Veracruz, con 2.92723 y 9 mil 572 habitantes.

El informe Índices de Marginación 2005, elaborado por el Conapo con base en los resultados definitivos del II Censo de Población y Vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre del mismo año, es el estudio más reciente sobre la pobreza en México.

El índice de marginación se calcula a través de nueve indicadores o “formas de exclusión”; además, mide la “intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas”.

Los nueve indicadores están agrupados en cuatro rubros: educación, vivienda, ingresos monetarios y distribución de la población. Se miden de acuerdo con la obtención de los siguientes porcentajes: población mayor de 15 años analfabeta y que no ha concluido la educación primaria; viviendas sin agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario, con piso de tierra, sin energía eléctrica y hacinamiento; población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos, y población en localidades con menos de 100 mil habitantes.

Es notoria la ausencia de indicadores de salud y alimentación. El estudio no ofrece datos sobre las personas que tienen acceso a consultas médicas y medicamentos, tampoco habla sobre la mortandad infantil ni el índice de mujeres muertas antes durante y después de parto. Además no hay información sobre la desnutrición ni las fuentes de alimentación a las que tienen acceso los pobladores. Por ello se encuentra en desventaja frente al publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios (Contralinea 73).

Cochoapa El Grande

- 689.80 kilómetros cuadrados de la Montaña de Guerrero, (sureste del estado)

- 15 mil 572 habitantes

- Más del 98 por ciento de ellos

son indígenas nu'saavi

- Primer lugar nacional de

marginación

- Población analfabeta mayor de 15 años: 75.81 por ciento

- Población mayor de 15 años sin

primaria: 87.69 por ciento

- Viviendas sin drenaje ni servicio sanitario: 93.72 por ciento

- Viviendas sin energía eléctrica: 60.78 por ciento

- Viviendas sin agua entubada:

57.67 por ciento

- Población que vive hacinada:

82.80 por ciento

- Viviendas con piso de tierra:

95.46 por ciento

- Población ocupada con ingresos menores a dos salarios

mínimos: 86.60 por ciento

Publicado: Marzo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 75

Países pobres nuevas colonias de EU

Los países cuya economía está bajo el control de los organismos financieros internacionales son nuevas colonias: carecen de política hacendaría, política exterior, soberanía alimentaria y política de defensa nacional

Nydia Egremy / Julio César Hernández, fotos

Al examinar las causas de la pobreza en México, Gian Carlo Delgado, doctor en economía ecológica, asegura que el panorama es alentador para la lógica del Banco Mundial, pues en 2006 disminuyó ligeramente la pobreza extrema y se confirmó que los programas sociales del gobierno tienen cada vez más un carácter “pro-pobres”.

Aunque el Banco Mundial (BM) reconoce que la pobreza en México es grave, no se planea resolver el problema de modo estructural, sino “aliviarlo”. Sin embargo, el problema podría agravarse en 2008 por la liberalización del frijol en el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El escenario empeora para los pobres del país tras la suspensión del programa gubernamental Procampo. Gian Carlo Delgado estima que por ello el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estructuró el programa de apoyo monetario condicional Oportunidades y evaluó Procampo (ME-T1017).

Al mismo tiempo, el BM hizo lo suyo con el Programa Contigo y asignó en línea una serie de préstamos y “asesorías técnicas”, como: Poverty Programmatic II (2005); Rural Poverty Analysis (2005); Poverty Programmatic III (2006); el Indigenous Community Loan (2007); Social Development Policy Loan (Contigo) (2008) o Health for the Poor (2007-2008).

Estrategia transexenal

Gian Carlo Delgado, autor del estudio Estrategia de asistencia de país, una estrategia colonial del Banco Mundial, al tratar el caso de la evaluación de México en 2007, afirma que un mecanismo que sintetiza lo que él denomina “esquema colonial” de los organismos financieros internacionales, son las Estrategias de Asistencia de País (CAS por sus siglas en inglés) que elabora el BM para evaluar la actuación y progreso del país “anfitrión” y de otros actores con los que establece sinergia, como el BID, para el caso de América Latina.

Más que un “plan de asistencia”, las CAS son el anteproyecto que debe seguir el gobierno local en los próximos años bajo un protocolo de condicionantes, cláusulas de compromiso, “recomendaciones y sugerencias”, hasta simples “observaciones” y “ofrecimientos”. La advertencia es insoslayable: el BM advierte que: “...equivocaciones en estas áreas [las recomendadas] desencadenarán un cambio en el programa del BM hacia un escenario ‘desventajoso’ de exposición reducida”.

En México, las CAS “pertinentemente –señala Delgado- no coinciden temporalmente con los períodos del gobierno federal”. Con eso, los organismos se aseguran la transición de sus políticas y lineamientos entre uno y otro gobierno. La nueva

administración recibe del BM las Notas de Política correspondientes y se prepara una nueva CAS que operará hasta los primeros dos años de la siguiente administración.

La actual CAS del país abarca hasta el 2008, y las “Notas” serán entregadas durante este año o principios del próximo y operará en 2009 y hasta 2012. Estima Delgado que para las Notas del año en curso se gastarán 157 millones de dólares y para la CAS de 2009, la suma asciende a 250 millones de dólares.

En enero pasado, al evaluar el actual CAS 2005-, el BM “confirmó el avance en varias materias conforme a sus lineamientos”, con lo que el economista confirma “nítidamente la amplia injerencia del BM en la política nacional”.

Agio y pobreza

Anticipa Delgado, también miembro del programa “El Mundo en el Siglo XXI” de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, que el BM propone para el futuro próximo préstamos anuales de entre 800 y mil 700 millones de dólares (mdd) en cuatro “pilares de acción”: 1) reducir la pobreza y la desigualdad; 2) promover la sustentabilidad medioambiental; 3) incrementar la competitividad de México; y fortalecer las instituciones del país.

Además de los préstamos, la banca internacional ofrece actividades de asesoría. De acuerdo con Gian Carlo Delgado, en el caso del BM, esos servicios ascienden al 40 por ciento del monto total de recursos que recibe el país. “México paga, o mejor dicho, los contribuyentes pagan ese porcentaje para que se le diga al gobierno qué debe hacer, no sólo con el restante 60 por ciento del dinero que se le presta, sino con su política en general puesto que, para ser sujeto de préstamo, el país debe cumplir con una serie de condiciones, por ejemplo, las macroeconómicas”.

En ese sentido, México vive un momento particular en su relación con el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues el gobierno de Vicente Fox pagó, en septiembre de 2006, casi 56 por ciento de la deuda al BM (en particular su división de “reconstrucción” o IBRD) y un porcentaje parecido ante el BID. Esos pagos sumaron unos 9 mil mdd y ello redujo significativamente el yugo condicionante del BM y del BID sobre el país.

En lugar de desligar paulatinamente al país de los lineamientos políticos de esos “organismos internacionales”, tal y como lo ha hecho Ecuador, “la decisión del gobierno de Calderón es la de rápidamente (re)endeudar más al país”, señala el especialista. Los primeros pasos regresivos son categóricos. Por un lado, con los mil 600 mdd que México recibirá del BM para 2007 y 2008, y con la firma en febrero pasado del memorando de entendimiento con el BID para obtener préstamos por un total de 3 mil 900 mdd (se incrementarían hasta por 8 mil mdd en los próximos seis años) para construir infraestructura.

Con ello, el país volvería a aumentar considerablemente su deuda actual con el BM de 5 mil 734 mdd y con el BID de 5 mil 465 mdd. Por esa razón, el analista considera “irónico aunque previsible”, que Calderón declarara durante la firma del memorando con el BID, que “la fortaleza de la economía mexicana se refleja en la capacidad de recibir préstamos de organismos internacionales”.

Tal suposición sobre la fortaleza económica olvida que México ha tenido capacidad de pago ante el BM y el BID –a partir de asfixiar aún más al grueso de la población–, pese a haber sido sujeto de fuertes transferencias de excedentes como la desnacionalización de la banca, y que hasta 2006 se ubicó como uno de los principales “clientes” –o deudores– de esos organismos.

Agua y agro el caos

La apertura a ultranza del agro mexicano (que arrancarían “aceitado” con dos préstamos del BM: AGSAL I y II), la liberación del precio del maíz y la reciente debacle alrededor del precio de la tortilla, demuestran lo erróneo y peligroso del tema. Tanto así que Humberto López, funcionario del BM para América Latina, señaló el 6 de febrero pasado que sí, efectivamente “se les había pasado la mano”, no obstante era “injusto convertir a la institución financiera en el chivo expiatorio de la pobreza”.

El rostro dramático de la pobreza se asoma en la falta de infraestructura hidráulica. La reforma a la Ley Nacional de Agua de 2004, abrió indiscriminadamente el sector hídrico a la inversión privada nacional e internacional. El BM, en cambio, observó esta medida el 8 de enero pasado como un “progreso sólido”.

El progreso para los millonarios proyectos del BM de descentralización se traduce en la puesta en marcha del Irrigation & Drainage Modernization por 300 mdd (2004) y el Modernization Water & Sanitation Sector por 25 mdd (2006). A éstos se sumarán préstamos para el Integrated Management of Basins & Aquifers (2007); el Water Policy Development (2008) y el Water Rights (2008). Se incluye también una “asesoría” en Water Programmatic III (2007-08). Todos al parecer buscarán su ingerencia directa en el acceso, gestión y usufructo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos del país.

Y mientras el BM prepara una asesoría para estimular el comercio agro-industrial y la electrificación del campo (sólo útil a las agroindustrias, no a la población que no tiene con qué pagar el servicio) para el periodo 2007-08, la conclusión del investigador es tajante: “parece calcularse una explosión social de orden mayor, sobre todo en el campo; cuando el país estalle –y de seguir la tendencia, seguro estallará tarde o temprano–, la oligarquía mexicana se piensa en el “primer mundo”, justo ahí en donde está la clase dominante metropolitana con la que se siente más identificada.

Entonces, el negocio de explotar y condenar a la miseria (en el mejor de los casos) a millones de mexicanos, habrá terminado. De ser así, la reconstrucción nos tocará a los que nos quedamos”.

Luis H. Alvarez Burócrata indigenista

El nombramiento del viejo panista Luis H. Álvarez al frente de la CDI es un asomo de apatía y olvido del gobierno calderonista, pues “los indígenas no existimos en la agenda de este gobierno”, denuncian organizaciones no gubernamentales.

Paulina Monroy

En un comunicado del 9 de febrero pasado, el subcomandante Marcos describe a Luis H. Álvarez como: “antiguo e inútil comisionado para la paz con Fox, y burócrata indigenista con Calderón”.

Sin embargo, el presidente de la república colocó a Luis H. Álvarez por “su amplio conocimiento” al frente de las políticas federales en materia indígena.

Como presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), el viejo panista creó incertidumbre y descontento. Los dirigentes indígenas coinciden: luego de su fracaso como comisionado para la paz en Chiapas, no ofrece más que el regreso del antiguo indigenismo mexicano.

Juan Anzaldo Meneses, del Centro Ce- Acatl explica: “Álvarez se distinguió por tener bajo perfil para darle seguimiento al problema en Chiapas. Durante seis años no hubo un solo contacto, por el contrario, el distanciamiento se hizo cada vez mayor. Se dedicó a entregar recursos a comunidades para que abandonaran la causa zapatista. Tiempo después, estas mismas comunidades reconocieron el error que cometieron, pues no vieron resueltas sus necesidades más inmediatas y fueron usadas como un arma en la estrategia de desgaste del gobierno federal.”

Meneses, miembro del Congreso Nacional Indígena, prevé: “Álvarez va a continuar este método de compra de voluntades por la vía de despensas, pero con el nulo interés por resolver las causas que originan los conflictos indígenas”.

Abelardo Torres, de la organización Nación Purépecha Zapatista, opina: “fiel a la doctrina del PAN, Luis H. Álvarez no hizo nada para mejorar la relación del gobierno con los pueblos indígenas. Su nombramiento es un ejemplo de que el PAN no quiere atender de manera seria el trabajo con los pueblos indígenas. Los pueblos no requieren de dádivas o políticas.”

A cargo de la Unidad de Planeación de la CDI está el indígena purépecha Prisciliano Jiménez, ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y partidario del entonces candidato Felipe Calderón, en su estado natal. Cuando se habló de la posibilidad de que en Jiménez recayera la dirección del organismo, agrupaciones indígenas lo calificaron como “un auténtico desconocedor de los problemas indígenas”.

“Le hace falta mucha experiencia, sobre todo una visión de carácter nacional. No tiene trayectoria de atención, ni la experiencia para lo que las comunidades exigen que se les reconozca”, considera Torres.

Eliseo Eugenio Gómez, originario del pueblo mixe y presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo en Oaxaca, indica: “Álvarez es la

persona menos adecuada para atender las demandas de los pueblos indios porque no tuvo la capacidad para desempeñar un buen papel en el conflicto chiapaneco”.

Bajo ese mismo tenor, Pedro González Gómez, miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, juzga: “cubrirá una plaza burocrática para simular atención y trabajo con los pueblos indígenas”.

Manuel Iñiguez, integrante de la Coordinación Nacional de Pueblos Indios (Cenpi), señala: “con la designación del nuevo titular de la CDI nos olvidan, dicen que hay cambios en el desarrollo de los pueblos indios, pero la persecución, la masacre, el encarcelamiento, el abuso no ha cambiado”.

Por el contrario, el sacerdote Javier Ávila, activista y presidente de la Comunidad Tarahumara de Derechos Humanos, considera que Álvarez es una figura importante por su compromiso con la sociedad civil. “Lamentablemente un puesto como el asignado supone movilidad por la diversidad de comunidades a las que la Comisión está llamada a servir, lo que le va a significar una carga muy pesada.

“El problema no fue tanto de Álvarez, sino de la negligencia del gobierno federal en negar lo que ya estaba aceptado en los Acuerdos de San Andrés. Estoy totalmente de acuerdo con el EZLN en que el problema no es del EZLN. Que regresen al diálogo, el diálogo lo rompió el gobierno federal por su terquedad, necedad y cobardía. Creo que Luis intentó recuperar el diálogo”.

CDI: Asistencialismo

Con el argumento de que el entonces Instituto Nacional Indigenista ya había cumplido su función y de que era tiempo de modificar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, se creó en 2001 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como “un órgano dedicado a coordinar -y no a operar como lo hacía el INI- las políticas hacia la población que atiende”.

No obstante, la CDI no ha sido capaz de responder a las demandas indígenas. “Sentimos que con el INI había más posibilidades. Hace falta presupuesto, recursos humanos, económicos y técnicos que los pueblos indígenas requieren”, enuncia Abelardo Torres, de Nación Purépecha Zapatista.

Eliseo Eugenio Gómez, presidente de la Ucinozoni, coincide: “Xóchitl Gálvez tuvo un cargo más o menos aceptable, pero también tuvo sus fallas cuando le dio juego al foxismo”.

Fortino Hernández, zapoteco y miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la ciudad de México, resalta: “La CDI se dedicó al asistencialismo: caminos, drenaje, agua y luz para las comunidades más pobres”.

A decir de Pedro González Gómez, integrante de la misma organización, “en la oferta política de este gobierno no aparecen los indígenas, “nos mencionan como ‘esos vulnerables’”.

“El Estado ve en los pueblos indígenas a grupos imposibilitados para responsabilizarse de su destino. Desde luego todo programa que venga con esta visión no contribuye al desarrollo y ciertamente hemos sido puestos en un estado de vulnerabilidad, pero eso no quiere decir que nuestros valores y principios no puedan ser ventajosos para México”, reitera.

En opinión de Juan Anzaldo Meneses, del Centro Ce- Acatl, la desaparición del INI y la creación de la CDI significó “un cambio de membrete y despilfarro económico, pero en el fondo se siguieron aplicando políticas indigenistas e integracionistas con esta idea de dosificar la lucha indígena, que ha sido reconocida por muchos sectores como una propuesta de vanguardia”.

Jorge Alberto González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, admite que luego de la transformación del INI en CDI, las tareas del organismo son limitadas: “Ya no ejerce programas, su función es muy reducida en el ámbito de políticas públicas para pueblos indígenas porque sus tareas están relacionadas con gestoría, diseño, pero no en la incidencia para la aplicación de las mismas. Entonces el Congreso disminuyó las facultades que ya tenía y por eso la Comisión sigue ahí como si no estuviera”.

Javier Ávila Aguirre, de la Comunidad Tarahuamara de Derechos Humanos, sugiere que el papel de la CDI deberá ser más proactivo: “Para que se le dé a los pueblos indígenas el lugar que merecen”.

Extinción y segregación

Para los representantes indígenas, la visión de derecha del PAN excluye a los pueblos indios condenándolos a la desaparición: “Mientras buscamos el reconocimiento de nuestros derechos, Calderón actúa de acuerdo a los preceptos de la globalización para enterrar la diversidad cultural”, reprobaba González Gómez.

“Hay una política indígena, pero desde la homogeneización de acabar con los pueblos desde su diversidad. Ya no somos dueños de la tierra, ello con la intención de volvernos migrantes, consumidores o mano de obra barata. A eso responde lo que el presidente ofertó en Europa: la mano de obra sin valor porque al gobierno les somos un estorbo, una negación”, expone.

A propósito, Eliseo Eugenio Gómez, presidente de la Ucizoni, afirma: “El PAN viene a rematar todo, porque es un gobierno de gente con dinero. Para un gobierno panista no existen los pobres”.

De acuerdo con el académico, Jorge Alberto González, el PAN “no se ha caracterizado por su sensibilidad para los temas sociales, mucho menos los asuntos indígenas.

“No se le puede ‘pedir peras al olmo’. Por desgracia, los rezagos son muchos y los indígenas se ven obligados a abandonar sus tierras para buscar mejores condiciones, es entonces cuando pierden el sentido de comunidad. Y sólo con políticas de atención a los 60 millones de pobres que hay en México –no únicamente a pueblos indígenas– se va evitar esa necesidad de desertar de sus comunidades”.

Abelardo Torres, de Nación Purépecha Zapatista, observa: “No hay interés, pero sí un indicativo de racismo en contra de los pueblos indígenas. No vemos la intención de mejorar nuestra situación de vida.”

Desamparo como garantía

En junio del 2003, Rodolfo Stavenhagen, entonces relator especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los indígenas en México, dijo: “El gobierno debe prestar atención a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas, que se revise a fondo el sistema de justicia indígena, que se desarrolle una política económica y social integral en su beneficio y que se examine la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos por el reconocimiento y respeto a sus derechos”.

Desde su aprobación, la modificación decretada en el 2001 –que incluiría los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y garantizaría la libre autodeterminación de los pueblos indios–, provocó la reprobación de representantes indígenas y del propio EZLN. En el análisis Observatorio Ciudadano de Pueblos Indígenas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el organismo describe así dicha disposición:

“El nuevo contenido del artículo segundo presenta problemas serios frente a los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la OIT, la iniciativa Cocopa y la lógica misma de la Constitución. Enuncia en un primer apartado el reconocimiento de la autonomía para los pueblos indígenas y una serie de garantías importantes, aunque provistos de dificultades y ambigüedades que entorpecen su aplicación”.

Al respecto, el académico Jorge Alberto González advierte: “La caución que el Estado debe guardar para los derechos indígenas está estancada porque la reforma constitucional de 2001 no ha sido aprovechada aplicando todo el rigor de las disposiciones constitucionales”

Aunque reconoce la suficiencia de las leyes para asegurar las condiciones de vida del sector indígena, el académico comenta: “El derecho a la autonomía, que implicaría una ‘remunicipalización’ de las entidades, no se ha respetado. Por otro lado, las políticas públicas han desatendido las condiciones mínimas de desarrollo de los pueblos indígenas”.

Manuel Iñiguez, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indios (Cenpi), reclama: “Nunca van a estar de acuerdo en crear una ley que realmente deje a los pueblos naturales ser autónomos en sus costumbres y sus autoridades, aunque nosotros sabemos conducirnos”.

Desde esa perspectiva, para Juan Anzaldo Meneses, del Centro Ce-Acatl, las modificaciones a los artículos 1º, 4º, 18 y 115 constitucionales “quedaron evidenciadas como argucias para mantener en declaraciones las aspiraciones de justicia, democracia y libertad de los pueblos indígenas.

“Afirmaban que los recursos iban a ser suficientes para establecer esa nueva relación afín al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Años después nos damos cuenta que la

situación sigue muy mal. Calderón recibe la administración con un diagnóstico dramático, los municipios más pobres del país siguen siendo indígenas y aunque hay inversión, cada año el dinero distribuido a programas sociales se diluyen”.

Meneses reflexiona: “Hasta que no haya verdaderamente voluntad política para resolver de fondo las necesidades indígenas, las instituciones públicas aparentarán la aplicación de recursos y en la realidad, los pueblos seguirán viviendo en la miseria”.

En tanto para González es necesario el diálogo entre el gobierno federal y el mundo indígena: “Se requiere retomar la discusión sobre temas pendientes como justicia, democracia, desarrollo y mujeres indígenas.”

Como en África subsahariana

El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México 2006, realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el PNUD, definen al desarrollo humano “como la generación de capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran y ansían”.

El reporte arroja que el Índice de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas (IDHPI) se ubica en 0.70, a diferencia del IDH de la población no indígena que es de 0.83, es decir, casi 15 por ciento menor.

“El análisis nos muestra que mientras los logros en materia de educación y salud han sido notables, el indicador de ingreso se encuentra por debajo de los países desarrollados y en algunos municipios y regiones indígenas es muy parecido al registrado en la África subsahariana, la única región del mundo considerada como de desarrollo humano bajo”.

La brecha entre la población indígena y la no indígena es también notable en materia de salud. Mientras que para la primera el índice es de 0.74, para la segunda es de 0.85 y en el rubro de la educación, hay una diferencia de 17 por ciento (para la población indígena es de 0.73 y para la población no indígena 0.89). Así mismo en el tema de los ingresos, el contraste es de 14 por ciento.

El estudio destaca que el IDH nacional está por arriba del IDH indígena de 12 entidades federativas, pero siempre debajo de cualquier IDH no indígena estatal. El IDHPI coloca a Chiapas como la entidad con el desarrollo humano más bajo, seguido de Oaxaca, “son las dos entidades que de manera individual concentran los mayores volúmenes de población indígena del país y los que presentan los niveles de desarrollo humano más bajo para el conjunto de su población”.

Aunque el informe considera a la zona norte del Istmo como una de las regiones con IDHPI más alto, Eliseo Eugenio Gómez, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo en Oaxaca, reclama: “En esta región hay escuelas primarias que parecen de los años 60. En todas las comunidades existen casas de salud, hospitales, como elefantes blancos, no tienen medicinas, ni alcohol”.

En su informe la CDI señala a la Sierra Tarahumara como la región con la mayor desigualdad “con un IDH indígena de 0.55 y 0.79 para la población no indígena, o sea el 30.3 por ciento de diferencia entre las dos poblaciones”.

Javier Ávila del Centro Tarahumara de Derechos Humanos, describe que la situación en la Sierra no es distinta a la de otras regiones indígenas, “ha sido igual en todas las comunidades, dejar las migajas que caen de la mesa del patrón para los indígenas, cuando lo que necesitan es justicia”.

Michoacán es uno de los estados con el menor índice de ingreso y grado de asistencia escolar. También es una de las entidades donde confluyen un desarrollo humano bajo y PIB per cápita bajo, es decir “un nivel de bienestar precario”.

“En el territorio purépecha son muy notorios los graves conflictos agrarios y forestales. La lucha por la tenencia de la tierra entre comunidades y grupos son muy altos. El saqueo de los bosques, la tala inmoderada están a la luz del día y requieren del concurso del gobierno federal y estatal, los municipios y comunidades para buscar alternativas de solución”, advierte Abelardo Torres, de Nación Purépecha Zapatista.

Torres añade que “en el caso de las comunidades indígenas purépechas y hay un elevado índice de insalubridad y de analfabetismo”.

Publicado: Marzo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 75

Metlatónoc embuste y desprecio

Además de su miseria, que los mantiene al borde de la muerte por falta de servicios médicos y carreteras, los indígenas de la Montaña de Guerrero deben cargar con las burlas de los políticos. Para maquillar las cifras que señalaban a Metlatónoc como el más pobre del continente, los gobiernos federal y estatal dejaron como “clínica” dos remolques que no cuentan con los instrumentos necesarios ni los medicamentos básicos; instalaron postes de luz sin energía eléctrica, y algunas chozas fueron habilitadas como escuelas pero sin maestros. “¡Un hospital!”, sigue siendo el clamor en todas las comunidades serranas

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotógrafo / enviados

Metlatónoc, Guerrero. Atónitos, los padres de Fidel Cortés escuchan decir al médico Jacinto Cisneros que no puede hacer mucho por su hijo y que es necesario que lo trasladen al hospital más cercano.

Los indígenas nu'saavi sólo intercambian miradas en las que se adivina ira y frustración. A través de un intérprete, el único médico de este municipio con 120 comunidades sigue ofreciendo sus recomendaciones; sin embargo, ya no lo escuchan. Para la familia, haber llegado a la cabecera municipal trastumbando cerros fue toda una odisea. Pero pensar en Tlapa de Comonfort, “la ciudad más cercana”, es un sueño inalcanzable.

Saben que existe Tlapa con un hospital, como creen que existe un cielo y un infierno, allá con los “catrines”, donde según hay caminos lisos para que corran los coches y luz eléctrica en las calles. Otro mundo.

Mientras, Fidel, de dos años, llora y se aferra a las ropas rasgadas de su padre. Su pequeño y famélico organismo se agita entre los brazos de sus progenitores, quienes han trocado la indignación por la desesperanza y la profunda tristeza. El niño, a decir del médico, padece desnutrición grave que ya no puede remediarse en esta cabecera. Su moreno cuerpo apenas pesa 7.5 kilogramos, los mismos que debe alcanzar un bebé de seis meses y muy lejos de los 12 que un niño sano de su edad debe pesar.

Acostumbrado a hacer reverencia a los mestizos, Daniel sale del “consultorio” tímidamente con la gorra entre las manos y la cabeza inclinada. Es seguido por su mujer, quien ya se ha montado a Fidel a sus espaldas, amarrado y tranquilo. Le prometieron al médico que irían al Hospital del Niño y la Mujer, pero lo hicieron sin convicción; más con el ánimo de decirle al doctor lo que quiere escuchar para que los deje en paz. Se llevan algunos sobres para preparar papilla y suero oral.

–Eso lo comerá toda la familia, no sólo el menor... pero no los culpo, todos están desnutridos –dice Jacinto Cisneros antes de iniciar su segunda consulta. Al final del día habrá auscultado a 45 pacientes en dos remolques que, colocados a la entrada del poblado, fungen como “consultorio”.

Porque desde que los visitó el entonces presidente Vicente Fox en julio de 2005, tienen como “clínica” dos carros blancos o “módulos” que ostentan el logotipo de la organización “Vamos México” y la leyenda: “El gobierno del cambio cumple”. Aquella vez les prometieron a los nu’saavi y me’phaa que habitan este municipio que los remolques sólo serían “provisionales” mientras se construía una clínica. Casi dos años han pasado y ya saben que no se construirá nada.

“Antes estábamos mejor, porque por lo menos teníamos el centro de salud donde los niños podían sentarse en la sala de espera. Ahora nuestra sala de espera es la calle”, dice la joven madre Alba Viterbo.

Vicente Fox y Marta Sahagún prometieron sustituir la casa de salud con una clínica, construir una carretera e incorporar a todas las familias a los programas asistenciales Oportunidades y Procampo. La “pareja presidencial” y su séquito de funcionarios, así como los grandes medios de comunicación, se retiraron de esta cabecera a una hora de haber llegado. Los helicópteros se esfumaron y los 400 elementos del Ejército mexicano iniciaron el descenso de la Montaña. El presidente de la República había dejado una limosna a la familia con la que se tomó la foto.

Ni una sola promesa se cumplió. Sólo se pavimentaron irregularmente 35 kilómetros de los 75 que separan a esta cabecera municipal de la pequeña ciudad de Tlapa. El resto se debe transitar, como siempre, en camino terregoso. Los programas asistenciales sólo llegaron intermitentemente a algunas familias de la cabecera, mientras que a la gran mayoría que habita en las comunidades ni siquiera se le censó.

Las mujeres parturientas, los accidentados y quienes padecen enfermedades curables siguen muriendo en las agrestes brechas en busca de atención médica. La mayoría de los niños no recibe educación oficial porque no hay maestros ni escuelas suficientes.

Tan sólo en los últimos seis meses, Jacinto Cisneros registró tres muertes de mujeres parturientas y cinco de bebés que no alcanzaron a llegar a Tlapa. “El mes pasado bajaron de una comunidad a un niño que venía con sufrimiento fetal. Decidimos trasladarlo inmediatamente, pero cuando llevábamos una hora de camino ya no se le escuchaba su corazoncito. La distancia está en contra nuestra”.

La mayoría de quienes mueren por parto y enfermedades curables ni siquiera tienen acceso a la auscultación del médico de la cabecera. Los indígenas se quedan a morir en las cañadas y laderas escarpadas de la zona de la Montaña.

El médico general egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, y originario del también municipio montaños de Copanatoyac, demanda la creación de un hospital. “Por las características de la zona, se necesita una atención ya de segundo nivel aquí en la cabecera y de primer nivel en todas las comunidades”.

Y es que los padres de Fidel tendrían no sólo que pagar el traslado a Tlapa (70 pesos por persona en camionetas de redilas), sino también buscar a una persona que hable español y nu’saavi, conseguir dinero para la alimentación de todos los que viajen y comprar las medicinas. El doctor calcula que el costo del medicamento que requiere Fidel oscila entre los 400 y 600 pesos.

Santa Catarina

Las chozas de la comunidad están rodeadas de bosques de encino. Los murmullos que provienen de la escuela se vuelven franca algarabía cuando los niños advierten la llegada de forasteros.

Cincuenta y ocho niños hacinados en un salón saludan, Taniku’m, y se agolpan a la entrada del aula. Andrajosos y de rostros ásperos y jiosos a causa de las deficiencias en la alimentación, no ocultan su embeleso con una cámara fotográfica o una grabadora de pilas.

La única profesora del lugar, Celia Cortés González, muestra las goteras y grietas del salón. También es originaria de la Montaña y estudió la secundaria en Tlapa. Fue nombrada maestra de esta escuela hace ocho años

“Cuando llegué, éramos tres y poco a poco los otros maestros se fueron y me dejaron sola. Atiendo en este salón a todos los grados, de primero a quinto. Ahorita no hay nadie que curse sexto. Además no los puedo tener aparte porque los otros dos salones están peor.”

Dice que es muy “difícil” tratar de educar a los niños en la Montaña. “Aquí llegan con hambre y sed. Cada ratito quieren salir y ver qué pueden comer. Además aquí hace mucho frío y no tienen ropa, calzado. Llegan temblando en la mañana. Ya hemos solicitado cuadernos, hojas, lápices”.

¿Les llegan los desayunos escolares?

–Casi no los mandan. Solamente cuando sobran allá en la cabecera aquí nos traen poquitos. La semana pasada nos trajeron 20 y no nos traían desde septiembre.

La maestra, a quien frecuentemente no le llega el pago quincenal, solicita también “aunque sea una grabadora chiquita para hacer unas actividades con los niños”.

Los niños salen de la escuela y se enfilan a sus casas. Corren, juegan a lanzar piedras y “platican” con sus perros que les salen al encuentro. Sostienen su morral escolar con la frente y lo dejan caer a sus espaldas, tal y como lo hacen con el mecapan cuando cargan leña, zacate o maíz.

Al final, Celia Cortés sale del aula serenamente. Luce como sus alumnos: con los cabellos desordenados, polvorienta y vestida con andrajos. Erguida y con la frente en alto, se pierde detrás de la puerta de una choza desvencijada que se conoce como la “casa de maestro”.

Días después, el 9 de marzo pasado y en una de sus “conferencias magistrales” que iniciaron al dejar la Presidencia, Vicente Fox y Marta Sahagún dirían en Vancouver, Canadá, que “trabajando juntos” pudieron “alcanzar grandes cosas para México”, como sistema de salud para todos y educación gratuita, “en un país en el que todas las escuelas” están conectadas a Internet.

Llano de la rana

Decenas de postes bordean las calles de la comunidad. Los cables que soportan se tienden como el telar de cintura con que las mujeres de este pueblo fabrican sus ropas. Ahí se posa el sa’o kuab’o, un diminuto pájaro rojo que, como pequeña bola de fuego, cruza los pliegues de la Montaña.

Los faroles lucen impecables, nuevos. Y lo están. Nunca se han usado. La comunidad, ubicada en una de las zonas más altas de la Montaña, jamás ha tenido electricidad; pero desde hace dos años cuenta con postes de luz.

Los pobladores, entusiastas, participaron en la colocación del tendido de cables y la colocación de los postes y faroles. Un desengaño más. Lejos de la cabecera municipal, el conjunto de mástiles no cuenta con un generador o alimentador eléctrico.

“En la noche nomás nos alumbra la luna, como siempre”, dice Maurilio Aguilar, quien, junto con su hermano Paulino, son los dos únicos habitantes de este poblado que entienden el español.

Su escuela está en ruinas y acaban de recibir a una profesora. Llegó hace 15 días y Juana Prado Moreno, horrorizada, confiesa que no quiere quedarse en la comunidad.

“De los más de 70 niños que hay en la comunidad sólo 34 tienen acta de nacimiento y boletas. No sé ni cómo voy a trabajar. Ni el pago me llega.”

¿Hay biblioteca?

–¡No! ¡Pero si no hay ni cuadernos, ni lápices! –contesta la estudiante de bachillerato.

Para los nu'saavi que lo habitan, el topónimo de esta comunidad es Yososava, con igual significado que el español Llano de la rana. Atropelladamente hablan para que Paulino y Maurilio traduzcan: “no hay clínica tampoco. Nomás a veces vienen enfermeros, pero nunca les alcanzan las medicinas”.

Dicen que lo único que comen es tortilla con sal y quelites. Pero “nuestra mayor urgencia es el agua”. Cada que comienza la temporada de estiaje, los pozos de la comunidad se secan y deben ir a bañarse y dar de beber a sus animales a un río lodoso que se encuentra a tres kilómetros de la comunidad. Pero el agua que necesitan para beber deben conseguirla cuatro kilómetros más allá, donde nace el río.

Luego de mostrar los pozos desecados, los viejos sin dientes hablan nuevamente para que Paulino, con voz quebradiza, interprete.

“Aquí hicieron llegar la red, postes de luz; pero no ha funcionado. De donde ustedes vienen sí ha de haber electricidad, agua, escuela, doctores, todo. ¿Qué nosotros no somos mexicanos? ¿Nos hacen esto porque no podemos defendernos, porque ni siquiera antes conocíamos un poste de luz?”

La fiesta

El inicio de la cuaresma es una de las principales fiestas de Metlatónoc. El nombre oficial de esta cabecera, el que le puso el conquistador náhuatl, no es aceptado por los nu'saavi. Para ellos sigue siendo, como hace siglos, Itiatanu'u, río quebrado.

En noviembre de 2002 Contralínea visitó el municipio (ver Contralínea 23). Entonces los policías ni siquiera consideraban necesario portar armas. Ahora, los gendarmes que custodian al presidente municipal Rutilio Viterbo Aguilar, ostentan AK 47 con doble cargador y estratégicamente se apostan, con las armas en ristre, en los lugares a los que se traslada el funcionario oriundo de este poblado. Bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática contendió y ganó las elecciones pasadas. Está a cargo del ayuntamiento desde el 1 de diciembre de 2005.

Antes de abordar su camioneta color verde oscuro, modelo Lobo 2006, marca Ford, duda en identificarse como presidente municipal. Señala que el presupuesto anual para el municipio asciende a 27 millones de pesos. Agradece a los gobiernos federal y estatal los recursos entregados, pero reconoce que no son suficientes.

Y es que si se repartieran entre cada una de las comunidades, que no cuentan con energía eléctrica, agua potable, drenaje, escuelas, centros de salud ni caminos, apenas recibirían 225 mil pesos cada una.

Pero los de Metlatónoc no sólo fueron visitados por Vicente Fox. A la cabecera también llegó el gobernador Zeferino Torreblanca a finales del año pasado. Con esa visita, los indígenas ganaron un par de láminas de asbesto que se colocaron afuera del consultorio para que las mujeres y sus hijos se cubrieran del sol.

“Nosotros venimos siempre a ver al que viene; pero seguimos igual. Hasta Obrador una vez vino”, recuerda Francisco Martínez. En efecto, los indígenas nu’saavi también sirvieron de escenografía durante el inicio de la campaña por la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, cuando habló de “respetar los indicadores macroeconómicos” sin traductores en un lugar donde más del 95 por ciento de las personas no entienden el español.

Viterbo Aguilar preside las peleas de gallos que se realizan frente al palacio municipal. En los desafíos, los campesinos que bajaron a la cabecera apuestan de 20 a 200 pesos. Sobre la explanada donde los animales derramaron sangre, al caer la noche danzan santiagueros, romanos, moros y diablos.

Con fervor, los indígenas desarrapados danzan a un dios que no puede ser el del cardenal Rivera Carrera o los obispos Onésimo Cepeda y Sandoval Iñiguez. Como ellos, el de los nu’saavi es un dios de abajo y le llaman el Señor de los Trabajos o San Marquitos. En las danzas pelean sultanes, Pilatos, romanos, musulmanes, cristianos y un “mahoma”. Piden la llegada de las lluvias y que no haya enfermedades.

En la madrugada, completamente ebrios, se despiden, da’akitayu. Se les ve caminar, tambaleándose, cuesta arriba rumbo a sus comunidades. Sus mujeres los siguen, silenciosas y aún menos abrigadas que ellos, varios metros atrás. La temperatura supera apenas los cero grados centígrados.

Los números de Metlatónoc

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano para los Pueblos Indígenas, publicado en 2006 y elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Metlatónoc era el municipio más pobre del país.

Sin embargo, el estudio no contemplaba aún la división del municipio de la Montaña. La comunidad de Cochoapa El Grande se convirtió en cabecera municipal de 115 comunidades.

Según se desprende del informe Índices de Marginación 2006 del Consejo Nacional de Población, dependiente de la secretaría de Gobernación, el nuevo municipio quedó conformado con las comunidades más pobres y Metlatónoc pasó al sexto lugar de marginación.

Está habitado por 17 mil 398 un'saavi o mixtecos y me'phaa o tlapanecos. Más del 60 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta y el 76 por ciento del mismo grupo poblacional no concluyó la primaria.

Según los datos del Conapo, el 76 por ciento de las viviendas no tienen servicio sanitario y el 86.21 tienen piso de tierra.

Publicado: Abril 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 76

La pobreza tiene cara indígena

Decir pobreza extrema es sinónimo de comunidades indígenas: falta agua potable, drenaje y alcantarillado; carecen de viviendas con pisos firme y luz eléctrica; no hay servicios básicos de salud y educación. Sin embargo, el gobierno federal justifica esa marginación por la “difícil orografía” en la que se ubican los municipios y el elevado costo que representa llevarles los servicios.

Yenise Tinoco

Desde su lujosa oficina ubicada en el séptimo piso de un edificio con vista a Paseo de la Reforma, en pleno centro de la capital del país, el subsecretario de Desarrollo Social, Gustavo Merino Juárez, dice combatir la pobreza extrema que padece “más de un millón de mexicanos”, aunque las cifras oficiales describen a 30 millones en pobreza extrema.

Una sala de piel negra, escritorio de madera lustrosa, pisos con olor de alfombras nuevas, aparatos electrónicos, computadora, cuadros con pinturas caras y elegantes adornos son el escenario desde donde Merino Juárez habla de lo “costoso” que resulta llevar a las comunidades más miserables del país los servicios vitales como agua potable y drenaje, pues “sus características orográficas lo impiden”.

“Los 100 municipios más pobres del país están en terreno montañoso. El problema son las distancias entre uno y otro. La posibilidad de llevar servicios es reducida porque es excesivamente caro, complicado de llegar; atiendes a núcleos poblacionales muy pequeños, eso es uno de los principales factores que ha afectado el nivel de desarrollo”, dice el funcionario.

La dispersión y demografía que presentan estas localidades es otro factor en su contra. De los 100 municipios con mayor marginación en el país, suman 2 mil 300 comunidades con menos de 50 habitantes, ante lo cual el gobierno evade su responsabilidad de brindarles servicios básicos bajo el argumento de que los costos de inversión son muy altos para el poco número de personas que se beneficiarían.

La subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, Maki Esther Ortiz Domínguez, señala que la desnutrición, diarrea, deshidratación, neumonía, diabetes e hipertensión, enfermedades que en su mayoría son curables, siguen siendo las principales causas de muerte en las comunidades que viven en extrema pobreza.

Municipios marginados

Por cuestiones administrativas, dos municipios oaxaqueños quedaron fuera de la estrategia antipobreza Cien por cien. San Martín Peras y San Bartolomé Ayautla no se verán beneficiados con las 100 acciones que pretende desarrollar el gobierno de Felipe Calderón en los 100 municipios más pobres del país.

Acciones de salud, educación, vivienda, pisos firmes, agua potable, drenaje, electrificación, apoyo a proyectos productivos e incluso líneas telefónicas, son algunas de las gestiones que Felipe Calderón prometió llevar a cabo en los municipios a través de 14 secretarías de Estado.

El listado de los municipios más pobres fue tomado del estudio que diera a conocer la ONU sobre el Índice de Desarrollo Humano en México, en donde se afirma que el municipio de San Martín Peras en el número 14 de marginación y San Bartolomé Ayautla se encuentra en el número 46, aunque las diferencias entre ambos son mínimas.

En la lista de municipios pobres de la Secretaría de Desarrollo Social no están los dos municipios oaxaqueños que la ONU clasificada como extrema pobreza. La explicación que tienen las autoridades federales de esa omisión, es que ambos municipios quedaron fuera de la relación debido a que “les faltó el dato estadístico del ingreso familiar”.

El subsecretario Merino Juárez afirma que “no quedó ningún municipio fuera que esté en la lista de la ONU”, y justifica que es por una cuestión de metodología que no pueden entrar todos los municipios que se quisiera.

El diputado perredista Carlos Altamirano Toledo, oriundo de Oaxaca, califica de golpe mediático la estrategia que dio a conocer Calderón en enero pasado, y sostiene que el presidente está utilizando como mera publicidad el proyecto del “Cien por cien”, ya que simplemente armó un paquete con lo que ya trabajan varias secretarías.

Miguel Ángel Peña Sánchez, secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, manifiesta que la estrategia “Cien por cien” no deja de ser un

programa inmediatista y asistencialista. “No hay alguna estrategia para que la gente pueda desarrollar un proyecto que le permita no depender de esos programas siempre, sino de utilizar los recursos naturales de su entorno, su capacidad, su fuerza de trabajo para generar los recursos en base a su esfuerzo”.

Pablo Leopoldo Arreola Ortega, diputado del Partido del Trabajo, y también secretario de la Comisión de Desarrollo Social, menciona que este programa es nada más una buena intención. Agrega que la estrategia no va a tener los resultados esperados, ya que no se plantean acciones contundentes a mediano y largo plazos para resolver el problema de la pobreza.

Pobreza: causa y efecto de enfermedades

La subsecretaria Ortiz Domínguez sostiene que a pesar de esta situación de enfermedades curables que se han convertido en índices de mortandad, “no es sustentable el tener un centro de salud para comunidades de 200 o 300 personas”.

En varias localidades que existen una casa o un centro de salud, el abandono en el que se encuentran es notable. En algunos casos, sólo se encuentra la infraestructura abandonada, sin médico ni medicinas. En otros, no tienen los médicos lo necesario para hacer frente a las enfermedades que padecen los pobladores del lugar.

A decir de Ortiz Domínguez, la pobreza puede convertirse en causa y efecto en el tema de la salud, y es que las condiciones de precariedad en las que sobreviven miles de mexicanos provoca un sin número de enfermedades tanto contagiosas como crónicas degenerativas.

Al momento de que ya padecen una enfermedad las personas que viven en pobreza extrema, éstas terminan vendiendo lo poco que tienen para pagar los gastos de atención médica, lo que se le conoce como gasto catastrófico, dice la funcionaria de Salud.

Pero agrega que gracias al Seguro Popular se ha podido atender a un número mayor de personas que padecen pobreza en el país y que no cuentan con los medios económicos para pagar los servicios de un médico o las medicinas.

Para poder acceder a los servicios de salud, los pobladores de las regiones más apartadas de la cabecera municipal tienen que viajar durante horas por caminos agrestes para que sean atendidos por algún especialista, ya que en muchas comunidades no existe un centro o una casa de salud, y el viaje resulta costoso para los familiares del enfermo (Contralinea 75), y este gasto no lo cubre el Seguro Popular.

Un paliativo las caravanas de Salud

En enero pasado se dio el banderazo de salida a las caravanas de salud, las cuales tienen como fin el visitar a los 100 municipios más pobres del país y sus 5 mil 500 comunidades. Con un presupuesto de 500 millones de pesos para el 2007, se pretenden rehabilitar 2 mil unidades que se encuentran en los estados y comprar 368 autotransportes nuevos.

No obstante, el gobierno federal no aclaró que la dignificación de estas 2 mil unidades y la adquisición de otras 368, se realizará a lo largo del sexenio calderonista. En tanto, las unidades en funcionamiento serán “las más que se puedan y las que el presupuesto permita equipar”.

La subsecretaria culpa a las condiciones orográficas y geográficas difíciles que imperan en México, de que los servicios básicos de salud no lleguen a las localidades más apartadas.

Y agrega que esas caravanas no podrán llegar al 100 por ciento de las comunidades debido a las condiciones de inaccesibilidad en las que se encuentran muchas de ellas. Así que los pobladores tienen que bajar hasta donde llegue el trailer para recibir los servicios básicos de salud.

Ortiz Domínguez comenta que las caravanas acudirán a los municipios y comunidades dos veces al mes para atender las necesidades de salud de sus habitantes, revisarlos y darles el medicamento correspondiente o, en su caso, “entregarles un vale para que lo cambien en la farmacia más cercana”.

Los funcionarios públicos que idearon la estrategia para solucionar el problema que vive México de desabasto de medicinas en los servicios públicos de salud, dejaron en el olvido la realidad que viven miles de mexicanos. Hay municipios que no cuentan con una sola farmacia, y para llegar a la “farmacia más cercana” les significa un viaje de hasta 9 horas.

Publicado: Abril 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 76

La estructura imperial de la banca mundial

La indigencia en México tiene su raíz en el abandono de la política industrial del país hace ya 30 años y de la falta de políticas financieras y culturales propias. Así obtienen sus ganancias el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, que forman una estructura imperial, sostiene Roberto Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Nydia Egremy / Julio César Hernández, fotos

Gian Carlo Delgado, investigador del programa “El mundo en el siglo XXI”, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, califica como una “sobornización de la banca mundial” el mecanismo de préstamos del BM a México y en particular a los municipios, “ahí es cuando se opera esa estrategia”.

Las instituciones financieras que nacieron tras la segunda guerra mundial en la que se repartió el mundo, buscan mantener ese reparto global imponiendo a las naciones “un nuevo sistema colonial, pero más limpio, es decir, son políticamente correctos, neutros”, explica el experto en economía mundial.

Las agresiones comerciales, financieras, tecnológicas e ideológicas de la banca mundial al país se traducen en la disputa por los mercados, las materias primas, zonas de pesca y la explotación de hidrocarburos.

Para Castañeda la aplicación de esas políticas financieras logró en los municipios que la pobreza se enseñoreara entre las comunidades indígenas y se establecieran relaciones leoninas entre un ente internacional (BM o FMI) y un municipio.

Esa es una relación asimétrica que deja todas las desventajas a los municipios y los principales beneficiados son los “socios” empresariales del Banco Mundial. Con esas medidas, el municipio queda desprovisto de la eventual protección de la Federación o de la atención pública nacional.

Gian Carlo Delgado observa que la pobreza en los municipios de México está ligada a la política del BM que se impulsó para el país desde el año 2000. Ese ente financiero “está interesado en operar a nivel regional porque al actuar a nivel local, desarticula la atención pública sobre esas zonas, sólo los directamente involucrados son quienes eventualmente pueden denunciar cualquier anomalía”. Así, en términos de rechazo social, es más fácil operar a nivel municipal y estatal pues la cantidad de actores se restringe.

Para mantener esa aparente indiferencia ante los grandes problemas nacionales, se ha bloqueado el desarrollo intelectual de las poblaciones, para evitar que crezcan todas sus capacidades, señala Roberto Castañeda, quien sostiene que “para evitar el socialismo científico se inventó el capitalismo retrasado mental; o sea, para que la gente se deje gobernar y explotar, se les trata como retrasados mentales, esa situación es la que priva en las comunidades marginadas del país”.

“El sistema no está hecho para independizar a nadie. En la medida en que puedan generar pueblos analfabetas, pueblos incultos y pueblos ineptos para ganarse la vida, el sistema prospera” comenta este investigador, también autor de la Bibliografía comentada del pensamiento radical en el siglo XX.

Como la política ha sido secuestrada mediante el sistema financiero que compromete a los gobiernos a apoyar a la banca imperial dentro de las poblaciones del país. Los políticos son los sirvientes de esta nueva estructura internacional que se va imponiendo país por país, dejando huérfanas a las poblaciones, afirma el experto. En contraste, al ciudadano se le cierran las puertas de acceso a la educación, la vivienda, el empleo, el crédito o el apoyo rural.

Es entonces cuando los pobres observan que el país en donde viven no les sirve y tienen ante sí sólo dos soluciones: migración o delincuencia. Sin embargo, ante el incremento de la pobreza en el país, Castañeda excluye la posibilidad de un estallido social. La población no explota porque carece de capacidad para hacerlo “se requiere un tremendo grado de capacidad organizativa y recursos materiales y hace mucho que en los municipios se eliminaron ambas posibilidades: no tienen un salón de clases, un lugar para reunirse, no tienen un sindicato ni un partido político, por lo que es muy difícil que se organicen”.

Por ello, las únicas salidas para los pobres son la inmigración y la delincuencia. Ésta es una forma de explosión social en pequeñísima escala. La persona no necesita más que decidirse a que ‘el bien es vivir’ y con esa ética ¡adelante hacia el delito, hacia la violencia y hacia lo que resulte! Si eso no resulta ¡pues hacia la emigración! ¿Que eso tampoco es posible? Se combinan otras cosas, como la prostitución”.

En torno a esa problemática, la banca internacional mantiene un rol neutro y concede empréstitos a cambio de la promesa de bienestar. Eso constituye “el fascismo compasivo, examina Castañeda, donde la corrupción abarca hasta la teatralización compasiva por el dolor ajeno a través de los medios. Ellos mismos se conducen de los procesos que han puesto en marcha ellos mismos: la televisión muestra compasivamente la miseria que provocaron las empresas que patrocinan los cortes comerciales de ese programa.

“Estamos en medio de farsantes, pues lo que actualmente existe es un gobierno en el que la mitad del uniforme es de nazi y la otra mitad es de sacerdote, sin dejar lugar para la verdad. Es una farsa”, continúa Roberto Castañeda quien ejemplifica una de las formas que tiene la agresión de las transnacionales, toleradas por los organismos financieros internacionales en los países pobres: una fábrica que contamina en un país rico, provoca daños en la población que salen muy caros para la empresa dado el nivel de conciencia de la población que resulta afectada. Entonces, se decide trasladar esa fábrica a un país pobre, se la ubica en un municipio pobre en donde envenena a la población”.

Con esa política, “le sale muy barato a las empresas, porque los médicos del IMSS ni siquiera se enterarán de qué están enfermos sus pacientes, ni siquiera saldrán a la ventana a ver las chimeneas de la fábrica que polucionan las viviendas donde viven estas personas”, concluye el economista.

Más valor agregado

Para Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía, el avance de la pobreza en México se explica en la falta de una estrategia del gobierno para combatir sus causas, no tanto en la acción de los organismos financieros internacionales.

Estos organismos han aportado algunos recursos –mínimos- que no van a solucionar el problema de la pobreza, “nosotros mismos debemos hacerlo, tener una estrategia clara para cambiar la estructura económica del país”, reitera el catedrático quien propone que esos negocios pequeños produzcan bienes con valor agregado. “De lo contrario, nunca vamos a salir de la pobreza”.

En México existen 4 millones de pequeños negocios dedicados a actividades muy competidas, de ahí que sus productos no alcancen buenos precios. “Tendríamos que cambiar todo el enfoque económico. Capacitar a la gente para que haga cosas diferentes y para lograrlo, sería bueno volcar todo el potencial de las universidades y ligarlas a través del servicio social obligatorio para que los jóvenes vayan a todas las pequeñas y medianas empresas del país y a todos los pequeños comercios rurales a enseñarlos a hacer cosas diferentes, cuestiones de mayor valor agregado”.

En ese sentido, Ruiz Durán considera que, en lugar de que los productores del campo vendan sus cosechas en la ciudad, al agregarles un valor -con empaques nuevos, desinfectados o como las ensaladas que ofrecen los supermercados- obtengan mejores precios. Concluye con una propuesta: hacer una cruzada nacional a favor de elevar el valor agregado de nuestros productores.

Publicado: Abril 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 76

La miseria une a dos pueblos

Aldama y Magdalena de la Paz tienen algo en común: la miseria. A pesar de la división entre autónomos y priístas, la sed, el hambre, el dolor y la rabia son rasgos comunes. Aquí todos son “hombres murciélagos” y todos son pobres. Su sentencia es caminar indigentes entre rocas y lodo, beber agua encharcada y mal comer; trabajar de seis a seis para arrancarle una mazorca o un grano de café a la montaña y vivir sin atención médica. A los habitantes del municipio que es dos a la vez, el olvido y la segregación los une.

Paulina Monroy / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Aldama, Chiapas. Tiene cuatro años y recoge granos de café en la montaña de Yetón. Con sus manos párvulas y reseca María arranca una por una esas canicas rojas que deposita diligente en la canastilla. Se quita el cabello de la cara y se lleva a la boca la camisola rosada y grasa, se rasca el vientre abultado y se aferra a la pierna de su padre. Apenas entra María a la mata de café, se pierde y a su cuerpo famélico se lo traga el follaje espeso y el monte húmedo. María y su hermana tienen los pies quebrados, los huaraches rotos y ya saben escalar cerros. Los granos tendrán que lavarse, secarse y molerse. Las niñas ayudarán a su madre y también cumplirán con la tarea de la escuela. Si la tarde le presta tiempo, a María todavía le falta una faena en los maizales; en los Altos se come lo sembrado.

Los ojos de Julia perdieron su fulgor, la pobreza le mató la inocencia y mientras corta las semillas y se satura las manos de polvo y ampollas, Miguel retoza amarrado al rebozo de su hermana y se pierde en el baile de sombras y hojas. Julia trabaja en los cafetales desde muy pequeña, siempre encuentra pocos granos, unas veces rancios por la lluvia, otras, muertos por el calor. En Yetón la cosecha es transitoria como la infancia que Julia está perdiendo.

Octavio y Alberto parecen menores, sus 11 y 12 años están escondidos en cuerpos macilentos y pequeños. “Tortilla y frijol”, responde Octavio cuando se le pregunta qué come.

Desde Yetón se camina una hora y media para llegar a la primaria. Ya sea con la carga de la lluvia o los pies batidos de lodo, el nylon empapado o atravesando la espesa neblina, los hermanos recorren la brecha o se trepan al monte con los zapatos agrietados y la ropa rasgada.

A su regreso deberán trabajar todo el día en la milpa. “Está cansado”, dicen. Su familia recibe el precario ingreso que les deja la tienda de abarrotes hecha de lodo y madera. Bajo la nimia luz del foco, Apolonia, su madre, atiende a los clientes y la carestía de productos es evidente: latas abolladas, galletas empolvadas y bebidas hirviendo.

Los niños se enferman “seguido de la panza”, será porque en Yetón el agua escasea y está sucia. Los animales se bañan en los barrizales, sólo hay dos pozos y la lama y las larvas también viajan por esa endeble manguera que va del charco a la choza.

La tasa de mortalidad infantil en Aldama dobla a la estatal. Si los hermanos padecieran una grave deshidratación o diarrea -lo más frecuente en el paraje- serían enviados a San Cristóbal, pues al dispensario municipal le falta equipo y medicina. En el transporte, en la consulta, en los antibióticos y en la estancia se irían esos 200 pesos de comida para una semana. Por eso los habitantes de Yetón prefieren esperar que el tiempo los sane.

Como otros niños de la montaña chiapaneca, Octavio y Alberto viven en casas hechas de carrizo o barro, a otros menos afortunados los cubre un techo de cartón que deben compartir con otros cinco o seis hermanos. Todas las viviendas huelen a leña, no hay ventilación y donde está el fogón está el petate y un niño con frío porque le falta el pantalón, la camisa o los zapatos.

Ni Octavio, ni Alberto, ni María pasan tiempo en esa vieja resbaladilla carcomida; el columpio de madera está abandonado y el subibaja se enmohece. Como todo en Yetón, los juegos se olvidan. La miseria convierte en adultos a los niños sots´il winik.

Xulumó

La casa de salud es un pedazo de lodo de nueve metros cuadrados donde apenas cabe un auxiliar y un paciente, no hay médico y tampoco enfermera. El tugurio está abandonado a la orilla de la carretera como una piedra que se ignora en el ramal. El sol se despide de los Altos y el viejo letrero empolvado del IMSS se pierde entre el barro resquebrajado.

Mientras la mujer de Xulumó llena las ánforas, camina 40 minutos hasta el ojo de agua y regresa con las jarras al hombro porque nadie tiene agua entubada, el hombre “pesca animales” para comer o trabaja en Santiago, en San Andrés o en Santa Martha por veinte pesos el día, una vez a la semana o cada quincena.

El aceite, la bolsa de arroz y la de frijol, esa despensa que les llega cada mes y alcanza para un día, no basta para alimentar a los 30 niños desnutridos del paraje. En tanto, los viejos de Xulumó transitan sin comida, ropa o casa. Cuando las mujeres tienen un parto complicado, prefieren no llevarlas a la clínica por los costos del traslado a San Andrés Larráinzar.

“Otras comunidades necesitan más apoyo, para ustedes no hay. Eso es lo que contesta el presidente, sólo eso”. El reclamo de Juan Hernández López se escucha entre dientes, contenido. La camiseta del agente municipal es un jirón percutido y roto y él cruza las manos e inclina la mirada para domar la rabia.

El ayuntamiento de Aldama únicamente está presente cuando se requiere la única ambulancia que hay en el municipio, siempre que no la ocupen otras comunidades. Para los habitantes de Xulumó, los alimentos, las medicinas, el trabajo, la secundaria están en San Andrés, no en esa cabecera municipal, que también está enclavada en la miseria.

Yotontic

Los granos descansan sobre el patio de Apolonia Vásquez y Salvador Gómez, el guajolote se pavonea por encima de las semillas y el perro pasea la nariz para detenerse en ese aroma del café secándose. Apolonia se soltó las trenzas y dejó caer un telón negro y ondulado sobre su huipil, suelta la pala y se limpia las manos en la falda de algodón azul añil.

Salvador está habituado a tener lo menos, se resigna a no comer carne y a depender de las estaciones para alimentarse del fríjol y el maíz. Cuando la lluvia no ahoga los plantíos, el sol se ensaña en sofocarlo o la peste invade a las gallinas. “Así están las cosas, echa un poco ahí sufrimiento las comunidades, ¡para qué hablar!”, expresa Salvador y se encoje de hombros.

Aquí es despreciado el valor del café. En Yotontic o “pie de cerro” pueden pasar de tres a cuatro años para que la mata dé el fruto que lo mismo se marchita en temporada de calor o se pudre bajo el agua. Entonces los “coyotes” deciden que el café no sirve y fijan un precio lastimoso. Hoy el kilo está en 15.50, mañana estos “negociadores” reducirán otra vez el costo hasta en 10 pesos.

Sólo con factura los cafeteros reciben recursos de la Sagarpa, pero este año el matrimonio no obtuvo el apoyo de 200 pesos porque el organismo argumentó, lejos de la verdad, que no habían vendido su café. De tener camino, Apolonia y Salvador podrían trasladar su cosecha hasta San Cristóbal de las Casas, pero la rústica brecha que hicieron “así de mano” hace imposible la tarea y el flete cobra 500 pesos por un viaje.

Por eso todo lo suben y bajan con mecapal, con la sien prensada y el cuerpo encorvado. De “dolor de hueso” enferman las mujeres campesinas como Apolonia, pero Yotontic no tiene clínica. Cada dos meses viene la doctora y la excusa es la misma: “No hay medicamento”, ni siquiera para aliviar el dolor de cabeza. Solamente en Zinacantán y en San Andrés Larráinzar hay “un poquito de medicinas”. Lo que sí les puede recetar el galeno es un vale para recibir servicios médicos más adecuados en San Cristóbal, aunque para llegar allá “se muere uno”, dice Salvador.

A los naturales del “pie de cerro”, les llega el Seguro Popular, pero Apolonia tiene sus dudas, quienes están afiliados al programa le platicaron que “no muy sirve”, pues no atienden hasta que se padezca la “más peor enfermedad y así poquito, no te dan consulta”.

El matrimonio moldeó su hogar en adobe y no recibieron apoyo para mejorar esa vivienda sin piso. A Yotontic no llegó el block, tampoco la lámina o el baño como en Zinacantán y San Cristóbal que tienen “bien bonitas casas”.

Magdalena de la Paz

Los hombres se ponen el pasamontañas y las dos regidoras ataviadas en collares de cuentas rojas se amarran el paliacate a la altura de la nariz; se asoman esos ojos negros y cómplices. Frente a la Casa del Consejo Autónomo Rebelde, las autoridades en resistencia observan la calle agreste por encima de la humareda de un fogón encendido.

Ese camino, dicen, no existía hasta que se situó ahí la presidencia del Municipio Autónomo en Resistencia Magdalena de la Paz. Otros fueron construidos después del nombramiento de mandos zapatistas en las comunidades. Vigilar a los rebeldes parece ser la consigna. “El municipio nos quería atacar para desorganizar a la gente y llevársela poniendo calles”.

Los miembros del consejo y las regidoras señalan también aquel cruce donde estaba el panteón municipal. Para construir la calle, el ayuntamiento de Aldama movió las sepulturas y “nuestros muertos quedaron arrumbados hasta allá”, se lamenta el intérprete que traduce la voz del consejo.

Atrás de la casa con techo de paja está la clínica de Magdalena de la Paz, que atiende a las 11 comunidades integrantes del municipio autónomo. Las autoridades abren la puerta del paupérrimo almacén donde los medicamentos alópatas se agotan. Sobre las etiquetas que dicen “paracetamol” o “penicilina” no se pueden contar más de dos artículos y de otros antibióticos básicos no queda nada.

Por ello recurrieron a la medicina natural. El depósito es abundante, hay pomada de chile para el reumatismo, de cola de caballo que es cicatrizante y de lengua de vaca que desinflama, tintura de ajo, de siempre viva y cebolla, hierbas y cápsulas.

En su tiempo, la organización francesa Médicos del Mundo auxilió a los zapatistas en la construcción de la clínica, la capacitación y el abastecimiento de medicinas. Con el proyecto se sumaron al esfuerzo 100 promotores de salud; sin embargo, hoy el dormitorio que los albergaba tiene un solo camastro y los agentes abandonan su labor por la falta de alimentos. Además los mandos reconocen que los promotores “trabajan hasta donde pueden” porque no son médicos, sino voluntarios.

Hasta el año pasado, en Magdalena de la Paz no había una escuela autónoma. Aunque se están construyendo cuatro más, en siete comunidades, los niños acuden a casas que funcionan como aulas. Tampoco hay agua, sólo dos manantiales que se extinguen por el calor y la demanda.

“No hay drenaje, nuestro pueblo usa letrinas ciegas, sin echarle agua, ahí se queda. Así vivimos todos”, describe el intérprete a nombre del consejo.

No obstante que la mayoría de los “magdaleneros” cuenta con energía eléctrica, el consejo revela que no fue bien instalada y hasta el momento solamente en la cabecera municipal de Aldama se colocaron los cables. “En cinco comunidades no hay buena luz todavía”.

Además “no tenemos una vivienda digna, no hay persona que tenga un buen piso o cocina, ahí vivimos con los animales porque no hay forma, no hay dinero. Por eso nos levantamos en el 94, porque no es parejo, porque vivimos en extrema pobreza y nuestros hijos están sufriendo”.

División y provocación

Refugiados bajo el incienso, le bailan al Señor de Tila en la fiesta del cuarto viernes. Le hablan en bats'ic'cop, la “verdadera lengua” y reunidos en el atrio musitan arrebatados mientras le regalan ese vaivén ritual y piadoso al crucificado. A un mismo paso, con una sola voz y en un único rezo los peregrinos se concilian, están unidos. No muy lejos de ahí, un muro silencioso e invisible se erige entre priístas y zapatistas. Sobre la cancha apoyan al equipo local de básquetbol, pero en las gradas la distancia es abismal: de un extremo vitorea el presidente municipal, del opuesto, la resistencia.

Los sots'il winik -hombre murciélago en tzotzil- comparten el lugar, la lengua, el color de piel y hasta la sangre, no las ideas. Mientras Víctor Sánchez Pérez, alcalde priísta, afirma que hay entendimiento, la presidencia autónoma zapatista de Magdalena de la Paz refuta: “el presidente sólo busca conflictos”.

En el entendido de que en el mundo caben todos los mundos, Magdalena de la Paz, el caracol en la montaña que pertenece al Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo, se constituyó como municipio autónomo en 1996.

Antes de la remunicipalización promovida por el entonces gobernador chiapaneco Roberto Albores- acción calificada como un intento por eliminar a los gobiernos autónomos- Aldama, antes Santa María Magdalena, pertenecía a Chenalhó. Fue entonces que la polarización política se profundizó en ese intento por reivindicar el carácter de municipio libre.

Mientras los mandos zapatistas pugnaban porque la localidad se rigiera bajo los principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el grupo Cotzilnam –corriente que dimitió del zapatismo y se incorporó al PRI– apoyó el proyecto de Albores. Finalmente en 1999 Santa María Magdalena fue nombrado municipio de Aldama y quedó en manos del PRI.

Desde entonces la tensión es permanente. Los mandos autónomos han denunciado en diversas ocasiones la arbitrariedad de los dirigentes priístas. Sobre todo, en la apertura de caminos que afectan el patrimonio de los habitantes en resistencia.

“Aquí señalamos la estrategia de guerra del mal gobierno que es una clara provocación de problemas de divisiones y confrontaciones entre indígenas”, asentaban en una carta en noviembre de 1999.

Los intentos por hacer dimitir a la resistencia no terminan ahí. La Junta de Buen Gobierno de Oventic revela que hay presencia de paramilitares en Magdalena de la Paz. Desde 2003 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ya reportaba la intrusión de la contrainsurgencia y la denuncia de los lugareños por el bloqueo de caminos y las amenazas de muerte a diáconos de la región.

Ese mismo año, La Jornada informó sobre la incursión de los militares y la PGR so pretexto de destruir plantíos de marihuana en las comunidades de Atsamilhó y Saclum. Las autoridades autónomas declaraban que “el objetivo de las fuerzas represivas no era la destrucción de los sembradíos, sino provocar violencia entre comunidades”.

El séptimo más pobre

Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo arrojan que Aldama es el séptimo municipio más pobre del país con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 0.4858. Con un total de 4 mil 906 personas, el 83 por ciento de su población es indígena. De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), el Índice de Marginación es del 2.32987, que lo convierte en la tercera localidad más pobre de Chiapas. Asimismo el Censo General de Población y Vivienda 2000 indicó que la Tasa de Mortalidad Infantil fue de 53.15, muy por encima de la TMI estatal.

Además, según estimaciones del Conapo con base en el Segundo Censo de Población y Vivienda 2005, en Aldama el 40 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta, el 72 por ciento del total de las viviendas tienen piso de tierra y 69 por ciento no tiene agua entubada, en tanto que el 97 por ciento de la población ocupada tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos.

En la cabecera municipal el suelo está desnudo, de piedra amarillenta son las calles. La presidencia municipal y la iglesia son un mar de colores si se compara con las humildes casas descuartizadas de lodo o las ennegrecidas por la leña.

Los niños y las mujeres siguen caminando descalzos a pesar de que hoy es la fiesta del cuarto viernes. Los tianguis se tienden bajo una bolsa de plástico que les sirve de techo y se sirven elotes preparados con una embarrada de mayonesa y un tanto de chile. Ése es el lujo que se dan los lugareños

Afuera sigue la celebración y adentro de sus oficinas, sentado frente a una mesa de madera y engalanado con su sombrero de listones multicolores, Víctor Sánchez Pérez, presidente municipal de Aldama, indica que en los 20 parajes y la cabecera municipal solamente hay cuatro escuelas y una clínica con una enfermera, un doctor, sin materiales ni medicinas.

El agua potable es también una realidad lejana luego del retraso y la negativa de las autoridades estatales y federales. “Llegaron a hacer estudios de agua en Cepeltonc, Tavac, Coco y Revolución Fiu, pero hasta ahora no lo aprueban porque no se ponen de acuerdo si la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento o la Conagua son responsables de autorizar el recurso”.

Y es que a decir de Sánchez Pérez, aunque se trata de un trámite sencillo, piden mucha documentación. “Si hay la necesidad real de la comunidad, se trata de no burocratizar. Dicen que tiene que haber un proceso para aterrizar los recursos, lo acepto, pero que no sean tan rígidos”.

Aún cuando ya haya la validación del proyecto, puede no haber presupuesto: “Tenía propuestas en infraestructura educativa con cantidades por localidad, pero ahí me cerraron las puertas, no hubo recurso”. Lo mismo sucedió, comenta el funcionario, con un programa de drenaje. “¿De qué sirvió crear un proyecto si no hay presupuesto?”, alega.

OIT: indignante pobreza en México

El mercado laboral en México enfrenta más desafíos que avances, desde hace una década; prevalece la inequidad, y el futuro para las comunidades pobres se vislumbra muy difícil, estima la Organización Internacional del Trabajo.

Nydia Egremy / Rubén Darío Betancourt, fotos

En México prevalece la brecha de inequidad en las poblaciones y comunidades indígenas que exceden el ámbito laboral, diagnosticó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ese fenómeno se refleja en los mayores índices de pobreza que se registran en el ámbito rural, donde suelen concentrarse las comunidades indígenas y cuya incidencia fue del 61.8 por ciento en 2005 (pobreza por patrimonio), superior al 47 por ciento del promedio nacional. Eso no es digno, no es decente, indica.

El diagnóstico de ese organismo especializado de las Naciones Unidas, que promueve los derechos laborales internacionalmente reconocidos y fomenta la justicia social y los derechos humanos, apunta a centrar la atención en la persistencia de la pobreza en México.

Para Miguel del Cid, director de OIT para México y Cuba, en nuestro país como en Latinoamérica “las cifras oficiales de las encuestas de empleo muestran que prevalecen desafíos en materia de trabajo decente que van mucho más allá del ámbito de la legislación laboral, pues la mayoría de la fuerza de trabajo rural no es asalariada, sino que son trabajadores por cuenta propia, gran parte de los cuales no acceden a ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas, ni a la seguridad social y a otras dimensiones del trabajo decente que postula la OIT”

En ese sentido, el concepto de “trabajo decente” resume la aspiración humana en torno a su vida laboral, que implica la oportunidad de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el trabajo y protección social para las familias, y el derecho a organizarse y participar en la toma de decisiones que afectan su vida.

Empero, para millones de habitantes de los municipios más pobres de México, la oportunidad de un trabajo decente no existe.

Los adultos, mujeres y jóvenes mayores de 14 años –edad mínima establecida en la Ley Federal del Trabajo para trabajar– según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), carecen de un trabajo que garantice su desarrollo y participación en la toma de decisiones a nivel nacional y global.

Esto ocurre a pesar del compromiso que asumió el gobierno federal en la cumbre de Mar del Plata de Jefes de Estado de las Américas (septiembre de 2005), para “aplicar políticas activas que generen trabajo decente, para crear condiciones de empleo de calidad que doten a las políticas económicas y a la globalización de un fuerte contenido

ético y humano y poniendo a la persona en el centro del trabajo, la empresa y la economía”.

El derecho al trabajo de la población rural y urbana de México contrasta con las cifras oficiales más recientes. Las actividades que emplearon a más trabajadores se concentraron en el sector servicios (39.9 por ciento, comercio con 20 por ciento e industria manufacturera con 16.5 por ciento).

En tanto que la actividad agropecuaria, sólo ocupó al 14 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con el informe del INEGI, correspondiente a diciembre de 2006.

En contraste con los magros resultados de empleo, la desocupación va al alza. Sólo en diciembre de 2006, la Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional fue de 3.47 por ciento con respecto a la PEA; esto superó el nivel de 2.84 por ciento registrado en el mismo mes de 2005, señaló el informe del INEGI, el cual sólo consideró 32 zonas urbanas del país -el 4.28 por ciento de la PEA- y en donde la desocupación aumentó 0.53 puntos con respecto a noviembre de 2006.

Además, la TD representó 3.60 por ciento 2006, cifra superior al 3.58 por ciento en 2005: por lo que en diciembre pasado el desempleo en hombres aumentó de 2.74 por ciento a 3.45 por ciento y en mujeres ascendió de 2.99 por ciento a 3.52 por ciento.

Este escenario, para la Organización Internacional del Trabajo, es la “punta del iceberg”, pues el desempleo abierto incide en casi cuatro por ciento de la fuerza de trabajo (cerca de 1.8 millones de mexicanos), y afecta en mayor grado a jóvenes y mujeres.

A través del análisis de las cifras oficiales en materia de trabajo y desocupación, Miguel del Cid examina el déficit de empleo decente y la falta de ingresos suficientes en México.

El economista por la Universidad de Panamá y master en Economía Laboral de la American University, Washington, destaca el auge del trabajo infantil, asociado de forma innata a la pobreza.

“De acuerdo con estadísticas del INEGI (2003), 3.3 millones de niños y niñas menores de 14 años se ven obligados a trabajar, fenómeno que se asocia con problemas de pobreza de los hogares mexicanos, y es un problema más extendido en el área rural”.

Esto constituye de nuevo, “un desafío que va más allá del ámbito laboral, que requiere de políticas económicas y sociales para el fomento del crecimiento y empleo y para el combate de la pobreza en el largo plazo”, destaca el especialista de la OIT.

Ante el incremento de la pobreza en las zonas rurales de México y la precaria situación laboral en el campo, Miguel del Cid considera que no le correspondía hacer una calificación de ese tipo, “sin embargo, a nivel latinoamericano también existe el consenso en el sentido de que las condiciones de trabajo decente en el sector agrícola también depende de las posibilidades de desarrollo del sector”.

Esto demanda políticas integrales (inversión pública en infraestructura, crédito, capacitación, dotación de tierras, asistencia técnica) para el fomento de la productividad y competitividad de los principales cultivos (particularmente a favor de los pequeños productores) y del propio entorno internacional que determinan los precios de los productos agrícolas. “Es decir, depende de factores que van más allá del ámbito laboral”, asegura Del Cid.

Desterrados y desposeídos

Un factor que contribuye a la pauperización de las comunidades rurales mexicanas es la pérdida de la tierra, según lo apreció la OIT en México en el documento México: Desafíos y políticas de generación de empleo. El papel de las reformas laborales, en el foro “Políticas Públicas para el Desarrollo de México”, celebrado en febrero pasado.

Cita el estudio que “la condición de pobreza es producto no sólo del déficit en el acceso a la tierra y a los medios para producir (equipos y créditos), sino a su inserción ocupacional más precaria en ocupaciones de baja productividad e ingresos”. De ahí que el derecho a trabajar la tierra se avale en el Convenio OIT 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), suscrito por México.

Ante la expropiación de terrenos comunales por la expansión de la mancha urbana, o por la construcción de obras ajenas al desarrollo de las comunidades, el artículo 13 del Convenio establece que los gobiernos “deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Además, el artículo 14 establece el derecho de propiedad y de posesión que ocupan tradicionalmente los pueblos, por lo que deberán tomarse medidas para salvaguardar su derecho a utilizar tierras que “no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido acceso tradicionalmente para sus actividades y subsistencia”.

De acuerdo con el documento de la OIT titulado México: Desafíos y Políticas de generación de empleo, que presentó Miguel del Cid en dicho foro, otra forma de perpetuar la pobreza en las comunidades indígenas es la vigencia del analfabetismo y la falta de educación a niveles superiores a la primaria.

La investigación contempla que, particularmente en las áreas rurales y en los estados más rezagados económica y socialmente de la federación, “son muy bajos los niveles de educación y capacitación de la fuerza de trabajo y en los indicadores de acceso de la población a los servicios básicos de electricidad, salud y agua potable, entre otros”.

Por otra parte, la Organización Mundial del Trabajo estima que entre los problemas y desafíos del mundo del trabajo que enfrenta México, destaca el de la inversión privada.

Aprecia que México, pese a la dinámica resultante de los tratados de libre comercio con Norteamérica, “no logra alcanzar su potencial de movilización de inversiones, debido a los problemas de productividad y competitividad que afectan la economía y en general por el entorno desfavorable a la inversión, que se refleja en déficits de seguridad jurídica y ciudadana y por los problemas de transparencia”.

La OIT considera que en el país los problemas del crecimiento e inversión, reflejan una alta subutilización en el mercado de trabajo.

“Esa subutilización resulta mayor al considerar la alta proporción de ocupados que trabajan una jornada insuficiente y que desean trabajar más (subempleo visible). Tal fenómeno incide sobre el 7 por ciento de la fuerza de trabajo, y de acuerdo con el INEGI, representa unos 3 millones de mexicanos”.

El informe Panorama Laboral 2006 de la OIT, señala que tanto en las zonas urbanas como rurales, la alta proporción de la fuerza de trabajo que labora en la economía informal, es otra expresión del problema.

Cita que estimaciones recientes del INEGI revelan que la economía informal alcanza a casi el 28 por ciento de la PEA. Es decir, unos 12.5 millones de trabajadores que se caracterizan por los bajos niveles de productividad e ingresos.

En síntesis, 54 de cada 100 miembros de la fuerza de trabajo ocupada (unos 24 millones de trabajadores) no acceden a los beneficios de la seguridad social, registrándose el mayor déficit entre trabajadores independientes y asalariados de microempresas de la economía informal y entre los trabajadores agrícolas del ámbito rural.

Además, la OIT reconoció que persisten problemas en materia de salud y seguridad en el trabajo, particularmente en actividades de riesgo como la minería, agricultura y otras actividades priorizadas por los interlocutores sociales.

Emigrantes económicos

El fracaso de la política económica tuvo un gran impacto en el incremento de la pobreza. El desempleo rural se agudizó en la última década, cuando más de medio millón de mexicanos de las zonas más pobres del país emigró anualmente hacia los Estados Unidos. De esta manera, estima la OIT, el problema ocupacional se expresa más allá de las fronteras de México.

La investigación anticipó que “en los próximos 10 años, América Latina recibirá unos 300 mil millones de dólares en remesas, de los que cerca de 80 por ciento se concentrarán en México, Centroamérica y el Caribe”.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló, en su análisis de 2000, que la magnitud del impacto de esas divisas “es elocuente entre las familias, comunidades, municipios, entidades y el país en su conjunto”, cuando las remesas ascendieron a 8 mil 885 millones de dólares, aunque otras cifras apuntan a que pudieron ser más de 12 mil millones de dólares.

Paradójicamente, al emplearse en el extranjero, los mexicanos más pobres generan riqueza en su país a través de las remesas.

Ya en mayo de 2005, la OIT había propuesto al gobierno mexicano reencausar el uso de esas remesas. En su estudio Remesas de mexicanos en el exterior y su vinculación con

el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades de origen, la OIT destacó que el importe real de remesas que transfieren los mexicanos del exterior hacia sus comunidades de origen, constituía una incógnita.

Desde hace una década, el ingreso de divisas por trabajadores inmigrantes ha aumentado y superado en 58 veces al monto por nueva inversión extranjera.

En ese sentido, la OIT recomendó al gobierno mexicano que, a pesar de que las remesas son extremadamente significativas y estratégicas para el país, se dirigen sobre todo al consumo familiar en el país. Si bien, en años recientes una parte de los recursos se han reintegrado a las comunidades de origen de los emigrantes con fines de financiamiento de vivienda o el establecimiento de negocios productivos.

La estrategia debe incorporar la sustentabilidad financiera para impulsar proyectos productivos como parte de la política de combate a la pobreza. Además, promover el desarrollo igualitario, incorporar una perspectiva de protección de medio ambiente e impulsar y respaldar la formación de nuevas unidades productivas, ofreció la OIT entre sus recomendaciones al gobierno federal panista.

El contraste entre las estadísticas de 2005 -cuando se hizo esa evaluación y sus propuestas-, con las cifras que el INEGI y el Consejo Nacional de Población, revela que el Ejecutivo sólo tuvo oídos sordos a las recomendaciones de la OIT para mitigar la pobreza por desempleo en México. El resultado: la miseria de millones de mexicanos.

Feminización de la pobreza

El número de mujeres en la fuerza laboral del mundo es mayor que nunca, pero la persistencia de la brecha de género contribuye a una "feminización" de la pobreza entre los trabajadores, destacó el informe Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres 2007, elaborado por la OIT.

Plantea que las mujeres deben tener oportunidad de salir de la pobreza por sí mismas, junto con sus familias, a través de la generación de oportunidades de empleo decente que les permitan realizar un trabajo productivo y remunerado en condiciones de libertad, seguridad y dignidad humana. De lo contrario, el proceso de "feminización" de la pobreza continuará avanzando y será heredado por la siguiente generación.

También se hace notar que mientras más pobre es la región, mayores son las posibilidades de que las mujeres sean trabajadoras familiares auxiliares sin remuneración o trabajadoras por cuenta propia con bajos ingresos, y en una proporción más alta que la de los hombres.

Ahora se registra el número más alto de mujeres en el mercado laboral, incluyendo las que tienen empleo como las que lo buscan en forma activa.

Para la OIT, en 2006 había 2.9 mil millones de trabajadores en el mundo, de los cuales 1.2 mil millones eran mujeres. El organismo advirtió que hoy también hay más mujeres que nunca en situación de desempleo (81.8 millones), o destinadas a empleos de baja productividad en la agricultura o los servicios, o recibiendo menos paga por el mismo trabajo de los hombres.

Tres décadas de marginación

Los programas federales de combate a la pobreza no han sido efectivos por lo que parecen “métodos de exclusión y exterminio”, aseguran investigadores y académicos en un balance que hacen de las políticas aplicadas en las tres últimas décadas.

Erika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos

Desde la década de 1970 las políticas públicas que han pretendido paliar la pobreza de México han sido un rotundo fracaso. Hoy en día, 11 municipios de cinco estados de la República se encuentran en los niveles de marginación del África subsahariana, y más de una centena de comunidades están al borde de esta situación, revela el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006.

Especialistas en el tema aseguran que los programas de combate a la pobreza, aplicados desde la imposición del modelo neoliberal en nuestro país, tienen todos los sesgos de la marginación, discriminación y hasta “exterminio”, porque no han tenido un impacto positivo en más de 20 millones de habitantes que padecen pobreza alimentaria.

De acuerdo con estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI), las comunidades más afectadas son predominantemente indígenas y sus “actividades” se desempeñan en el agónico campo mexicano (Contralínea 72).

Alejandro Tuirán Gutiérrez, consultor externo del PNUD, quien participó en la realización del informe, dice que la falta de inversión en infraestructura es uno de los motivos por los que los índices de desarrollo humano (IDH) se encuentran en niveles deplorables.

Como ya lo había reportado Contralínea, el estudio arroja que Coicoyán de las Flores, del estado de Oaxaca, es la demarcación más pobre del país con IDH de 0.4455. Es seguido muy de cerca por Santiago El Pinar, de Chiapas, con un IDH de 0.4479, y por Metlatónoc, de la Montaña de Guerrero, con 0.4483.

Tuirán Gutiérrez explica que estas cabeceras municipales son las más aisladas de sus respectivas capitales, tienen problemas orográficos, existe más población indígena, no se invierte, no se generan empleos y, en consecuencia, tenemos una migración enorme.

“Éstos son los más descuidados, no existen servicios públicos, no se ha hecho absolutamente nada y lo peor parece que sólo sirven para hacer campañas políticas”, dice, en referencia a la presencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa en sus primeros días de gobierno, cuando visitó Metlatónoc. Añade que la estancia del primer mandatario fue “espectacular”, pero no se va a solucionar nada si no se invierte.

Para el consultor de Naciones Unidas no hay otra lectura: “hay dos México, el moderno que está inserto en la globalización y que mucha gente no ha querido reconocer, y el marginado, el aislado, que tiene niveles de pobreza y concentración del ingreso como África”.

Tuirán Gutiérrez asevera que una de las características de la pobreza es el ser indígena, y “hay una abierta segregación hacia ellos”. Hace referencia a la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México que llevó a cabo en 2005 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en donde se muestra claramente la visión que se tiene al respecto.

El análisis citado por el experto señala en su capítulo tercero -referente a la discriminación contra los indígenas- que el 43 por ciento de las personas encuestadas, de un universo de 765, opinan que “los indígenas tendrán siempre una limitación social por sus características raciales”; mientras, uno de cada tres encuestados dice que “lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas”.

Otro de los aspectos que se observan en el estudio que llevó a cabo la Sedesol, es que el “40 por ciento de los mexicanos está dispuesto a organizarse con otras personas para solicitar que no permitan a un grupo de indígenas establecerse cerca de su comunidad”.

En voz de los propios indígenas, nueve de cada 10 opinan que en México existe discriminación por su condición, 90.3 por ciento siente que tiene menos oportunidades para conseguir trabajo, tres de cada cuatro tiene menos oportunidades para ir a la escuela y dos de cada tres tienen pocas o nulas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida.

En el informe de la Sedesol, entonces encabezada por Josefina Vázquez Mota -ahora secretaria de Educación-, se destaca que “a pesar de los avances registrados recientemente, México sigue contando con niveles de pobreza y desigualdad mayores a los que corresponden a un país con su nivel de desarrollo.

“Una de las explicaciones de éstos fenómenos históricos, es la discriminación, entendida como la situación en la que, por prejuicios, a una persona o grupo de personas se les da un trato desfavorable, generalmente por pertenecer a una categoría social específica”, indica.

El consultor de la ONU agrega que “el gobierno, en todos sus niveles, no tiene a esta población como prioridad nacional, aunque en el discurso si lo hagan. Parece que son sólo parte del folclor y la cultura.

“Cuando se trata de la globalización, ésta se da en un solo sector de la sociedad, el más relacionado con la modernidad, ubicado en el norte del país y las tres grandes zonas metropolitanas (Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal). Donde está el rezago y la marginación más alta ahí va a encontrar indígenas, esto parece un exterminio”.

Pobreza histórica

Verónica Villarespe Reyes, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide con el consultor de Naciones Unidas y asegura que el libre mercado y la limitación del intervencionismo estatal en la política económica han acrecentado los índices de pobreza.

Villarespe Reyes, autora de los libros *Pobreza, teoría e historia* y *La solidaridad: beneficencia y programas, pasado y presente del tratamiento de la pobreza en México*, asevera que desde el agotamiento del modelo estabilizador, la polarización económica se acentuó gravemente.

La especialista explica que en los primeros años de la década de 1970 la concentración de ingreso en pocas manos se había hecho evidente. “Los términos de intercambio con el exterior se deterioraban cada vez más, se desaceleró la inversión y aumentaron las presiones inflacionarias, lo que mostró que las posibilidades de crecimiento no eran inagotables”.

A la situación económica que ya se mostraba polarizada, se añade el descontento social. Las movilizaciones políticas no se hicieron esperar, “un sector grande de obreros y campesinos, desempleados unos y con muy poco salarios otros, se asimilaban a las filas de los pobres. Los marginados del proceso de desarrollo, de industrialización, hacía tiempo que no importaban más que como un vivero de mano de obra descalificada”, dice.

En esta etapa, expone, “el Estado mexicano instrumentó los primeros programas de combate a la pobreza, con la intención de ‘paliar las desigualdades sociales’ y detener la explosión política”. Los instrumentos fueron canalizados, principalmente, al sector rural: en 1973, surge el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER) y en 1977 es creada la Coordinación General de Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupo Marginados (Coplamar).

De De la Madrid a Fox

En 1982 con Miguel de la Madrid, al frente del Poder Ejecutivo federal, se recrudecen los niveles de marginación con el privilegio que se le da a la apertura comercial y desaparecen pequeñas y medianas industrias, en consecuencia los índices de desempleo aumentan.

La investigadora indica que durante esta época y con la liberación comercial, se elabora una estrategia de ajuste que tenía como eje fundamental la reducción del gasto público y mantener los bajos salarios para abatir la inflación; sin embargo, a finales de 1987, ésta sigue su curso.

La asunción al poder de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, en 1988, trajo consigo el Programa Nacional de Solidaridad, “involucraba proyectos productivos, obras de infraestructura y obras de beneficio social, sin embargo la corrupción fue un factor coadyuvante en la pérdida de credibilidad”.

De “Solidaridad”, siguió en 1977 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progesa), con Ernesto Zedillo en la presidencia. Dicho plan estaba dirigido en las tres vertientes anteriores, y fue retomado por el gobierno de Vicente Fox, quien en 2002 cambió el nombre del proyecto, no así las condiciones de vida de millones de mexicanos que sobreviven en la marginación.

Villarespe Reyes, investigadora del Iiec, agrega que con los programas instrumentados por la tecnocracia mexicana, se “ha tratado a los pobres como si estuvieran fuera de la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, es decir, como si estuvieran aislados del sistema que los procrea”.

La experta cita a dos teóricos: Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998 por sus estudios sobre la pobreza, y al jurista inglés Matthew Hale, y dice que para el primero “la mejoría de la condición humana es más que una posición humanitaria justa, es enfrentar el orden y el caos social que pudiera presentarse en las sociedades perturbadas a causa de la pobreza.

“Para Hale, la pobreza en sí misma castra las mentes de los hombres o por lo menos se hacen hombres tumultuosos e inquietos y por ello el socorrerlos es un acto de gran prudencia civil y de sabiduría política: donde hay muchos pobres, los ricos no pueden estar seguros ni continuar como tales”.

Luego de conocer los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, Villarespe Reyes agrega que la pobreza en el caso de las étnias indígenas es realmente patética, porque hay quienes quieren dejar su visión del mundo pero tampoco tienen para qué la dejarla.

“¿A dónde se van a incorporar?, a una sociedad que los excluye cada vez más, este es un problema muy complejo y por más programas que se hagan de combate a la pobreza no se va a superar si no hay un cambio en la estructura económica. La mejor política social es una política económica incluyente que hoy no existe. Mientras no se vaya a dejar ese modelo neoliberal de apertura hacia el exterior y no haya un modelo de desarrollo nacional no se va a cancelar la pobreza en nuestro país”, concluye.

Publicado: Abril 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 77

Sobrevivir a la miseria

Incomunicados por lengua y ausencia de caminos, despreciados por autoridades gubernamentales y médicos, los tzotziles de Santiago El Pinar mueren en la montaña: el derecho a la salud es una frase sin sentido, como el agua encharcada y sucia que beben. Además de la marginación, que los coloca como el segundo municipio más pobre del país, los indígenas viven amenazados por paramilitares.

Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos

Santiago El Pinar, Chiapas. Al pie del camastro, rodeado por familiares y vecinos, se respira un hedor a sangre cuajada: “tiene el cuerpo podrido”, mascullan los tzotziles en un trabajoso español.

Por encima del cobertor asoma el rostro de Andrés, con el pellejo sumido hasta ser pómulos, una afilada nariz y sus nobles ojos negros, en los que se intuyen palabras que ya no puede decir: la fuerza sólo le alcanza para mirar.

Lepra, gangrena, tuberculosis. No saben siquiera el nombre, sólo atinan a explicar que este padecimiento “le cayó” hace año y medio y ahora lo descarna.

–Y tiene la tos –refieren con insistencia; aunque de ésa es testigo la media botella de plástico colocada a su lado, donde escupe flemas blancuzcas.

Para este mal, sus parientes le dan el único remedio al que tienen acceso: un jarabe naturista de nombre Eucalín, hecho de eucalipto y miel, con el que pretenden burlar su aletargada muerte.

Andrés hunde su cabeza en una almohada de hierbas curativas, en vano ocultas detrás de unas cobijas y ropas que a la vez son colchón. Con gran esfuerzo recarga la mirada en las visitas y escucha, o al menos eso parece, los comentarios sobre su enfermedad.

Hace tres meses que ya no se levanta y apenas come la tortilla que le arrima Micaela, su madre, o toma el pozol (bebida caliente y agridulce hecha con maíz y agua). Ésa es la dieta de diario y para todos.

La magra alimentación que recibe e incluso el agua que bebe –extraída de un “pozo” natural, donde lo mismo flotan hierbas que nadan renacuajos– se refleja en su silueta: del joven cuerpo de 35 años, la manta cuadriculada sólo dibuja huesos.

Ningún médico ha venido a verlo, a pesar de los ruegos de Micaela; quizá porque para llegar a esta casa, enclavada en la comunidad de El Carmen, hay que subir una cuesta serpenteada que a ratos se imagina interminable. Cuarenta minutos a paso regular separan al pueblo de la carretera a la altura de Nínamo, y si se quiere llegar hasta la cabecera municipal, hay que andar más de una hora.

Sin Oportunidades

Descalzos, los pies de Micaela se ajustan a la tierra anaranjada. Las hendiduras que se le han formado tras años de largas caminatas semejan las grietas de la senda, donde la cuaresma empieza a borrar el verdor de la montaña. Como la mayoría de mujeres tzotziles, viste un huipil blanco bordado en un tono carmesí y nahuas azules sujetadas a su cintura por la faja roja. De su brazo derecho cuelga un suéter color lila.

La señora, menuda y algo encorvada, regresa a casa en silencio, con los puños cerrados y los ojos casi rezumando el dolor y la rabia. Las piedras sueltas se le clavan en los talones o se le empotran entre los dedos, pero eso poco la abruma: en el camino, que de cuando en cuando es tan estrecho como cuerda floja, se le va quedando la esperanza.

Apenas asoma su vivienda, la primera que se divisa al llegar a El Carmen, Micaela desaparece tras los adobes. Aunque llega acompañada de unos fuereños, no trae la buena noticia que fue a buscar, muy temprano, hasta la cabecera municipal.

Y es que ahora sabe que los médicos del IMSS también pueden declararse incompetentes para auscultar a los enfermos: “No tienen Oportunidades, madre”, se excusó la doctora cuando ella le rogó, a través de un intérprete, que subiera a ver a su hijo Andrés “porque se está muriendo”.

“La doctora no quiere venir”, denuncian los indígenas. “Es que no hay carretera”, lo saben bien. Ni siquiera las caravanas de salud se acercan a estos lares, a pesar de que el doctor Francisco Mariscal, coordinador de este programa estatal para la región de Los Altos, afirma que todos los pueblos son visitados por sus médicos.

Pero en esta zona, la salud -consagrada en la Constitución- no es un derecho para todos: la atención en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social depende de la afiliación a los programas Oportunidades y Seguro Popular; y, en el mejor de los casos, del abasto de medicamentos o de la presencia del médico.

Además, las unidades del IMSS sólo brindan auxilios preventivos, también conocidos como de primer nivel. Si se requiere de una intervención quirúrgica o atención de segundo o tercer nivel, los indígenas deben trasladarse a San Cristóbal de las Casas. Hecho casi imposible, pues aquí la economía es de autoconsumo.

El gobierno estatal tampoco resuelve el problema. La Secretaría de Salud, a cargo de las brigadas médicas, no considera a Santiago El Pinar entre sus prioridades, a pesar de que éste es el segundo municipio más pobre del país, según el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, de la Organización de las Naciones Unidas (Contralínea 72).

El estudio, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, revela que Santiago El Pinar registra un Índice de Desarrollo Humano de 0.4479. Mientras que el Instituto de Salud estatal indica que la tasa de mortalidad general en 2000 fue de 7.82 defunciones por cada mil habitantes, y de 97.22 con respecto a la mortalidad infantil.

Nínamo

La realidad cae como golpe seco sobre Andrés y su familia: la ausencia de camino; la falta de dinero siquiera para pagar 400 pesos del pasaje a San Cristóbal, 300 pesos de la consulta más lo suficiente para comprar las medicinas y pagar la alimentación; incluso la carencia de agua entubada, van minando las posibilidades de supervivencia del joven.

Aquí, todo es infranqueable distancia. Las ocho viviendas del pueblo se miran desperdigadas en la montaña: como espejos, los cielos rasos de lámina reflejan los rayos de sol.

Desde la estructura misma, las casas dan cuenta de la miseria subsahariana que acusa la ONU. Paredes de adobe reseco o maderos separados, ennegrecidas al interior por la humareda del fogón donde a diario se cuecen los frijoles; los pisos nomás de tierra,

porque no alcanza para suelo firme, menos para tabique o losa; escasas ropas apiladas sobre los camastros improvisados con tablones; ni un mueble para el descanso.

Y qué decir del testimonio vivo: lánguidos cuerpos son los pobladores, sobre todo los niños y niñas que pasan su infancia en los campos de maíz y frijol o en las veredas, cargando leños, agua o cosecha. El cinto del mecapal se ciñe en sus cabezas, como una diadema que los obliga a arrastrar la mirada a la tierra.

Con al menos una centena de troncos sobre la espalda, Manuel López Pérez baja esta montaña que más temprano remontó Micaela. Aunque vive en Nínamo, el joven de 34 años y padre de cuatro hijos sube diario los 40 minutos a El Carmen para recolectar madera.

“Todos salimos, mi esposa, mis hijos, vamos por leña. También cuando cortamos café, vamos todos. La gente trabaja desde los 5 años. Los niños regresan de sus clases y tienen que ayudar a traer leña o en el campo.”

En esta comunidad, al igual que en la cabecera, la gente cultiva café. Sin embargo, Manuel explica que esta actividad no es garantía de una vida mejor. “Ahorita no hay buen precio. Al veces hay precio y al veces no. Ahorita pagan 15 pesos, mañana 14. Se necesita dinero diario: cuando tenemos tres o cuatro hijos, gastamos 200 o 250 pesos cada día. Pero del café no hay precio, por eso no nos va a alcanzar el dinero”.

De su carga, que pausado baja y distribuye en la pared de su humilde casa, indica: “lo amarramos con el lazo, porque no tenemos caballo para bajarlo; entonces lo ponemos en la cabeza con el mecapal. Está duro, sí cansa. Así está la gente, porque no tenemos dinero para comprar. Cuando no hay precio (del café) no sale ni lo de la siembra”.

Manuel Méndez Gómez, residente de la cabecera municipal, confirma la crisis del café. El hombre, incapacitado por una herida en el pie hecha con su propio machete, asegura que la culpa es de los “coyotes”, quienes pagan a 13.50 pesos el kilo, bajo el argumento de que les sale muy caro el transporte de la semilla.

Santiago El Relicario

Los productores de café parecen condenados, todos. En Santiago El Relicario tampoco hay vida digna para los tzotziles. Ubicada a tres horas y media de la cabecera municipal -donde, a pesar de la brecha para los carros, las distancias se miden por el tiempo caminado-, la comunidad está en riesgo de caer en una economía de autoconsumo.

Marcos López, representante del municipio en este pueblo, explica que el producto “se vende poco. Los coyotes sólo pagan 12 o 13 pesos por kilo”. Ni con los 360 pesos del Oportunidades alcanza para vivir mejor, dice.

El indígena reconoce que no todas las familias, 25 en total, reciben recursos del programa de desarrollo social. Y aclara que aun cuando algunos tienen el beneficio, “no alcanza”.

“Es muy poquito. Tenemos que comprar jabón, azúcar, sal, ropa, zapatos. Por eso hasta los niños trabajan en el campo.”

Pero la prioridad no es el precio del café, sino el agua potable. La comunidad depende de un riachuelo que queda a una hora de distancia. “Diario vamos al manantial porque diario hay que tomar agua. (Para traerla) Sólo se necesita el tubo, pero es caro. Mil 200 metros, creemos que se necesita de tubo”.

Aunque la comunidad prefiere “no quejarse tanto”, también se requiere de escuela secundaria. Los adolescentes caminan hasta cuatro horas para llegar a la cabecera; mientras que la oportunidad de estudios para las niñas se reduce a nivel primaria, pues “es muy peligroso” que anden tanto tiempo solas en las veredas.

Y es que otro de los problemas que azota a estos pueblos es la paramilitarización. De acuerdo con autoridades de la Junta de Buen Gobierno Oventic, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Santiago El Pinar registra actividades de corte paramilitar, sobre todo en contra de bases de apoyo zapatistas, pero también de población civil (Contralínea 76).

“Somos un municipio muy pobre”, reconoce el presidente municipal Manuel Gómez Gómez, quien declara incompetente a su administración para resolver los problemas más urgentes, pues sólo recibe 3 millones de pesos como presupuesto anual.

El funcionario indica que, tan sólo para abrir camino y dar revestimiento a El Carmen, se requieren 4 millones de pesos, mientras que para comunicar a la comunidad de Calob, se necesitan 6 millones de pesos.

De las 13 comunidades que forman el ayuntamiento, Manuel Gómez observa que Calob y El Carmen son las más marginadas: por falta de camino y servicios como agua entubada y energía eléctrica.

Santiago El Pinar es un municipio joven. Se creó en 1999 con la remunicipalización de Chiapas, calificada por académicos y activistas como acto de contrainsurgencia. La población total asciende a 2 mil 174 habitantes, y representa 0.45 por ciento de la regional y 0.06 por ciento de la estatal.

“Éste es el último año de mi periodo y quisiera que tanto el gobierno estatal como el federal den prioridad a Santiago El Pinar, porque hay alta marginación. Somos muy pobres y es muy poco recurso el que nos destinan. Aquí no hay casi nada de avance”, dice el presidente municipal.

Publicado: Mayo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 78

CARAVANAS MÉDICAS

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Francisco Mariscal Ochoa, médico responsable del programa estatal “caravanas de salud”, apunta en una libreta el nombre de Andrés Díaz Ruiz y las referencias para llegar a su casa. Se apresura a extender el compromiso de que alguno de los miembros de su equipo –formado por 12 unidades móviles con médicos, enfermeras e instrumental para brindar atención preventiva– viajará a El Carmen para auscultar al enfermo.

Sobre la ausencia de unidad móvil en el municipio Santiago El Pinar, el coordinador operativo de atención médica de la jurisdicción sanitaria II, explica que en la zona de Los Altos la Secretaría de Salud chiapaneca sólo tiene identificados como prioritarios, por su alta marginación, a los ayuntamientos de Pantelhó, Zinacantán, Aldama, Chamula, Chenalhó, Chalchihuitán y Mitontic.

Advierte que las brigadas de salud dan atención a todas las comunidades de estos seis municipios, incluso las que no cuentan con caminos, pero se excusa de cubrir la montaña en Santiago El Pinar, pues éste no se encuentra en la lista de urgente atención.

A pesar de las evidencias, Cuauhtémoc Zapata Cabrera, coordinador de epidemiología, indica que en Los Altos los indígenas tienen plenamente garantizado su derecho a la salud, y se dice sorprendido por la aseveración de la ONU, referente a que el índice de desarrollo humano registrado en Santiago El Pinar es comparable con los de África subsahariana: “Nunca había escuchado ese panorama africanizado”.

Explica que “tenemos 57 centros de atención médica de primer nivel, distribuidos en los 18 municipios de Los Altos. Los principales padecimientos son enfermedades diarreicas infecciones respiratorias agudas, que prevalecen más en los grupos extremos, que son los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60 años.”

Para Enrique Castro Muñoz, asesor de la jurisdicción sanitaria, la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con el IMSS, da una cobertura del 98 por ciento, tanto en zonas rurales como urbanas.

En casos como el de Andrés, el médico responsabiliza a los propios indígenas de no atenderse a tiempo. Además desestima que la falta de infraestructura, personal y medicamentos socaven la garantía y el acceso a la salud de los pueblos indios.

Señala que el acceso a los servicios médicos sólo se dificulta “desde el punto de vista geográfico, porque hay localidades en donde no entra carro, hay que entrar a pie. La dispersión de la población sigue siendo difícil, incluso la cosmovisión que llegan a tener en relación al proceso salud-enfermedad y al concepto que tienen de la vida. Hay que acordarse que Chiapas, y en especial Los Altos, es un mosaico de culturas que entran en contacto y que están en una dinámica constante. Ése también sigue siendo un problema de accesibilidad”.

Castro Muñoz añade que “hay problemas no sólo de accesos sino también de comunicación: en esas localidades, la mayoría de las personas es monolingüe, (además de) su cosmovisión. Es muy difícil llegar a cambiar de la noche a la mañana esa cultura

y esa cosmovisión que tienen. Pero la infraestructura y la cobertura, del Seguro Social y de la Secretaría, es muy importante”.

Indicadores de la marginación

Santiago El Pinar se ubica en las montañas del norte, en Los Altos de Chiapas, y limita al este con el municipio Aldama, al sur y oeste con San Andrés Larraínzar y al norte con El Bosque y Chalchihuitán. Tiene una extensión territorial de 17.76 kilómetros cuadrados, que representa el 0.47 por ciento de la superficie de la región y el 0.02 por ciento de la superficie estatal.

De acuerdo con el II Censo de Población y Vivienda 2005, de los 2 mil 174 habitantes del municipio, 2 mil 86 personas hablan lengua tzotzil. En 2000, Santiago El Pinar presentó un índice de analfabetismo del 68.48 por ciento, de una media estatal de 22.91 por ciento, refiere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El INEGI reporta que en 2000 se registraron 296 viviendas particulares habitadas, de las cuales 99.32 por ciento son propiedad de sus habitantes, mientras que 0.68 por ciento no son propias. En cada vivienda el promedio de ocupación es de 5.98 habitantes. Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 79.39 por ciento de tierra y 19.26 de cemento y firme. Las paredes son 63.85 por ciento de madera y 25 de tabique. En techos, 71.28 por ciento son de lámina de asbesto y metálica y 10.14 de teja.

En cuanto a servicios públicos, el INEGI reporta que el 83.78 por ciento de las viviendas disponen de energía eléctrica, 89.86 por ciento de agua entubada y 1.69 por ciento cuentan con drenaje.

Publicado: Mayo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 78

Pueblos marginados de la educación

Donde hay pobreza hay analfabetismo y deserción. Mientras los maestros resisten, los alumnos aprenden en aulas desvencijadas, sin piso ni agua, sin cuaderno ni lápiz. Su única lección: la falta de oportunidades. El rezago educativo en el que viven las comunidades más pobres del país no es prioridad para el gobierno

Paulina Monroy / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Mitontic, Chiapas. Tronco es la mesa y tronco la banca donde toman clases los niños tzotziles de este municipio, el décimo más pobre del país, de acuerdo con la ONU. Su pizarrón es de papel y el lodo su plastilina, las hojas y las piedras su material didáctico y la olla de arroz su desayuno escolar que preparan sus madres dos veces a la semana.

En los parajes de Mitontic la oferta escolar es la escasez de agua, el suelo de arena y la educación trunca. Los maestros vienen y se van por la miseria y el nivel educativo se reduce al jardín de niños y los primeros grados de primaria. Cuando ni siquiera hay colegio, como en Baachén, improvisan aulas en desencajadas casas de madera y lámina, donde una veintena de estudiantes se sientan apretujados en un tablón.

Los niños de Baachén aprendieron que bolam y gato significan lo mismo, mientras el maestro lo dibujaba en un cartoncillo negro que les dio el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para utilizarse como pizarrón.

“Nos van a dar cartón hasta el próximo año y yo creo que es muy poco, es desechable”. Maurilio, instructor comunitario, señala los escasos rincones que quedan en la pared de esa habitación prestada, donde cuelgan los trabajos de los niños.

Después de mucho insistir, Maurilio logró que el Conafe otorgara ocho sillas y tres mesas. El maestro de 22 años dice que fue “para teparle el ojo al macho”, y expone que cuando él y sus dos compañeros llegaron, en enero, impartían su cátedra sentados en el piso y al aire libre.

Capacitados por el Conafe, los tutores son también tzotziles y caminan media hora por cerros y brechas para impartir cátedra bilingüe a escolares que no comprenden el español. La beca que reciben no les alcanza para pagar su transporte. “No hay espacio, se nos dificulta mucho y hacemos lo más que podemos”, lamenta Maurilio.

El maestro lo mismo enseña a niños de preescolar que de primaria. Los tutores tienen alumnos de hasta 10 años de edad que no saben leer ni escribir. “Van poco a poco: nunca habían ido a clases, ni siquiera habían visto una escuela”. Fue en este año cuando comunidad comenzó la construcción de sus instalaciones educativas, ahí donde se erige ese esqueleto de madera amarrado con mecates sobre el agreste paisaje de Baachén.

Los maestros han sido bien recibidos y hasta los adultos que jamás habían estudiado están ansiosos por hacerlo, pero Maurilio alerta que “no podemos darles nada a los alumnos porque crece la demanda”. Con todo, ni Maurilio ni sus compañeros profesores tzotziles están dispuestos a irse porque “los niños nos mantienen adelante”.

Pese a ello y aún cuando la función del Conafe es revertir los niveles de analfabetismo y deserción, Mitontic, municipio predominantemente indígena, encabeza la lista de las comunidades chiapanecas con mayor grado de analfabetismo.

Chiapas es la entidad con mayor rezago educativo. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 arrojó que el 57 por ciento de sus habitantes de 15 años o más no sabe leer ni escribir. También Mitontic ocupa el segundo lugar en el índice de población con primaria incompleta, es decir el 73 por ciento del total de personas de 15 años o más no concluyeron su educación básica.

La realidad de Mitontic se repite en los 11 municipios más pobres del país, que también son indígenas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estas comunidades tienen Índices de Desarrollo Humano (IDH) comparables al de países del África subsahariana.

Los especialistas advierten que si bien los programas de educación rural reportan resultados, no han sido los óptimos. Por el contrario, el asistencialismo, los malos manejos presupuestales, el menoscabo de las políticas actuales y la falta de un proyecto que respete la educación intercultural van en detrimento del progreso en las comunidades indígenas.

Brecha cognoscitiva

De los tres componentes que forman el IDH, salud, ingresos y eno de los Pueblos Indígenas 2006 revela que el índice de educación para los no indígenas es de 0.8841 y para los pueblos originarios es 0.7319, 17 por ciento menos.

El informe expone que los niveles educativos más altos se presentan en el Distrito Federal, mientras que en Chihuahua hay más desequilibrio interétnico con una diferencia de 34 por ciento. “En Oaxaca, Guerrero y Chiapas los índices de alfabetismo continúan siendo menores al 0.8. Debido a ello, estos tres estados ocupan los últimos lugares en el índice educativo”, enfatiza el informe.

Guanajuato, Michoacán y Chiapas se ubican en los tres últimos sitios de asistencia escolar, con valores por debajo del 0.75, “lo que significa que uno de cada cuatro niños y jóvenes de seis a 18 años no asisten a la escuela”, subraya el reporte elaborado por el PNUD y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, 16 de las 25 regiones indígenas –definidas de acuerdo con la distribución espacial de los diferentes grupos etnolingüísticas– tienen indicadores educativos inferiores al 0.8, y 11 del total tienen un grado de asistencia escolar menor al 0.75, de las que sobresalen los Altos de Chiapas y la Tarahumara.

Donde se observan mayores contrastes entre el nivel educativo de indígenas y no indígenas, es en las zonas de la Huicot, en la región “Cuicatlán, Mazateca, Tehuacan y Zongolica”, en la Selva Lacandona, la Mixe, la Tarahumara y la Montaña de Guerrero.

En estas dos últimas zonas despuntan loducación, este último presenta la brecha más grande entre indígenas y no indígenas. El Informe sobre el Desarrollo Humas bajos índices de alfabetismo que están por debajo del 0.5, “lo cual quiere decir que más de la mitad de la población de 15 años y más no sabe leer y escribir”.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en 2005 existían 71 mil 278 localidades que no contaban con servicios educativos de la SEP. Al respecto, Carlos Ornelas, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera que la lejanía y la dispersión de las 150 mil comunidades de menos de 100 habitantes impiden que llegue la educación y se construyan escuelas.

“Los pobres son quienes no asisten a la escuela y son también a quienes el Estado les brinda menor servicio. Los pobres entre los pobres, los miserables, no se pueden organizar por el aislamiento, no juntan capital social como para exigir que se les presten servicios. Entonces el analfabetismo y la pobreza se reproducen”.

El investigador apunta que la brecha cognoscitiva que existe entre indígenas y no indígenas es un obstáculo difícil de sortear por la miseria, pero “también por las fallas institucionales, pues la burocracia oficial no hace bien su trabajo. Esta disparidad no se puede romper nada más con la escolaridad, sino que debe ir acompañada de programas y estímulos más importantes que tengan que ver con acceso a la lectura y a la tecnología digital”.

María Jesús Salazar Muro, coordinadora del área de educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), observa que la discriminación va a la par de la falta de oportunidades. “Nuevamente vemos a los indígenas y los rechazamos. Al enfrentarnos a eso, nos preguntamos cuándo vamos a poder siquiera abordar el problema”.

Educación, alto costo

Debido a la falta de oportunidades y condiciones, la educación en las regiones más marginadas tiene un alto precio: “las comunidades subsidian a sus escuelas y maestros. Ahí donde deberían llegar las escuelas y los recursos, ellos ponen la banca, el pizarrón, el gis y para ellos es un costo muy alto a pagar”, describe Salazar Muro.

Por ello, agrega, los docentes rurales tienen que buscar permanentemente apoyos que fortalezcan la infraestructura del aula con el gobierno y asociaciones civiles.

Y es que, para la catedrática, la falta de infraestructura y la distribución de los ingresos hacen imposible el trabajo de los docentes: “La formación, la recuperación lingüística y cultural se rezagan porque no está en las manos de los docentes resolver cuestiones de administración y gestión escolar. Sin un proyecto global, sigue sin ser la educación indígena prioritaria para el sistema educativo”.

Además, hay un grave problema en la preparación de docentes: “No está adecuada a las costumbres y a la lengua de las regiones. Los maestros indígenas no están bien ubicados y no tienen ese referente cultural del grupo en el que desarrollan su práctica. Los niños que son educados por maestros que no tienen ni su lengua ni su cultura están en una desventaja terrible”, considera la coordinadora de educación indígena.

Desde esa perspectiva, la UPN atiende a 170 alumnos en la licenciatura de educación indígena. Del total, el 80 por ciento son de origen indígena y provienen de comunidades de extrema pobreza.

Salazar Muro explica que son estudiantes que cargan una educación deficiente. “Vienen de bachillerato abierto, telesecundarias, grupos multinivel, procesos muy poco sistematizados de educación. Tienen entonces dificultades para adaptarse a horarios y a un ritmo de trabajo. Además llegan con problemas de comprensión de lectura porque se enfrentan a una lengua que no es la suya”.

Educación comunitaria rezagada

Del total del presupuesto del Conafe durante 2005, 19 mil 226 millones de pesos, el 11 por ciento, se destinó a la educación básica comunitaria, otro 11 por ciento para apoyar a alumnos de escuelas marginadas, y el 78 por ciento se transfirió al Programa Oportunidades en su componente educativo.

Aún cuando el Conafe tiene como atribución facilitar la educación básica a niños en edad preescolar y escolar en las zonas rurales marginadas, en el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006, el organismo admite que en el período 2001-2005, mientras los recursos crecían para el programa Oportunidades, para educación comunitaria y los

programas compensatorios –orientados a surtir de equipo y material a las escuelas de bajos recursos– el presupuesto disminuía.

El organismo descentralizado de la SEP declara que es a partir del ejercicio fiscal 2002 que el Consejo no cuenta con recursos para obra pública dentro del Programa Integral de Educación Comunitaria (PIEC). Por lo que tuvo que reprogramar sus partidas presupuestales, sin afectar al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, dedicado al otorgamiento de becas. Incluso en el 2004, el Conafe contrató crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cubrir acciones a desarrollar del PIEC, préstamo que no pudo liquidar al año siguiente.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, considera que aunque Oportunidades es un programa que coadyuva, “una beca no resuelve un problema mayúsculo de fondo, la pobreza, la marginación y la falta de inversión”.

Coincide el investigador Carlos Ornelas, quien indica que la beca para los niños es el principal ingreso de la familia. “Oportunidades, antes Progresía y Solidaridad sí muestran eficacia, pero no es la solución para resolver toda la reprobación y la deserción en la primaria”.

Sobre el tema de la educación comunitaria impartida por el Conafe, Ornelas considera que aún cuando se dice que el nivel educativo es malo, “sin esos cursos estaríamos peor y el valor agregado de la instrucción comunitaria es mayor respecto a la educación privada, porque lo que enseñan es mucho en comparación con lo que saben los estudiantes”.

El miembro del Comie expone que los recursos son insuficientes para reclutar instructores y últimamente el ingreso de nuevos jóvenes ha decrecido, pues “no alcanzan para retener a los tutores, sobre todo mientras más pequeña y más alejada esté la población”.

En la Auditoría de Desempeño a los Programas para Abatir las Disparidades en Educación Básica, la ASF concluye: “El Conafe atendió al 45 por ciento de las 645 mil de personas que residen en localidades aisladas y de difícil acceso, que no fueron atendidos por el sistema formal de la SEP. Lo que implicó que 360 mil permanecieran sin atención”.

El máximo órgano fiscalizador observa que el 63 por ciento de los alumnos atendidos no adquirió las habilidades suficientes de comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas establecidas en los programas de estudio.

Conjuntamente, “el Conafe no estableció metas para medir el cumplimiento de objetivos relativos a terminar con las disparidades en el acceso, permanencia y logro educativo, ni para los indicadores de egreso, aprobación y permanencia de los alumnos de primaria comunitaria, que permitieran medir el avance en la adquisición de competencias y habilidades de los estudiantes”.

Bravo Padilla opina que el trabajo del Conafe para equipar a las escuelas rezagadas es insuficiente. “No hay avance. Tenemos escuelas con cero mantenimiento desde hace

muchos años, la planta de maestros ha envejecido y no hay programas para renovarlos. Se han construido instalaciones con bastantes carencias y problemas de corrupción, falta de vigilancia y supervisión de la obra”.

Para el diputado perredista, el rezago educativo de los municipios más pobres del país se debe a la falta de coordinación entre entidades y la Federación, los problemas de corrupción y que el interés político esté ajeno al interés educativo. “O la desviación de recursos, que es precisamente lo que aparece en el informe de la Auditoría respecto al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica para los estados.

“Por parte de la SEP sí se ve un esfuerzo, pero no por parte de todo el gobierno para darle la prioridad número uno la educación”, insiste el congresista.

La catedrática María Jesús Salazar Muro reitera que la educación indígena para el Estado no es fundamental, mucho menos una educación intercultural que incluya los contenidos y la visión de los grupos étnicos.

“Los estímulos para los docentes llegan a cuentagotas, sin una formación que busque sensibilizarlos y hacerlos investigadores de su propia práctica, que los haga pensar en una propuesta educativa que incluya a la diversidad y al país multilingüe que somos”, enuncia.

Ornelas pronostica que los programas educativos para las regiones de muy alta marginación continuarán funcionando en lo que resta del sexenio.

“Ha habido continuidad en planes y proyectos desde el gobierno de Salinas. Con Zedillo era lógico, él fue secretario de Educación, y con Fox lo mismo. Intuyo que van a seguir y no hay mucho para dónde hacerse; la burocracia no tiene mucha imaginación. El sindicato impone sus condiciones y favorece la rutina”.

Publicado: Mayo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 78

Tracoma, atraso y miseria

A mitad del sexenio foxista, Chanal era considerado entre los cinco municipios más miserables del país; sin embargo, la pavimentación de ocho kilómetros en la cabecera y la construcción de ollas de agua, que a la fecha no almacenan ni una sola gota, son justificantes de su nueva condición oficial: marginación moderada. Pese a esto, el ayuntamiento aún se ubica en el segundo sitio con mayor índice de tracoma en México, enfermedad relacionada con la pobreza extrema

Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Chanal, Chiapas. En la mirada de Juan Diego hay un velo eterno: son dos molestas nubes que lo acompañan a todas partes, le estorban, no lo dejan ver, lo peor es la picazón en los ojos, el dolor, las punzadas y el escozor que se le extiende por la cara.

El niño se desespera, se jala los párpados, repetidas veces rasguña la piel con sus largas uñas rellenas de tierra, hasta que revienta pequeños granos anidados alrededor de sus ojos y brota un amarillento líquido que hace más intensa la comezón.

Juan Diego extiende las manos, jala la manga del raído suéter y con la tela renegrida de mugre se retira la pus que le nubla la visión. Tiene tracoma, el legendario mal que como peste azota esta tierra, sinónimo de atraso, ausencia de agua, falta de higiene. Síntoma palpable de miseria.

El tracoma se agudiza con el hacinamiento. Juan Diego vive con sus ocho hermanos y sus papás, apilados en un galerón que les sirve de casa en la comunidad Nuevo Porvenir, a seis horas de distancia de la cabecera municipal.

El niño no recibe atención médica, su familia no está empadronada en el programa Oportunidades, y como el ex gobernador Pablo Salazar presumió que en su gobierno el tracoma quedó erradicado, la organización Médicos Sin Fronteras –que hasta hace años daba consultas ambulatorias con especialistas clínicos– ya no llega a esta zona.

Ch'lam tsots

Los informes médicos dicen que el tracoma es una enfermedad propagada por las moscas, y que una persona infectada contagia a otras a través del contacto directo con el ojo, por las secreciones de la garganta o el uso de ropa y objetos contaminados. Es un mal progresivo.

En Chanal, ante la falta de higiene y de atención médica, el futuro inminente de quienes lo padecen es la ceguera. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando el mal empieza, los ojos se ponen rojos, apenas si duelen. Cuatro semanas después, en la parte interna de los párpados se forman puntos blancos y amarillos, luego se abultan, se ulceran, se revientan y se vuelven cicatrices. Dichas cicatrices jalan las pestañas hacia dentro del ojo, rasgan el globo ocular, lo ulceran, provocan pérdida visual hasta la ceguera total, acompañada de la infección que en ningún momento cesa.

Pese a los discursos oficiales, el ch'lam tsots (pelo doble), como llaman los indígenas al tracoma, se ha extendido en los últimos 40 años exclusivamente en esa región, atribuido por los tzeltales a un “castigo divino”. A raíz de haber contraído el tracoma, muchos se refugian en la religión en busca de remedio.

Después de Oxchuc, Chanal es el segundo municipio con mayor incidencia de tracoma en el estado y en el país. Desde hace más de 5 mil años la enfermedad se relaciona con la pobreza extrema. Actualmente sólo dos países de el continente no han logrado erradicarlo: Haití –considerado el más pobre de toda América– y México.

Según el Instituto de Salud de Chiapas, hay 126 casos de tracoma activo y 752 de tracoma no activo, aunque en realidad no hay un censo exacto: en las zonas incomunicadas del municipio, no se tiene un padrón de los enfermos porque ningún médico ni autoridad visita estos poblados, donde cada día hay nuevos infectados.

Sajanich es la comunidad más asilada de Chanal y es donde hay mayor incidencia de tracoma. La razón es la falta de agua y de luz eléctrica, tampoco hay combustible

alterno al ocote, que usan los indígenas lo mismo para alumbrar las chozas que para cocinar los alimentos. El problema es que al quemarse la resina del ocote despiden mucho humo y al entrar éste en contacto con los ojos, arrece el tracoma.

Para llegar a Sajanich, desde la cabecera municipal hay que cruzar entre el monte, el bosque y la cañada, ocho horas a pie, como cruzan los lugareños.

Es el camino que cruzó el viejo Cipriano para atenderse de urgencia en el hospital de Chanal. Desde los siete años padece tracoma. Ahora tiene 77 años y está casi ciego. Siembra en el monte y se cae a cada paso. La víspera se descalabró, aún tiene abierta la piel, la sangre seca le cubre la frente. Vino a la cabecera para que le revisaran los ojos y le sanaran la herida. Llegó de la mano del otro Cipriano, su nieto de 10 años de edad, que le sirve de lazarillo.

Para su mala suerte, al mismo tiempo en que llegaron al hospital, a bordo de la ambulancia llegó también una mujer sobre la que cayó un árbol mientras cortaba leña. Cipriano esperó afuera del hospital durante casi una hora. De pie, recargado en el brazo del nieto, aprovechaba cada instante para tallarse los ojos, como si con el escarceo, con la expulsión de la supuración amarilla y espesa, encontrara alivio al dolor y ardor que inunda aquellas cuencas, que desde hace mucho dejaron de avistar el mundo.

Nadie lo auscultó. Cansado, echó a andar de la mano de su nieto. Pasado el medio día los dos Ciprianos se perdieron entre el monte. Su retorno era largo, querían llegar a casa antes de que el último fulgor del día se extinguiera.

La espera de Cipriano hubiera sido en vano. En el hospital de este municipio no hay oftalmólogo, ni quien pueda suministrar tratamiento para el Ch'lam tsots.

Para erradicar el tracoma, en 2003 la Asociación Mexicana de Salud y Economía (AMSE), filial de la Asociación Internacional de Salud y Economía (AISE), diseñó el programa Tracoma: ni un ciego más en Chiapas. Se planteó en cuatro años erradicar la enfermedad, que amenaza con dejar ciegos a más de 15 mil tzeltales de cinco municipios de Chiapas, entre ellos Chanal.

El proyecto incluía dotar de cirujanos de primer nivel, equipo médico, medicamentos, jabones para aseo personal, detergentes para la ropa, educadores de salud, plantas tratadoras y purificadoras de agua y un programa de nutrición para exterminar el tracoma. El plazo concluyó, el mal subsiste.

Los gobiernos federal y estatal se comprometieron a instalar ollas de agua y suministrar el líquido potable a las comunidades, obra pública que terminó con el fraude de constructoras y funcionarios.

El fraude de Salazar

En Nuevo Porvenir, como en todas las comunidades de Chanal, el principal problema es la falta de agua, lo que incide en todos los males de la comunidad. En sus tiempos como gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, evangélico como los tzeltales de este paraje, prometió que les daría su olla de agua, “agua de hule”, dicen los lugareños.

Con recursos federales, en 2005 la olla se construyó dentro del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los pueblos indígenas y el subprograma de asistencia social y servicios comunitarios en conjunto con el gobierno de Chiapas, Uno con Todos.

Pablo Salazar adjudicó de manera directa la obra a Alejandro Antonio Vela Sánchez, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas. La olla nunca sirvió. Para evitar demandas, el acta de entrega que el gobierno estatal y la constructora formalizaron con los indígenas el 13 de julio de 2005 se hizo en hojas blancas sin sello oficial.

Dos temporadas de agua se han perdido: la construcción está cuarteada y no hay gota de agua que pueda retener. Los lugareños han viajado a suplicar que se les repare su olla. Nadie los escucha. “No entienden el clamor de los tzeltales”, dice Sebastián, representante de la comunidad.

Pobreza en el bosque

Chanal se fundó en 1882, en una extensión de 295 kilómetros cuadrados, en un terreno accidentado en la región de los Altos, en medio de un bosque de pino que hoy está prácticamente devastado. Entonces las casitas eran de madera, palopique, paja, palmita y adobe; 125 años después, la mayoría de las viviendas siguen igual, salvo las de quienes han emigrado a Estados Unidos, que las hacen de block, cemento y techo de lámina.

En el municipio habitan 8 mil 500 indígenas tzeltales distribuidos en seis barrios en la cabecera municipal y 12 comunidades y parajes. Viven en el hacinamiento, en condiciones insalubres, desnutridos, enfermos, sin trabajo y en medio de un tenso clima social provocado por la oposición política, la violencia intrafamiliar y el alcoholismo.

Éste último es el principal problema social en Chanal. La doctora Berta Mandujano dice que la cirrosis es una enfermedad común en los hombres, al igual que los padecimientos del hígado y los riñones, producto de la ingesta de alcohol. Luego está la violencia intrafamiliar y los accidentes por la misma causa, suicidios y casos de incesto donde todos los agresores están bajo estado de embriaguez.

De ser una tradición de usos y costumbres, la ingesta de posh es un verdadero conflicto. Se trata de una bebida fermentada a base de maíz, aguardiente y panela. Antes se preparaba en el mismo municipio, pero ahora se trae de San Juan Chamula.

Sobre la importancia que el alcohol tiene en este pueblo, en 1980 un alcalde impuso la Ley Seca y un grupo del pueblo lo azotó, lo torturó con met (nopal espinoso) y lo macheteó. Su cuerpo fue exhibido con las huellas de tortura durante varios días.

Las mujeres son quienes desprecian el posh, “vil chucho” (perro) le llaman, porque dicen que en el embriago sus esposos se vuelven como perros con rabia.

La desnutrición malogra la infancia. Los enanos cuerpos de los niños de vientres abultados y estómagos vacíos, exhiben una delgada piel entintada de jiotos, cubierta de salpullido y mesquinos. Si se enferman de diarrea, los aniquila la parasitosis.

–¿Cuántos niños de Chanal padecen desnutrición?

–Mejor pregúnteme cuántos de ellos están sanos y le diré que ninguno, dice con un dejo tímido de reclamo y vergüenza la doctora Berta Mandujano, quien desde hace menos de un año atiende el área de urgencias en el hospital, donde llegan hasta 50 casos al día.

El hambre es el mal del que nacen todos los males. En las comunidades, arraigadas a los usos y costumbres, las mujeres mueren en el parto, la mayoría padece diabetes, tumores malignos, infecciones en el estómago y piel por la rala ingesta de alimentos y agua contaminada.

Aquí no se conoce el cáncer aunque a muchos los ha llevado a la tumba. Lo atribuyen a un castigo de Dios y se refugian en la iglesia lo mismo católicos, protestantes, bautistas, evangelistas, porque lo que sobran son religiones; y cuando les falla la fe, para cualquier enfermedad se beben hervidas las hierbas del monte, o buscan encontrar la cura en algún jarabe comercial, como la anciana Petrona, quien tiene cáncer de mama en fase terminal y vive esperanzada a que la fórmula de mentol, miel y eucalipto, le quite esa masa amorfa, podrida y maloliente en que se convirtieron sus senos.

El hospital inaugurado por Ernesto Zedillo es hoy un elefante blanco, pues saquearon los modernos aparatos para cirugías y la sala de rayos X quedó convertida en bodega de trebejos. Los medicamentos son escasos, los galenos practicantes.

Sólo las cajas que contienen polvos para preparar papilla –incluida dentro del cuadro básico de medicamentos del Seguro Popular– abastecen los estantes. Es un complemento alimenticio destinado a los menores de cinco años, pero que al final es repartido entre toda la familia como último recurso para engañar el hambre.

Hace tres años Contralínea recorrió los barrios, comunidades y parajes de éste municipio y las carencias eran exactamente las mismas que ahora, los únicos cambios: ocho kilómetros de pavimento en la cabecera municipal, la instalación de postes sin energía eléctrica y dos inservibles ollas de agua, que durante el gobierno de Vicente Fox y Pablo Salazar, oficialmente Chanal subió al rango de pobreza moderada.

“Seguimos siendo pobres, rezagados, de los últimos”, se lamenta el alcalde de extracción priísta, Esteban Jiménez López.

Aquí no hay una sola fuente de empleo. Se come lo que se siembra: frijol y maíz, los chilacayotes que crecen por gracia de la naturaleza y las yerbas que regala el monte, chipilin, hierba santa, chicalote. La única fuente de ingreso son las migajas que da el asistencialismo oficial.

En el viejo palacio municipal –que no es más que una hilera de cuarterones semivaciados con las paredes quebradas– el tiempo se detuvo, lo único que viste la desnuda pared de la habitación principal es el rostro del hijo de Satanás, la fotografía oficial que Roberto Albores Guillén repartió cuando era gobernador. El mote se lo debe en herencia a su padre, quien popularmente era conocido con ese sobrenombre.

Esteban Jiménez López está sentado justo en medio, frente a una larga mesa de madera, sobre la que reposan los bastones de mando de él y su cabildo, indígenas todos, representantes de las distintas comunidades del pueblo que se rige por usos y costumbres.

El alcalde dice que el gobierno limita los programas de Sedesol, Oportunidades y Seguro Popular, para aquellos que no son zapatistas, y el cabildo entero –representantes de todas las comunidades– recuerda que el gobierno conminó a los pueblos a dejar el zapatismo a cambio de apoyos económicos y de salud.

“Dijeron que ayudarían a Chanal, pero nosotros seguimos siendo pobres”, dice el edil, también tzeltal y uno de los pocos que habla español.

Reclama que lo poco que dio el gobierno como las estufas Lorena, (que Sedesol justificó en 10 mil pesos cada una), no sirven, pues las hicieron sin chimenea y producen mucho más humo que el fogón tradicional, lo que acrecienta el tracoma, así que las mujeres volvieron a la cocina tradicional.

En 2003 se construyeron las primeras viviendas de block con techo de lámina (actualmente el 2.41 por ciento de las casas son de este material), también pequeñas tiendas de abarrotes. Ambos factores fueron usados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como indicadores para justificar mejoras en la calidad de vida en las comunidades, pero éstas fueron posibles sólo con la migración, que inició en Chanal durante el sexenio de Vicente Fox.

Desde 2002 a Chanal llega una vez por mes un camión que lleva a los emigrantes a la frontera norte. El transporte lo coordinan los propios polleros, a razón de 15 mil pesos el viaje, que incluye el cruce por el río Bravo. En los últimos cinco años más de 400 hombres han emprendido el éxodo, quedando muchos extraviados no se sabe dónde, y a los que su familia tiene por muertos.

Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79

Tierra de rebeldes

Chanal, Chiapas. Es un tzeltal que, harto de la miseria que fustiga su tierra, se hizo guerrillero, pero nada cambió, dice. Retornó a la vida civil y siguió siendo pobre; luego se convirtió en político de oposición y persistió su miseria.

Por hambre se hizo guerrillero y por hambre desistió para que su esposa recibiera 180 pesos al mes del programa Oportunidades, usado por el gobierno para desmovilizar a los insurgentes.

“Me llamo Benjamín Velasco Gómez. Me buscaba el Ejército y el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y me les escapé. Llegaron a mi milpa, me querían matar porque era de la guerrilla, me persiguieron como a todos los zapatistas. Peleé en Las Cañadas, en el ejido Morelia, en San Miguel y en Ocosingo; participé en la toma de la cabecera de Chanal, aquí controlé a mi gente para poder atacar la opresión que sufre.

“El Ejército Zapatista nació en la selva, en 1979, con seis comandantes que llegaron de México y se organizaron, así se formó la Fuerza Mexicana de Milicias. Yo empecé a participar en 1980 en una organización que se llamaba ANCIEZ (Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata), estaba en Altamirano, y más tarde se juntó con otras organizaciones y formamos el EZLN. Tuvimos representantes en México, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas. Así se formó la lucha armada, en 1994 ya estaba muy extendida, ya no se podía tapar.

“Estaba el subcomandante Marcos. Desde entonces lo conocí en la selva, el comandante Rodrigo, el comandante Germán, el subcomandante Daniel, en paz descansen. Me entrené con todos ellos, me dieron instrucción política y militar, y con ellos me fui a la guerra.”

El ex miliciano tiene ojos pequeños, color azabache, que resplandecen cuando se encomienda a su memoria. El cuerpo recio, la piel oscura, bronceada por las mañanas de sol arrancando a la tierra maíz, frijol y chilacayotes –alimento básico, único, de la gente de Chanal, ubicado en la zona de los Altos– y, según su dicho, es de los que más adherentes dio al EZLN.

Benjamín nació en la comunidad Saxchilbate, el 28 de julio de 1964. Cuando tenía seis años de edad, sus padres Pánfilo Velasco López y Rosa Gómez López, sus tíos y sus hermanos, fundaron la comunidad La Mendoza. Durante un año vivieron bajo los ocotales mientras levantaban las chozas con madera, palopique, palmita y paja.

Cuenta que fue un niño con suerte, sus papás le permitieron estudiar la primaria. Caminaba entre veredas durante ocho horas para llegar a Chanal, porque aún ahora no hay camino. Luego se alquiló como peón en Chiapa de Corzo, a cambio de que el patrón le pagara el primer año de secundaria. El patrón lo corrió y quedó trunco su sueño de convertirse en maestro bilingüe.

El padre de Benjamín abandonó la casa. Él regresó para arrancarle a la tierra los granos con que alimentó a su familia. Hasta ahí llegaron quienes serían reconocidos luego como comandantes zapatistas. Dice que por su instrucción –es de los pocos residentes de Chanal que habla español– los comandantes Germán y Rodrigo, y los subcomandantes Marcos, Daniel y Pedro, lo invitaron a dirigir a un grupo de milicianos.

Vendió sus animales y se alquiló en un jornal ajeno para comprar equipo: botas de plástico, mochila, paliacate, su cachucha, una lámpara. Y se fue a la guerrilla. Dice que el entrenamiento físico, ideológico y militar era en la zona de La Garrucha. “Hasta allí llegábamos todos los cuadros políticos”.

A los de Chanal los invitaron a la insurrección. Los convenció su miseria: el hijo desnutrido, la mujer muerta en el parto, los viejos enfermos, el pozo seco, la casa vacía, el campo estéril. Se hicieron guerrilleros los de La Mendoza, los de Saxchilbate, de El Naranjal, Saquilchén, Tzajalnich y Natiltón.

En la alborada araban la tierra. En las primeras horas del día cuidaban la cosecha, luego viajaban a pie hasta Altamirano a recibir instrucción militar. Durante 10 años repitieron la misma faena, hasta que llegaron los días de guerra, la madrugada del 1 de enero de 1994, cuando tomaron ocho alcaldías, incluida Chanal.

Benjamín dice que fue en protesta para gritarle al gobierno su existencia, que mientras el presidente Carlos Salinas anunciaba que conducía a México al primer mundo, en aquel accidentado terruño, en donde no había brechas para sacar a los enfermos de los pueblos sin tardarse menos de cinco horas, y sólo para que en el camino los emboscara la muerte.

El ex zapatista explica por qué él y otros cientos de indígenas de Chanal se volvieron guerrilleros, dispuestos a todo a cambio de aliviar la miseria de su gente.

“Entendimos a fondo la crisis que se vive en nuestro estado, en nuestra comunidad y nuestro municipio; nos organizamos, queríamos que de una u otra manera nos pudieran entender los que oprimen, los gobiernos estatal y federal, por eso nos volvimos gente de razón”.

Benjamín los conoció a todos, instruyó a muchos y los convenció de entrar “a la razón”. “Les expliqué que las injusticias que sufrimos en Chanal no son cosas de Dios sino del gobierno y llegaron al convencimiento, con esa política que se les habló aceptaron irse al EZLN. Ninguno descuidó a su familia: la fuerza mexicana de milicia era de medio tiempo, porque había que trabajar, hacer la milpa, luego organizarnos por unas horas, había que preparar al movimiento para llevar a cabo el objetivo”.

Dice que era una protesta “en contra de la nación. Se dio el combate del 94 que fue muy duro, la guerra en Chanal fue muy fuerte, porque luego de que apareció el EZ y que estaban los diálogos con el gobierno, nos buscaban en las milpas, amenazaban a la gente, a mí me perseguía el Ejército, me iban a matar. Me escapé”.

“Luego la gente fue saliendo del EZ, porque no es fácil, es perder la vida. La gente sabía que si perdía la vida por hambre era justo y necesario, y preferíamos morir que vivir 100 años muriéndonos de hambre.”

Los logros, no muchos: un hospital, algunos caminos que hoy siguen siendo los únicos accesos para comunicar esta tierra, es lo que arrancaron al gobierno con armas, algunas de madera, y su valor vuelto rabia.

La presencia del zapatismo en Chanal obligó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a construir, para el traslado de sus tropas, la carretera que comunica la cabecera municipal con San Cristóbal de las Casas (cuyo acceso principal está justo en el entronque con las instalaciones de la 31 zona militar, en Rancho Nuevo), y caminos rústicos hacia Altamirano y Comitán.

El proyecto de Ernesto Zedillo para mediatizar a los rebeldes fue instalar canchas de básquetbol, que a 10 años de distancia están destrozadas.

¡Que arreglen la cancha!, reclaman los lugareños a los visitantes a quienes confunden con enviados del gobierno. Y es que en estos pueblos no hay otra diversión, salvo conversar a la orilla del camino.

“No le debemos nada al gobierno, no nos regalaron nada, porque con la vida de nuestros hermanos, los inocentes y los zapatistas de Chanal, pagamos el hospital, la

pavimentación de la carretera”, dice enardecido el ex miliciano, y advierte que los motivos que los obligaron a ingresar a la guerrilla aún continúan. “Unos se cansan, otros están animándose, porque la injusticia sigue”.

En 1994, cuando hizo su aparición pública el EZLN, el 40 por ciento de los hombres de Chanal eran milicianos como Benjamín, que vieron en la guerrilla el último recurso para cambiar la pobreza de su tierra.

Entonces tomaron las armas, pero con los años desistieron de su rebeldía, condicionados por el gobierno a dejar el zapatismo a cambio del dinero de Oportunidades. La mayoría lo hizo, ahora sólo el 10 por ciento se mantiene en resistencia civil.

Pero para los que volvieron “a la legalidad” nada cambió. El paliativo que les da el gobierno tampoco disminuyó su pobreza.(ALP)

Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79

Alerta roja en municipios pobres

Un país con 49 millones de mexicanos pobres, la mayoría indígena, refleja un fenómeno grave desde la visión ética, moral y de equidad, y llama la atención del gobierno sobre la incongruencia del modelo económico neoliberal

Nydia Egremy / Fotos: Rubén Darío Betancourt

El alto grado de marginación en las zonas indígenas tradicionales contrasta con la prosperidad en las modernas zonas agrícolas que atraen inversión, agua y tecnología; el origen de este desequilibrio es la globalización que integra sólo a algunos territorios y no al país en conjunto.

Esa desigualdad pone el dedo sobre la incipiente democracia mexicana que, promovida por el consenso de Washington, no da resultados sociales y por lo tanto no debe continuar, sostiene Adolfo Sánchez Almanza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México en pobreza.

Desde los municipios surgen focos rojos para el gobierno como el avance de la pobreza en México, que aqueja a 49 millones de mexicanos. “Reconocer oficialmente que la mitad de la población está en pobreza es algo grave, no sólo desde el punto de vista de la ética, la moral y la equidad, sino desde el económico”, enfatiza el académico.

El modelo económico neoliberal, que favorece la inequidad y la falta de fiscalización de los recursos pertenecientes al Ramo 33. La expresión más completa de la política neoliberal mexicana es la pérdida del 70 por ciento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo de 1975 a la fecha, que impide a una familia reproducirse como establece la Constitución.

La falta de transparencia en los recursos que aporta la Federación al Ramo 33 del presupuesto nacional, destinado a crear infraestructura en los municipios, permite a menudo que su liberación sea lenta o sea manipulada por el gobierno federal y los gobiernos estatales no puedan hacerla llegar oportunamente a los más necesitados;

además de que los congresos locales no tienen la oportunidad de intervenir, porque los municipios son soberanos y eso da como resultado el desvío de recursos públicos.

En este complejo panorama de causas y efectos de la pobreza e inequidad, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, apuntan a Veracruz como el estado con mayor marginación entre 1970 y 2006. Fue en esa década cuando la riquísima entidad costera entró en una fase de recesión económica y sus actividades productivas tradicionales (agricultura, ganadería, floricultura, silvicultura y recursos forestales) enfrentaron una grave crisis.

Así, en 35 años, Veracruz avanzó 10 posiciones en el índice de marginación y como ejemplo están las zonas rurales de Tantoyuca y Papantla. Este último municipio, que en 1970 ocupaba el lugar 2 mil 114 en el índice nacional de marginación, ahora está peor, con el sitio 2 mil 440.

El tradicional núcleo de marginación se ha concentrado en los estados de Chiapas, principalmente en los municipios de Chilón, Ocosingo, Las Margaritas, Oxchuc, Chenaló y San Juan Tantuc, y en Guerrero, los municipios de Metlatónoc y Chilapa de Álvarez. Le siguen Oaxaca y Veracruz, todos con zonas muy atrasadas con la constante de que son regiones indígenas de difícil acceso, alejadas de las vías de comunicación, muchas en zonas de selva, sierra o desierto.

En contraste, los municipios de Puebla y Monterrey o las nuevas zonas agrícolas de Sinaloa y Sonora han tenido un auge económico y productivo en los últimos años porque generan empleo y atraen inversiones.

Atomizar la pobreza

De los 2 mil 452 municipios que hay en México, casi la tercera parte podría lograr su propio desarrollo. Sin embargo, las dos terceras partes de los municipios restantes están en condiciones de desventaja, por lo que son apremiantes políticas de fortalecimiento municipal para impulsar decisiones intergubernamentales Federación-Estados-Municipios, que reduzcan las desigualdades.

En los últimos gobiernos ha proliferado la tendencia a crear nuevos municipios. Si bien se comportan de manera desigual, se observa que los núcleos de población tradicional no crecen tanto como los nuevos asentamientos que buscan independizarse de la cabecera municipal tradicional.

Así ocurrió en San Juan Cancún, Quintana Roo; San Juan Cancuc, Chiapas –creado para mantener el control de la zona bajo un criterio militar–, y Cochoapa el Grande, Guerrero, que surgió tras escindirse de Metlatónoc, el municipio más marginado de México. Le siguen en esa política los nuevos municipios de Acatepec, que salió de Azapotitlán y posteriormente, Marquelia. De esta forma se diluyen las cifras oficiales de pobreza y marginación.

Sin embargo, un caso notable de éxito en la división municipal es Tlaxcala. Al intentar recuperar su organización comunitaria tradicional: hoy es el estado con más municipios nuevos desde 1995. Contribuyó a su favor la tradición histórica y de esa manera en esa entidad se han evitado conflictos intermunicipales.

Los antecedentes del desequilibrio actual se remontan al abandono de la política de desarrollo regional en México desde hace años. Así lo evidencia el estudio Regiones Medias de México, que realizan académicos del Instituto de Investigaciones Económicas y que examina la trayectoria histórica de las 154 regiones del país –bajo el esquema que elaboró el doctor Ángel Bassols– y su grado de competitividad, a lo largo de casi medio siglo.

Sánchez Almanza atribuye la explicación de la pobreza en México a la subordinación histórica del país al exterior, a la industrialización tardía y a la existencia de una “élite en el poder que ha sido rapaz y carente de inteligencia para distribuir la riqueza”.

México ocupó hace años el lugar 11 en recursos naturales, aunque en desarrollo humano ocupa el sitio 54. Eso significa que la riqueza se acapara en pocas manos o se transfiere al exterior; precisamente esa inequidad explica la actual situación de pobreza a nivel nacional y, en particular, de los municipios.

“Nadie quiere ser pobre y esto tiene que ver con esa estructura de distribución y de falta de oportunidades”, explica el académico.

“Un país como México, con ese grado de pobreza o de desigualdad –superior al de Guinea Ecuatorial en África, con un coeficiente de desigualdad del 46 por ciento– se observa que la economía del país seguirá en rezago mientras persista ese patrón de distribución”, observa.

La pérdida del poder adquisitivo en las últimas décadas se asocia a fenómenos como el desempleo, el empleo precario y la informalidad, que en lo social derivan en rezagos como enfermedades de la pobreza: chagas, tuberculosis y lepra, injustificables en un país con el potencial de México y en pleno siglo XXI.

Otro foco rojo de alerta desde los municipios pobres del país apunta a revisar las políticas neoliberales que dismantelaron los avances democráticos. Para Sánchez Almanza aún persisten los efectos de la disciplina que impusieron a México y otros países latinoamericanos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional durante las décadas de 1980 y 1990.

Nueva legislación

Homero Meneses, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República, informa que para abatir el rezago, la marginación y pobreza en los municipios, existe ya una iniciativa de Ley de Desarrollo Regional que impulsaron las tres principales fracciones legislativas y que espera el desahogo de la agenda legislativa para su aprobación.

Meneses explica que ahora la iniciativa está bajo análisis de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en virtud de que sólo funciona la Comisión Especial Sur-Sureste, de alcance regional, pues no existe una comisión homóloga a la del Senado. “Sería importante que en el futuro esa Comisión se transforme en una que tenga carácter nacional, homóloga a la del Senado”, destaca.

Mientras tanto, la iniciativa esperará a que la Comisión de Hacienda resuelva con prontitud su agenda pendiente –entre cuyos temas destaca la discusión del Presupuesto de 2008– para que resuelva el apremiante asunto del desarrollo regional.

“Si no se atiende el rezago social, vendrán riesgos de fractura en el territorio. Si no atendemos las expresiones de inconformidad por el rezago van a aumentar los riesgos de ingobernabilidad general”, advierte el especialista Sánchez Almanza al recordar el surgimiento de las explosiones sociales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79

Mitontic, Chiapas, abandono y desprecio, rostro de la miseria

Desatendidos y aislados, los indígenas de Mitontic están habituados a la ausencia de derechos y a la indiferencia del gobierno Federal. Condenados a la sed y a los abruptos caminos, los tzotziles de esta parte de la montaña resisten los embates del olvido y la marginación

Paulina Monroy / Rubén Darío Betancourt, fotos / Enviados

Mitontic, Chiapas. El agua está empantanada, llena de renacuajos y mosquitos. Los pozos se secan a falta de lluvia. “Es del color del tamarindo”, dice Mariano Ordóñez, presidente municipal, y es lo que ingieren los tzotziles: agua que no es potable, incolora, tampoco insípida o inodora, aquí hiede y sabe a tierra. Cuando el calor por fin extinga ese par de charcos que alimentan a 160 habitantes, la opción es el torrente contaminado, donde desemboca el drenaje.

María Ordóñez se hinca y toma la vasija y la llena y vacía para dar cuenta de lo que beben: lodo. Tiene 65 años, pero se impone al edil y le habla de frente: “a mi edad ya no puedo caminar hasta el arroyo, son tres horas de andar y la espalda me duele”. Trajina encorvada y está en los huesos; la pesadumbre se quedó como un rasgo indeleble en sus facciones.

Con todo, recoge y devuelve ese chorro del barrizal mientras se quita los insectos de la cara. Será que por ella habla el desamparo y la rabia porque, en sus 65 años de vida, nadie había visitado ese rincón desierto, Suytic, el lugar de piedras filosas, donde el suelo es adusto y los pies lacerados en ese diario andar que abre veredas.

Ésta es la segunda vez que el alcalde priísta visita la comunidad, pero los habitantes se acostumbraron al aislamiento y al olvido. No hay caminos y al paraje lo atraviesa sólo una brecha árida. Arrinconado geográficamente, todo es lejanía en Suytic. Sólo a fuerza de abrir el camino sobre la empinada montaña, Suytic puede comunicarse con sus vecinos Baachén, Oxinam y Pulumsibac. Chalam, donde está la comida y el agua, está a dos horas y para llegar los indígenas tienen que aferrar los huaraches a las fisuras de las rocas.

A un costado de la solitaria senda está la única escuela, un salón de lámina recién construido por la comunidad, donde se imparte preescolar y los primeros años de primaria. Como en otros parajes, el gobierno se excusa de equipar al plantel con material y mobiliario adecuado por los infranqueables trayectos.

“Impedidos” de recibir más apoyos de la federación, los niños aprenden en dos troncos que simulan una banca y una mesa sobre el piso de tierra y apretados detienen la hoja y el lápiz en los pocos rincones que sobran del madero.

El funcionario comenta que todavía el año pasado los niños no recibían educación, por lo retirada que estaba la escuela más próxima, a hora y media a pie, trayecto que deben hacer los jóvenes si quieren cursar la secundaria o el bachillerato.

Es común ver a los chiquillos con las botas roídas y a las niñas con los pies magullados. “Hay mucha piedra y está un poco peligroso. Los niños que andan descalzos se cortan de eso”, advierte el alcalde. Aún cuando este suelo es hostil, todo su día se va en subir o bajar del monte. Como Juan, de ocho años, que va del aula a la casa que está sobre una pendiente rocosa. Él se trepa con sus deteriorados zapatos y descansa en esa habitación donde el piso es un tapete de cenizas y las paredes están llenas de tizne.

El olor a leña apagada satura el aire del único cuarto donde duermen y comen los 13 miembros de la familia, incluyendo al regidor plurinominal del PRD, que es su hermano. A ninguna de las viviendas de Suytic llegó la estufa Lorena, el piso firme o el agua entubada. Ni las caravanas de salud, ni el Seguro Popular se asoman y no hay proyectos productivos. Nada sucede por efecto de las distancias.

Por eso en las súplicas en bats'ic'op, o verdadera lengua, del policía municipal, Pedro Velásquez, se oye constante la palabra mestiza “carretera”. De haberla, los hombres no emigrarían, porque ya no hay maíz ni familias completas abandonarían el paraje por la falta de agua.

En Baachén la situación no es diferente. Sus habitantes también están incomunicados y es imposible comercializar la producción de durazno o tener servicios médicos, porque a los enfermos hay que cargarlos por el acantilado durante hora y media y llevarlos a cuestras guardando el equilibrio sobre los atajos empedrados y mojados.

Y es que hasta la sima del risco está la única carretera pavimentada del municipio -20 kilómetros que van de la cabecera municipal a Chalam y comunican a ocho de 24 comunidades-. El resto de Mitontic está colmado de caminos de terracería, veredas y aperturas de camino, las vías agrestes que son recorridas por los infatigables sots'il winik u hombres murciélagos. Siempre a pie, con el sol como vigía o abrigados por la neblina, con el mecapal y la carga de madera o los cajones de refresco, yendo al hogar o la parcela, donde se dé el cultivo ahí está su rumbo.

Sobre el camino rural

A la orilla del monte, un hilo de agua corre abatido entre el polvo y la piedra. De ahí, Martha y sus hijos se quitan la sed para soportar el calor durante la faena. Martha le

remoja la cara a Alejandro y lo sienta en sus piernas. El bebé tiene los ojos desalentados, casi viejos, el estómago abultado y la nariz mojada. No se inmuta, no llora ni siquiera susurra, es todo silencio y su cuerpo está saturado de hastío.

Por él ya ha pasado el dolor y el abandono y apenas tiene un año. Resignado y con el torso desnudo aguarda que su hermana termine de limpiar la milpa para la tortilla del día. Lucía peina la loma con un viejo azadón, lo encaja y lo arrastra, hoy tampoco fue a la escuela, mientras la pequeña Maribel no para de llorar y dejó esa tarea de salpicar agua sobre la hierba.

Alejandro y sus hermanas estarán hasta bien entrada la tarde clavando la pala para encontrarle comida a la montaña y todas las veces que la sed regrese, se conformarán con las gotas recogidas del perezoso cauce que viene de otro desahuciado ojo de agua que corre por Tzoepitil.

Tzoepitil

“Ya casi no corre y no hay de dónde agarrarla”, denuncia el síndico Antonio Méndez, mientras mira aquel lánguido afluente de agua que se ha convertido en un oasis para parásitos y alimañas. El delegado indica que los niños que vienen al arroyo se enferman seguido; ronchas en la piel y diarrea son malestares diarios.

Hace dos años, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) autorizó la construcción de un sistema de bombeo que al poco tiempo de instalando se rompió. “Nada más funcionó unos tres días. Le dijimos al patronato, pero no sé a dónde se fue la solicitud”, dice Méndez.

De acuerdo con el II Censo de Población y Vivienda 2005, el 67 por ciento de los ocupantes en vivienda no contaban con agua entubada. Lo que hace al municipio el tercero en la entidad con el mayor número de personas sin ese servicio. Y aunque los indicadores dicen que la mayoría de la población de Mitontic cuenta con drenaje, la realidad es que las letrinas naturales continúan siendo un foco de infección.

Según la Secretaría de Salud del estado, la segunda causa de morbilidad en el municipio es la amibiasis intestinal, infección muy frecuente en áreas pobres y mal saneadas. La enfermedad es provocada por la entamoeba histolytica, parásito alojado en las heces fecales que una vez desechado en letrinas abiertas contamina los alimentos, produciendo disentería, diarrea sanguinolenta y hasta la muerte. Tan sólo en 2000 se registraron 277 casos de infección en Mitontic.

En 2003, el entonces director de la CEAS, Mario Bustamante Grajales, señalaba que el desabasto de agua en la cabecera municipal se debía al deterioro de la infraestructura hidráulica. Ese mismo año, el ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía se comprometía no sólo a atender la “urgente necesidad” –como lo calificaban los dos servidores públicos– de Mitontic, sino de los 117 municipios de la entidad.

No obstante, ya han pasado cuatro años y Tzoepitil se está quedando sin agua. Hasta no aceptar la baja de la obra situada por el órgano estatal, la Comisión Nacional del Agua (CNA) podrá intervenir. Y es que para el edil cuando los altos funcionarios oyen hablar sobre Mitontic, se muestran desconfiados. “No creen nuestra miseria”, expresa. Ello a

pesar de ser el décimo municipio más pobre del país y tener un índice de desarrollo humano (IDH), de 0.4858, similar al de países africanos como Ruanda o Angola de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Contralínea 72).

Titaltetik

Excluidos de más y mejores apoyos y expuestos a programas que no cumplen sus objetivos, los indígenas tzotziles de Mitontic están a la zaga de alcanzar un nivel de vida óptimo.

En el ramal de Titaltetik está el expendio que ostenta el nombre deslucido de Diconsa. Como en el resto de Mitontic, la tienda comunitaria del programa de Abasto Rural –que contribuiría a superar la pobreza alimentaria mediante la provisión de productos básicos al menor costo y la creación de empleos rurales– está cerrada y desmantelada.

El proyecto que presume ser “la red comercial más grande de México con más de 22 mil tiendas, 302 almacenes y una flota vehicular de 3 mil 318 unidades”, aquí es un recuerdo constante de la marginación. No hay leche en polvo, azúcar, aceite vegetal, servicios de telefonía, de correo o medicamentos básicos; en su lugar el vacío, letreros grises y tablas de madera que clausuran los establecimientos.

Mitontic tampoco está incluido en el Programa de Apoyo Alimentario de Diconsa, cuyo propósito es garantizar la ingesta de alimentos nutritivos mediante apoyos en efectivo o entrega de despensas. La lista de beneficiados hasta el 31 de marzo de 2006 prescinde de la localidad, incluso cuando la desnutrición es la octava causa de enfermedad en la región.

Estufas defectuosas

Alicia desgrana el maíz para preparar el nixtamal, Lubia mueve el frijol que hierve sobre el calor de la leña, la fumarada satura la cocina y la estufa marca Lorena permanece apagada e inútil. Ellas fueron beneficiadas por el programa federal que habría de salvarlas de respirar humo tóxico y reduciría la deforestación hormiga; las estufas ecológicas y el piso firme eran la solución al hacinamiento en el que viven los pueblos indios, como lo anunciaba el ex presidente Vicente Fox.

Sin embargo, “hay fuga de humo”, se quejan las mujeres en tzotzil y reclaman que se cuarteó a tan sólo siete meses de haber sido colocada. La misma situación se repite, cuentan Alicia y Lubia, en otras casas de Titaltetik. Las jóvenes lamentan que no funcione porque así no “tragaban tanta humareda”.

Además en un municipio de 9 mil 42 habitantes, la estufa Lorena sólo llegó a 400 hogares. Y el piso firme aún no alcanza a esa cocina que es un cuarto de madera donde se come y se preparan los alimentos sobre la tierra.

“Es en balde el gasto. No es posible, pero es basura lo que están dejando”, reclama el alcalde Mariano Ordóñez y recuerda la promesa de Fox cuando se reunió con los presidentes municipales de las 10 regiones más pobres de Chiapas: “Dijo que la gente de alta marginación iba a quedar con estufa Lorena”.

Suyalhó

Fue en abril del año pasado cuando Vicente Fox afirmaba que en las zonas chiapanecas más marginadas se construirían 13 unidades de atención médica y dos dispensarios comunitarios, pues “si entregamos una póliza de Seguro Popular, es porque habrá unidades médicas, hospitales, doctores, enfermeras y todo el personal para atenderles”.

El entonces presidente de la República agregaba que Mitontic, como el resto de los 10 municipios más pobres del estado, tendrían su red completa de infraestructura en salud y atención.

Mariano Díaz tiene 69 años y sufre de presión alta. También lo padece su esposa de 68 años. Hace algunos días, la pareja fue a San Cristóbal de las Casas a recibir atención médica y comprar los medicamentos que no había en Suyalhó. El costo del viaje fue de mil pesos –precio estratosférico para una población donde 461 personas no perciben ingreso alguno y 2 mil 850 es población económicamente no activa, según datos del INEGI–. La pareja debe regresar por recomendación del doctor, pero ahorrar esa cantidad les es una tarea casi imposible.

Como siempre, Mariano asistió a su revisión en la clínica de Suyalhó para no perder su afiliación al programa Oportunidades. En cuanto al Seguro Popular sólo se beneficiaron a 800 habitantes, cuando el dispensario recibe a 3 mil personas de cuatro comunidades aledañas.

Además, sólo hay dos camas para los pacientes y los estantes del consultorio están semivacíos. Cada tres meses se recibe una magra dotación de medicamentos –entre los que se cuentan del tipo genérico intercambiable de laboratorios particulares– provistos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Muy escaso y muy frecuente que no haya, según los jefes presupuesto a nivel nacional. No necesitamos tanto, poquito, lo que haya. Apenas llegó poquito el tratamiento. Más medicina nos es útil, penicilina, antibióticos, desparasitantes”, enumera el enfermero Ángel, quien es la única persona a cargo de la clínica, luego de que el médico abandonará el paraje.

Tampoco se cuenta con ambulancia, la única está en Chalam. “La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Salud nos iban a donar una ambulancia desde el año pasado, pero hasta ahorita no sabemos cómo está, por el cambio de gobierno y no nos dan nada de resultado”, expone Ordóñez.

“Ésa es una buena pregunta”, atinó a contestar Raymundo Ruiz a bordo de una camioneta del IMSS-Oportunidades, cuando se le preguntó cómo se seguía el cumplimiento del programa cuando cambiaban de delegados con cada visita bimestral. Evasiva, la comitiva no quiso dar más declaraciones.

La Urgencia

La niebla cae sobre Mitontic y se confunde con el humo que se escapa por las grietas y hendeduras de las casas, donde la leña comienza a arder. La montaña huele a madera encendida y ya son las seis de la tarde. El suave acento del tzotzil se escucha detenido y

también lejano, sólo habla el caracol y la plaza se llena con su tonada. El comandante lo hace cantar para que las autoridades se reúnan y discutan los temas de la comunidad.

Agua, vías y un hospital demanda el presidente municipal: “son las primeras necesidades y los recursos son muy pocos”. La construcción de un camino de Oxinam a Pulumsibac –que pasa por Suytic y Baachén– aunque ya ha sido autorizada y el proyecto entregado a la CDI en 2006, no se ha realizado porque no hay presupuesto. “Estamos a la espera, no nos han llamado”, alega Ordóñez.

Lo mismo sucede con la intención de abastecer de agua y de un hospital a la comunidad de Chalam, que recibe a habitantes de otros parajes. “No cuenta con agua y es una población grandísima. Ya entregamos el proyecto a la CNA para su revisión, ojalá sea tomado en cuenta”, espera el edil priísta.

El presupuesto asignado desde la Federación es insuficiente. Este año cada localidad recibirá solamente 500 mil pesos, revela Ordóñez y advierte: “Tan sólo en comunidad de Titaltetik fueron 4 millones 700 mil pesos para construir 166 tanques de almacenamiento pluvial y para pavimentación se requieren unos 50 millones. Yo por eso suplico a las autoridades federales y estatales que nos tomen en cuenta.

“Carretera es la primera necesidad. En Suytic y Baachén no hay cómo sacar a los enfermos, los tienen que llevar cargando de una hora a dos horas, pero hay veces que se les mueren en el camino. Sin carretera, aunque tuvieran agua, no superamos el problema”, reflexiona.

En el palacio municipal sucede la discusión para exigir que se cumplan las promesas federales y al interior de la iglesia también se solicita una vida sin miseria sin sed sin hambre.

Donde las cruces están apiladas y los santos vestidos con textiles hechos de lana y algodón, Federico reza refugiado bajo las incontables velas que alumbran el techo y las paredes ennegrecidas. Agacha la cara hasta el suelo y repite su plegaria que comienza en sollozo y termina en suspiro, siempre en tzotzil. Su esposa está sentada con las manos en el regazo y los ojos cerrados. Los feligreses ruegan que los beatos les den buena vida, salud y alivio. “Que nos quiten las enfermedades”, piden.

Fecha de publicación: Junio 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 80

La salud como política de contrainsurgencia

Además de padecer niveles de pobreza similares a los del África subsahariana, los indígenas en resistencia civil de Chiapas sufren medidas de contrainsurgencia: al igual que los zapatistas, integrantes de Las Abejas tienen casi vetado el derecho a la salud

Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Chalchihuitán, Chiapas. La vieja montura de caballo cuelga en la viga del techo, inútil, aguardando el momento en el que Lucía aferre sus manos a los amarres de mecate y

soporte la vida en sus brazos y rodillas. Pero la hora de hincarse y dar a luz a su hijo, el octavo, parece no querer suceder.

Diecinueve días con ese dolor, que le surca la espalda y se le encaja entre la cadera y las piernas, contradicen las palabras del doctor: “aún no es tiempo”.

La joven de 29 años, indígena tzotzil e integrante de la organización civil Las Abejas, sabe casi consumida la oportunidad de salvarse y salvar a su hijo. Mas Lucía Pérez Gómez tiene que esperar, sentada en un tabique, “el milagro” de parir en casa: los ahorros se gastaron hace 12 días en el taxi a Yactelum, ubicado a una hora de distancia “en carro”, adonde se dirigen todos los tzotziles en resistencia con alguna urgencia médica.

Y es que en Chalchihuitán el onceavo municipio más pobre de México según la ONU, a los indígenas organizados o simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se les niegan los servicios de salud en las clínicas públicas de la cabecera, incluso si se trata de alguna emergencia.

“Aquí no hay atención médica”, denuncia Nazaria García Pérez. Para los tzotziles de Los Altos de Chiapas ése es el precio por organizarse. “Cuando nos pusimos en resistencia nos quitaron el derecho de ir a la clínica de Chalchihuitán. Nos prohibieron todo”, dice la joven, también integrante de Las Abejas y coordinadora parroquial de mujeres.

Por eso Lucía oculta el sufrimiento que le rezuma por los ojos oscuros y su morena piel, tal como ocurre con su imperceptible vientre, escondido en el huipil blanco, ornamentado con bordados rosa, rojo, morado y verde. Y sólo espera.

La división

Al ponerse el sol, los golpes de aire frío van haciendo suyas las casas del poblado Emiliano Zapata. Desperdigadas sobre una pendiente, con los techos de lámina y las paredes hechas con maderos que no alcanzan a empalmar, las viviendas son incapaces de detener las ráfagas.

Las enfermedades respiratorias se ubican entre los principales padecimientos de los residentes, porque a nadie le alcanza el dinero para construir la vivienda de “material”. La pobreza, que a nivel municipal registra un índice de desarrollo humano del 0.4966, según la Organización de las Naciones Unidas, no basta para unir a los pobladores.

Las primeras cabañas que se alzan en la boca de la brecha, que abre paso a esta comunidad, pertenecen a las familias militantes del Partido Acción Nacional; a mitad del pueblo se encuentran las 12 viviendas de Las Abejas, y abajo están ubicadas las de los zapatistas.

“Estamos divididos”, reconoce Nazaria. La tzotzil de 27 años y misionera católica acusa que “el partido (Acción Nacional) nos quiere molestar un poco, porque dicen que la resistencia no los deja avanzar. Los partidos obligan a lo que ellos quieren y por eso nos defendemos”.

La fiesta celebrada el 19 de marzo pasado en honor de San José, el patrón de la iglesia de Las Abejas, fue la primera en la cual convivieron zapatistas e integrantes de dicha organización civil. Los panistas no fueron invitados.

“Ahora hay un poco de acuerdo (entre todos los habitantes de Emiliano Zapata), sobre todo para que los niños estudien en la escuela. Ya nos llevamos mejor con el EZLN, pero antes no”, dice Nazaria.

La división no es privativa de este lugar. En Jolitontic, considerada como una de las comunidades más empobrecidas del municipio, las bases de apoyo zapatistas son acosadas por los militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Habitantes de Chalchihuitán, quienes prefieren no identificarse por temor a represalias, indican que los priístas que rodean al presidente municipal, Antonio Pérez Gómez, amenazan no sólo a bases de apoyo del EZLN, sino también a quienes pertenecen a organizaciones civiles no armadas.

Según acusan, la gente del regidor anda con “cuernos de chivo”, diciendo a los rebeldes y a los defensores de derechos indígenas, comunitarios y humanos, que los van a desalojar de estos pueblos.

Otra forma de presionar, insisten, es negando la atención médica, cuando hay alguna emergencia de salud, tanto en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social como del gobierno de Chiapas.

En Chitic se corre la misma suerte. Manuel Díaz López, promotor de los derechos humanos del Centro Fray Bartolomé de las Casas y habitante de este sitio, indica que han aumentado las amenazas contra los indígenas organizados en sociedades civiles y contra las bases de apoyo zapatistas.

“Por eso nos integramos en los derechos humanos, porque tenemos miedo de que pase algo”. Manuel explica que “primero, el gobierno ofrece muchos apoyos para que se salgan de la organización (EZLN y sociedades civiles), luego falta al respeto a los solares y, al final, amenaza”.

Sobre el trabajo comunitario, el campesino advierte que la tensión entre los pobladores impide que “avancemos en exigir respeto a los derechos humanos, a pesar de que la organización ya lleva un año”.

Manuel dice que “aquí estamos viviendo muy abandonados: no contamos con mejor vivienda ni agua potable, sacamos el agua de un pozo y la traemos cargando”.

Las sendas de Chalchihuitán –palabra náhuatl que significa “lugar donde abundan los chalchihuite”– que corren, sin revestimiento de la cabecera municipal hacia lo alto de la montaña son bordeadas por niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos gachos por las pesadas cargas que soportan en la frente, en donde se ciñe el mecapal.

En las espaldas, los bultos son de leña, maíz, frijol o agua, ésta última se transporta en ánforas cuya capacidad oscila entre los 10 y 20 litros.

Sobre los servicios de salud, Díaz López expone que los residentes van a la clínica de Canteal, ubicada a 30 minutos caminando por una cuesta, aunque señala que la unidad del IMSS no cuentan con medicamentos suficientes, además de que no atienden más que primer nivel. “No hay mucha posibilidad de que nos curen”.

Afiliados, sin garantía

Aun quienes están afiliados a los programas de desarrollo social, como Oportunidades e IMSS-Oportunidades, carecen de una mejor vida.

“Vivimos muy pobres. Traemos cargando el maíz que comemos en el mecapal, el agua también la cargamos. Caminamos horas. Cómo el gobierno dice que tenemos una vida digna, si no es cierto. Nos da 300 pesos, pero eso no es nada: no nos alcanza para alimentar a nuestros hijos”, señala María Díaz Pérez, también habitante de Chitic.

La mujer, quien a pesar de estar enferma de la matriz no ha recibido tratamiento alguno para corregir los daños de su último embarazo, dice no entender para qué obligan a las afiliadas al programa Oportunidades a atenderse con el médico, si no las van a curar. Agrega que “si no vamos a una cita no nos dan completo el dinero”.

Condenados a una economía de autoconsumo, con ingresos marginales obtenidos por la venta de café, los tzotziles de Chalchihuitán subsisten del maíz y frijol que cosechan y de los frutos que crecen naturales: naranja, lima, mango, papaya, durazno, piña, limón.

María Díaz refiere que las familias necesitan dinero para comprar arroz, sopa, jitomates, cebollas, azúcar, ropa, zapatos. “Es caro. Una sola cebolla cuesta cinco pesos”. Añade que en su caso, la producción anual de café se reduce a tres costales, por los que le pagan mil o mil 500 pesos. “Eso no alcanza para nada”.

Reclamo social

“Somos personas, no somos animales. Tenemos el mismo derecho que los mestizos. La salud no pertenece a ningún partido o religión, no se puede negar ese derecho”, reclama Flavio García Pérez.

El joven, quien se encuentra en un curso de capacitación en Acteal para ser promotor de la salud en Emiliano Zapata, reconoce que “la atención médica es un problema, porque en la clínica de la cabecera municipal los médicos no nos hacen caso, por ser de la organización (Las Abejas). Nos discriminan porque no somos del partido y tampoco estamos en el IMSS Oportunidades”.

Flavio acusa que los niños no tienen suficiente alimento, y advierte que sí hay desnutrición de primer grado. Agrega que las mujeres no tienen buena alimentación cuando se inicia el embarazo, porque no hay dinero.

Con desesperación, parado frente a la puerta de Lucía, Flavio dice que es obligación de los médicos brindar la atención, no discriminar, y del gobierno mandar más personal.

Nazaria, su hermana, advierte que, ante el descuido de las autoridades sanitarias, “ahora que estamos en la resistencia tenemos tres aspirantes a promotores de salud y ya vamos a construir una casa de salud. Ahí la atención va a ser para todos, incluso los del partido y los del EZLN”.

Las dificultades para estudiar

Con el morral lleno de libros, cuadernos y lápices de colores colgando de su frente, Alejandro acomoda sus botas de plástico, tipo lechero, en las brechas serpenteadas de Jolitontic, municipio de Chalchihuitán.

El niño de siete años camina dos horas desde la escuela hasta su casa, ubicada en el barrio Yonché. José Antonio Mendoza Vásquez, director comisionado de la escuela primaria bilingüe 21 de Marzo, reconoce que las distancias entre los barrios y el colegio fomentan la deserción de los alumnos, que suman los 231.

Agrega que entre los factores que impiden el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, destaca el mal estado del mobiliario. “Nosotros valoramos la necesidad de pedir ayuda y el 3 de marzo fui a entregar una solicitud al Coccoes (Comité de Construcción de Escuelas), esperamos que nos den ese apoyo”.

De acuerdo con el INEGI, en 2000 el municipio presentó un índice de analfabetismo del 50.77 por ciento, con una media estatal de 22.91 por ciento.

Para el director, otro foco rojo tiene que ver con la alimentación. “El 85 por ciento de los alumnos no desayuna cuando viene a la escuela y eso repercute en el aprendizaje. No desayuna por falta de recursos”.

De acuerdo con los resultados del II Censo de Población y Vivienda en 2005, en este municipio, de las 12 mil 256 personas que habitan el municipio, 11 mil 24 personas hablan alguna lengua indígena.

El informe detalla que la población de Chalchihuitán representa el 2.55 por ciento de la regional y 0.31 por ciento de la estatal. De este total, 50.46 por ciento son hombres y 49.54, mujeres. El 78 por ciento de los habitantes son menores de 30 años y la edad media es de 14.

Estadísticas oficiales

Al igual que la ONU, el Consejo Nacional de Población señala que este municipio presenta un grado de marginación muy alta. Ubicado en las montañas del norte de Chiapas, Chalchihuitán limita al este con Pantelhó y Chenalhó, al sur con Chenalhó y Aldama, al norte con el municipio de Simojovel y al oeste con Santiago El Pinar y El Bosque.

El 8.57 por ciento de la población reside en localidades urbanas, mientras que 91.43 en 37 localidades rurales, que representan 97.37 por ciento del total de localidades que conforman el municipio.

Mortalidad materna

En Chiapas, el embarazo, parto y puerperio se ubican como las principales causas de morbilidad femenina, revela el más reciente indicador del INEGI, “Porcentaje de casos de morbilidad hospitalaria por entidad federativa y principales causas según sexo, 2001 a 2004”.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, 57.7 por ciento de las muertes de mujeres chiapanecas, ocurridas en 2004, se relacionan con la maternidad; 2.7 por ciento, con afecciones originadas en el periodo perinatal; 3.5 por ciento, con traumatismos y envenenamientos; 1.5, con heridas, y 4.2 por ciento, con factores que influyen en la salud y contacto con los servicios de salud.

Graciela Freyermuth Enciso, doctora en Antropología e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Sureste, dice que, aunque en los números oficiales se han abatido los índices de muerte materna, el problema persiste. “Chiapas mejoró cinco lugares. En términos de administración eso es muy bueno, en términos del problema obviamente no se ha resuelto”.

Reconoce que en Los Altos hay un contexto muy complicado para brindar atención médica a las parturientas. “En Chalchihuitán, que es una población fundamentalmente indígena, todavía hay problemas de comunicación, no todas las clínicas funcionan las 24 horas de los 365 días, el acceso a los servicios todavía no es tan ideal como quisiéramos: las mujeres no acuden a los servicios cuando tienen complicaciones”.

Freyermuth Enciso agrega que el primer nivel para atención a partos en las clínicas de Chiapas se desmanteló en años pasados, bajo la premisa de que los partos deben ser atendidos en hospitales. “Hay que cambiar esto para que las mujeres tengan acceso a primer nivel y ahí se les atienda su parto, o que se les atienda en su casa, pero si tienen una urgencia obstétrica puedan acudir al primer nivel y se les resuelva”.

La antropóloga observa que la mayor cantidad de clínicas en las cabeceras municipales y en los poblados son de primer nivel y no atienden partos. Añade que las normas no permiten a los médicos de primer nivel resolver urgencias obstétricas.

El riesgo, indica, es que si no se atienden rápido, las mujeres no llegan a segundo nivel. “Ésa es una cuestión de la política pública que hay que afinar: hay que capacitar a los médicos para que puedan detener una hemorragia, atender una toxemia del embarazo, porque las mujeres que llegan al segundo nivel van en malas condiciones, cuando llegan”.

Explica que ya hay esfuerzos para hacer clínicas-hospitales, como en el caso de Larráinzar. “Pero hay muchos médicos que no quieren acudir a esas clínicas a dar servicios. Es comprensible porque no conocen el idioma y pueden hacer algunas prácticas que son malinterpretadas por la población, entonces temen por su integridad física”.

Sobre las causas que impiden abatir la muerte materna, Freyermuth Enciso dice que las primeras son las que ocurren dentro del ámbito familiar y tienen que ver con la posibilidad de que las mujeres salgan de su casa para tener acceso a servicios de salud.

La doctora señala que la cosmovisión juega un papel importante: “la explicación de la enfermedad tiene que ver con causas sobrenaturales o conflictos familiares o comunitarios; además del papel que tiene la mujer en su propia casa, pues los maridos piensan que si se muere es porque Dios lo quiere así. Entonces falta revalorizar a la mujer”.

El segundo problema, dice, es “el proceso para que una partera pueda sacar a una mujer de su casa, que no sólo es muy difícil sino que es de mucha negociación con la familia, con el presidente municipal, con la ambulancia.

“El tercero es el de las clínicas, donde puede no estar el médico, o si está, al ver que la complicación es muy grave, evalúe los problemas que le generará atenderla o no esté capacitado para hacerlo. Y luego está la complicación del traslado: hay comunidades que ni siquiera tienen caminos”.

La especialista indica que, pese a que en el sexenio pasado el secretario estatal de Salud tomó como prioridad la mortalidad materna, “me preocupa si en este sexenio se va a tomar la misma posición”, no porque se abata de facto la problemática, sino porque es un paso importante para hacerlo.

Pobreza, casi irreversible

Para abatir la pobreza en México, que afecta a más de 60 millones de personas, se debe cambiar el modelo económico capitalista, advierte el economista Marcos Chávez. Agrega que aun cuando esto se lograra, se necesitarían al menos seis décadas para que el nuevo sistema garantizara equidad en la distribución de la riqueza.

El investigador del Colegio de México indica que “con el gobierno de Felipe Calderón no sólo no vamos a ver un cambio en las políticas públicas neoliberales, sino que se van a seguir agudizando los problemas de pobreza y de miseria en el país”.

El académico dice que, al ser un presidente impuesto por el grupo dominante, Calderón Hinojosa apostará a la continuación de la vertiente del desarrollo capitalista que hemos seguido desde 1982.

Marcos Chávez explica que el Estado está aplicando políticas públicas que no garantizan el crecimiento de la economía, con una mejoría en el bienestar de la población, sino que está agudizando el proceso donde beneficia básicamente a los empresarios, que es el 1 por ciento de la población.

“Hablamos de alrededor de un millón de familias, cuando somos más de 25 millones”.

Sobre el tratamiento de la pobreza como “deuda social”, el economista dice que “es una manera de ocultar la realidad: no existe la deuda social porque el proceso del país de riqueza y miseria van juntos. Uno va asociado al otro de manera íntima, el enriquecimiento de un sector de la población descansa en la pobreza de las mayorías”.

Más aún, añade, las políticas que está siguiendo Calderón son justamente las que trasladan la riqueza de un sector de la población, alrededor de 75 millones de mexicanos, hacia otros sectores que equivalen al 1 por ciento de la población.

Detalla que hay diversos mecanismos para transferir la riqueza, sobre todo el de los bajos salarios, que implica una mayor rentabilidad para las empresas, el recorte de las prestaciones sociales, incluso el fiscal: recortes de impuestos, subsidios.

“Ése es el corazón del modelo. Por eso, en el transcurso del sexenio de Calderón no se puede esperar ninguna mejoría de la población; por el contrario, la pobreza se va a agudizar.”

Marcos Chávez señala que “la definición de las políticas públicas ya no cabe: el objetivo central de las políticas gubernamentales es el control de la inflación, la estabilidad de los mercados, la generación de un ambiente propicio para los inversionistas; más allá de la retórica, nunca hablan de crear mecanismos e instrumentos que promuevan el bienestar de la población. Al contrario, lo están desmantelando”.

Pueblos indios, los más afectados

Ernesto Ledesma, coordinador del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), acusa que la marginación afecta sobre todo a las comunidades indias del país. “Cuando miras dónde hay más marginación es en donde hay población indígena”.

En el caso de Chiapas, Ledesma refiere que “en CAPISE elaboramos un mapa en el que identificamos las posiciones militares, en ese mismo mapa marcamos las regiones indígenas y las zonas de más alta marginación, según el Consejo Nacional de Población. Y donde hay población indígena hay marginación”.

El investigador considera que el resultado de la miseria y la marginación es la discriminación en cuestión de salud, educación, justicia, casa. “Por eso han tenido que buscar sus propias alternativas: gane quien gane, y pase lo que pase, el resultado siempre es el mismo: marginación, pobreza y discriminación”.

Para Miguel Ángel García, coordinador de la organización ambientalista Maderas del Pueblo, “el gobierno de Juan Sabines está en sintonía con la política de Felipe Calderón, a pesar de que supuestamente fue electo como candidato del Partido de la Revolución Democrática”.

El activista advierte que “lo primero que Sabines concierta con el gobierno federal es el programa Chiapas Solidario. Ahora nos anuncian que sí hay mucho analfabetismo, y conciertan con Josefina Vázquez Mota un programa que abre la posibilidad de que participe el Ejército. En otro contexto, la participación del Ejército en servicios sociales podría ser muy loable, pero en el contexto chiapaneco es muy peligroso, es una provocación para las comunidades zapatistas”.

García señala que las labores de inteligencia militar, disfrazadas de campaña contra el analfabetismo, se agregan a las otras dos líneas que desarrolla el gobernador de Chiapas, Juan Sabines: “el Plan Puebla Panamá, como lo ha manifestado Calderón, y la remunicipalización para afectar los municipios autónomos”.

Fecha de publicación: Junio 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 81